

INFORME DE SEMINARIO

Nombre: ''Análisis de la Prescripción Verificatoria en el Derecho Concursal Argentino''.

Alumno: García Galain, Horacio Urbano.

Carrera: Abogacía, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata.

Cátedra: Derecho Comercial II, Cátedra II.

Profesor a cargo de la dirección: Dra. Patricia Ferrer.

Fecha de entrega: 11 de Diciembre de 2009.

INTRODUCCIÓN

Soy estudiante de Abogacía, de la prestigiosísima U.N.L.P., y ello me enorgullece plenamente. En oportunidad de sumergirme al estudio de la materia Derecho Comercial II, que fuera la número 22 que preparase en condición Libre, descubrí la importancia y significancia que revisten los procesos concursales en la vida jurídica, tanto para la práctica (como ejercicio efectivo de la praxis judicial), como en la órbita conceptual, propia de un intérprete del Derecho, tal el caso del estudiante. Comprendí en ese entonces, que en la referida materia encontraría una suerte de cierre analítico para muchos conocimientos que había adquirido previamente en el decurso de mi estudio, los que aisladamente, no me proveían respuestas a todas las hipótesis que se me planteaban. Así, supe que en los concursos (en su definición amplia), se me explicaría con sentido de completitud, la etapa final del trayecto jurídico de ciertos derechos, en particular los personales.

Fue tan pronunciado mi deseo de llegar a entender cabalmente qué posición ostentaban tales procesos en el mundo del Derecho, que ahondé mentalmente en cuestiones que iban un tanto más allá de los planteos propios de un estudiante, ingresando prácticamente a la categoría de un pensador del Derecho. En definitiva, ahora entiendo que ello sí es normal en la etapa estudiantil, a la vez de ser saludable, en tanto se cuente con verdadero interés por el Derecho y sus implicancias.

Me hice preguntas que no podía contestar de modo inequívoco, y ello me llevó a darme cuenta que una vez estudiados los contenidos que la materia me exigía, aquellas dudas subsistentes no eran sino las mismas que eventualmente podían atender juristas de la mayor talla. Ello me inquietó, y mantuve la iniciativa, hasta encontrar el marco exacto para darle curso a una

investigación de rigor. El momento llegó ahora, en ocasión de preparar mi Seminario.

Mi interés hoy, está puesto específicamente en el análisis profundo de un planteo que surge en mí, en virtud de una norma legal en concreto, cual es el art. 56 de la Ley de Concursos y Quiebras (en adelante LCQ), Ley Nacional N° 24.522 (con la reforma de la ley 26.086), perteneciente al ordenamiento jurídico de la República Argentina. Dicha norma, alcanzada por la reforma del año 2006, trata el tema de la que en principio llamaremos “prescripción concursal”. En su virtud, la importancia del precepto queda expuesta preliminarmente, en razón de ya poder comprenderse que como instituto de Derecho, ajustado al caso concreto, han de inferirse de él sustanciales consecuencias en su aplicación. Pero en particular, debo aclarar que la naturaleza de este trabajo no es la meramente expositiva, (que en tanto finalidad, se ve satisfecha en el tratamiento y explicación de un tema), sino que lo que me propongo es presentar un tema controvertido hasta hoy, aun por autores y órganos jurisdiccionales.

En concreto, el objeto de estudio del presente, es la acción de verificación tardía, en relación con la/s acción/es individual/es que posea el acreedor antes de la presentación en concurso preventivo de su deudor, desde la óptica de la aplicación de la prescripción del art. 56 LCQ, lo que implica el análisis uno a uno de los tópicos que resultan insoslayables para poder abordar el tema en su todo. El núcleo más íntimo de mi investigación es la presentación de los plazos del art. 56 LCQ como la fuente legal de un nuevo supuesto de extinción de las obligaciones en el ordenamiento argentino. Como en la sección correspondiente se explica, en la búsqueda de un entendimiento acabado y por tanto cierto de la extensión total del tema, encuentro divergencia entre lo que puede calificarse una postura hermenéutica habitual y la mía. Entonces ello me lleva a indagar en las restantes fuentes del Derecho aplicables, para ver si mi idea originaria

encuentra conexión con la de otros intérpretes; o si me hallo solo en ella; o si luego de investigar, la misma cae en mi, y llego a una idea distinta, pero no a ciegas, sino por el procedimiento de la crítica y la formación de una nueva convicción sincera.

O sea, no solo voy a desarrollar temas, sino que voy a presentar posturas, teorías y choque de pareceres, en relación a elementos que integren la órbita de la norma, lo que me lleve a poder encontrar mi propia posición frente al debate.

Mi propósito es recorrer el camino del intérprete, que me haga formular hipótesis y aun desistir de ellas al comprobar que no eran reales, y por tanto reemplazarlas por nuevas ideas, logradas, y consensuadas.

Entiendo que el Derecho, en tanto ciencia social, no solo autoriza, sino requiere el mantenimiento vivo de la duda, y el interés por la obtención de más lejanos y mejores horizontes.

La presentación del tema tendrá lugar en el acápite denominado “Hipótesis”, y el esquema que se seguirá para su tratamiento es el de plantear la polémica, las teorías interpretativas de la parte pertinente de la norma, el estudio pormenorizado de las fuentes del Derecho que permitan abordar el tema, (todo ello con el aporte de conceptos y datos necesarios, que admitan un seguimiento de los desarrollos por parte del lector, sin necesidad de recurrir a obras externas), arribando posteriormente a conclusiones preliminares, y a la estimación final del tema, que será mi reflexión, en función de lo expuesto en el devenir del informe.

Invito al lector a predisponerse para ingresar al trabajo, sugiriendo una lectura reflexiva, y crítica, que le permita no conformarse con lo planteado por mí en sí mismo, sino que pueda generar una postura, que al llegar a la etapa conclusiva lo autorice a leer mis ideas, desde una visión propia, lo que habrá de realzar la importancia de la realización del presente.

HIPÓTESIS

En el presente capítulo presento al lector la hipótesis que ha de gobernar el desarrollo de esta tesis. Como lo dejé dicho anteriormente, comprendo que el art. 56 LCQ, es sumamente trascendental en su aplicación al caso concreto, porque de asumirse una postura u otra respecto de él, indefectiblemente ha de darse lugar a muy disímiles conclusiones, las que entonces derivan en consecuencias de diversa índole para el sujeto de derecho, que es quien me interesa en tanto ultimo destinatario de lo justo.

En la sección inmediata posterior, aportaré ciertos datos técnicos jurídicos relativos al Derecho Concursal, indispensables para dar integridad a la obra, (capítulo que deberá ser entendido como íntimamente ligado al presente, pero que lo presento aparte por tener una naturaleza esencialmente descriptiva y no argumentativa).

Abordando lo concerniente a este capítulo, digo:

El art. 56 LCQ, desde el año 2006 (año en que se reforma el mismo por la ley 26.086), presenta el siguiente texto:

“Artículo 56: Aplicación a todos los acreedores. El acuerdo homologado produce efectos respecto de todos los acreedores quirografarios cuyos créditos se hayan originado por causa anterior a la presentación, aunque no hayan participado en el procedimiento.

También produce iguales efectos respecto de los acreedores privilegiados verificados, en la medida en que hayan renunciado al privilegio.

Son absolutamente nulos los beneficios otorgados a los acreedores que excedan de lo establecido en el acuerdo para cada categoría.

Socios solidarios. El acuerdo se extiende a los socios ilimitadamente responsables, salvo que, como condición del mismo, se estableciera mantener su

responsabilidad en forma más amplia respecto de todos los acreedores comprendidos en él.

Verificación tardía. Los efectos del acuerdo homologado se aplican también a los acreedores que no hubieran solicitado verificación, una vez que hayan sido verificados.

El pedido de verificación tardía debe deducirse por incidentes mientras tramite el concurso o, concluido éste, por la acción individual que corresponda, dentro de los dos años de la presentación en concurso.

Si el título verificadorio fuera una sentencia de un juicio tramitado ante un tribunal distinto que el del concurso, por tratarse de una de las excepciones previstas en el artículo 21, el pedido de verificación no se considerará tardío, si, no obstante haberse excedido el plazo de dos años previsto en el párrafo anterior, aquél se dedujere dentro de los seis meses de haber quedado firme la sentencia.

Vencidos esos plazos prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros acreedores como del concursado, o terceros vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de prescripción sea menor.

Cuando la verificación tardía tramite como incidente durante el concurso, serán parte en dicho incidente el acreedor y el deudor, debiendo el síndico emitir un informe una vez concluido el período de prueba.

Los acreedores verificados tardíamente no pueden reclamar de sus coacreedores lo que hubieren percibido con arreglo al acuerdo, y el juez fijará la forma en que se aplicarán los efectos ya ocurridos, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones". (Destaco que el resaltado de ciertas partes, atiende a mi intención de mostrar al lector los pasajes que conciernen a esta obra de modo primordial).

Como se advierte, el mismo regula (dentro del estudio de los efectos del acuerdo homologado), el trámite de la verificación tardía, en el marco del concurso preventivo, pues es en dicha sección donde la norma se ubica.

(Toda definición de los institutos a los que me refiero, será realizada en el apartado pertinente).

Así, es objeto de la norma, proveer al intérprete (llámese abogado interviniente en el proceso, juez, o bien la parte misma), la información de carácter obligatorio (origen legal), que le permita conocer cómo hace un sujeto de derecho para ingresar al proceso concursal en carácter de acreedor, en miras de hacer valer un crédito de causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo del deudor (art. 32 LCQ), pero cuando ya se ha operado el plazo que la misma ley da (estableciendo que el juez lo determine) para configurar lo que se denomina la “verificación tempestiva”.

Entonces, (en el conocimiento desde ahora de la existencia de numerosos elementos necesarios de considerar para comprender esta idea que se plantea), eso significa en términos inequívocos, que la vida jurídica del derecho del acreedor en esa etapa del concurso preventivo, ha de estar reglada por el precepto del art. 56.

Pero lo que más me interesa ahora, es abocarme al análisis de la que la norma llama “prescripción”, puesto que ella es la que en mayor medida determinará la suerte de esa existencia crediticia en el concurso, en tanto no se haya operado.

Así, son los siguientes, los interrogantes que surgen de la lectura lineal de la norma:

- 1) ¿Son los plazos del art. 56 LCQ de caducidad o de prescripción?
- 2) ¿Son aplicables a sus plazos las disposiciones del derecho de fondo concernientes a la suspensión e interrupción de los términos?
- 3) ¿Es aplicable esta norma tanto al concurso preventivo como a la quiebra?

- 4) ¿En qué circunstancias se puede hallar un acreedor ante la aplicación del artículo?
- 5) ¿Quién/es revisten legitimación para ejercer la defensa que prevé la norma?
- 6) ¿Cuál es la finalidad de la norma?

La búsqueda de respuestas a ellos, nos lleva al entendimiento cabal de la ley, y así nos acerca a su justa aplicación. El tema reviste una clara complejidad, que hace bien interesante la investigación.

Todo buen razonamiento, goza de mayor relevancia cuando puede ser transmitido. Para ello es crucial la claridad.

Por tanto, a continuación enuncio la hipótesis del trabajo, que se presenta en estos términos:

HIPOTESIS: ‘‘El art. 56 de la LCQ crearía una nueva forma de extinción de las obligaciones: la de operarse la prescripción de la acción de verificación tardía por no alcanzar el acreedor la admisión de su crédito en el pasivo concursal dentro de los plazos legales. ‘‘

Así, planteada la misma, doy comienzo al desarrollo, el que será nexo entre esta página y la conclusión final, en la que habré de comprobar el postulado recién expuesto, o hacerlo caer, en función de los datos que arroje la investigación, y desde ya, el modo en que los evalúe y consensue.

APARTADO TÉCNICO

He de aportar en esta sección, conceptos que han de contribuir a un mejor entendimiento y por tanto aprovechamiento del presente trabajo, dado que, si bien el mismo está dirigido a un lector conocedor del Derecho Concursal, pretendo evacuar una doble necesidad:

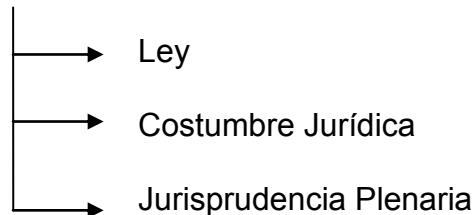
- a) Dar lugar a que se refresquen conceptos no tan frecuentes para el lector en concreto.
- b) Aun cuando quien me lea se encuentre profundamente familiarizado con ellos, permitirle utilizar las siguientes definiciones y explicaciones de corte técnico jurídico, para saber cuáles fueron las mismas que yo tuve en mente a la hora de escribir. O sea, como fuente interpretativa.

Dicho ello, veamos:

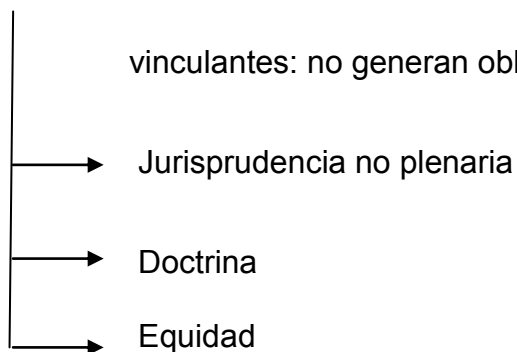
- 1) **Fuentes del Derecho:** “son aquellos entes de donde surge o brota el Derecho”. “Son los medios de expresión del Derecho” [1]. O sea, su estudio nos permite comprender que es errónea toda idea acerca de que el Derecho se limita a una de ellas (Ej.: la Ley, en nuestro sistema romanista o continental; o la jurisprudencia, en el anglosajón), sin dejar de reconocer la preeminencia que puedan ellas revestir respecto de las demás en cada caso. Entonces, para comprender cabalmente un tema o instituto jurídico, habrá que estarse a lo que surja de TODAS las fuentes aplicables al caso en razón de su naturaleza. Así, me interesa sumamente refrescar la muy simple clasificación de las fuentes del Derecho en general, que distingue entre:

¹ LLAMBIAS, JORGE JOAQUIN - “TRATADO DE DERECHO CIVIL, PARTE GENERAL, TOMO I”, EDITORIAL PERROT, BA, 1995, página 49.

- Formales: son vinculantes: generan obligatoriedad en su aplicación.



- Materiales: sirven como herramienta hermenéutica, pero no son vinculantes: no generan obligatoriedad en su aplicación.



Esencial: resulta el conocer el art. 16 del Código Civil, rector en materia de fuentes (en lo concerniente a interpretación), presenta una gradación, ya que dice: ‘ ‘Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso’ ‘.

(Entiendo como no propio del objeto de este trabajo el ingresar al estudio de cada una en abstracto, sino que el mismo se hará en referencia a los temas que nos hemos planteado, en oportunidad de su tratamiento).

2) Tratamiento que se le da al instituto de la prescripción en el ordenamiento jurídico argentino (parte pertinente):

- Desde el Código Civil: es en este cuerpo legal donde debemos hacer la primer parada en la idea de analizar la prescripción. Ello es así ya que el Derecho Civil, (en tanto rama del Derecho), se define por exclusión, por ser aquella que trata los institutos que no

integran las demás ramas jurídicas, con lo que en definitiva es el más extenso. Además, su aplicación es de carácter supletorio en todas las demás (es decir, en defecto de regulación expresa). Es muy común advertir que las leyes especiales planteen este principio en forma manifiesta.

Por ello el Código de Comercio en su Título Preliminar dice: ‘ ‘I. En los casos que no estén especialmente regidos por este código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil’ ’. Al respecto la ley concursal, en su art. 278 dice que serán aplicables (en defecto de disposición expresa por esta ley) ‘ ‘las normas procesales de la ley del lugar del juicio que sean compatibles con las rapidez y economía del trámite concursal’ ’. Ello no obsta a la aplicación del principio de supletoriedad de la ley civil, en tanto su objeto se halla centrado en cuestiones de fondo, que al par de las procesales, toman lugar en el proceso concursal, y que pueden requerir la aplicación de preceptos extra (en uso de la regla del art. 16 C.C.).

Entonces: el Código Civil, trata el tema entre los arts. 3947 y 4041, bajo el título ‘ ‘De la adquisición y pérdida de los derechos reales y personales por el transcurso del tiempo’ ’, en su Sección Tercera.

Claramente, allí se encuentran normas que refieren a las dos formas de prescripción: la adquisitiva (ajena al estudio del presente), y la liberatoria (que es la que nos atañe). Debo aclarar que no soy partidario del estudio aislado de normas legales, y mucho menos del resumen de las mismas, pues considero que ello conlleva inevitable e intrínsecamente el error. Pero en este trabajo pretendo, no desarrollar un tema en forma académica, en su total extensión, sino conducir a los puntos que forman la estructura argumentativa del mismo. Así algunas normas destacadas al respecto son:

Art. 3947: ‘ ‘Los derechos reales y personales se adquieren y se pierden por la prescripción. La prescripción es un medio de adquirir un derecho, o de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo’ ‘.

Art. 3949: ‘ ‘La prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere’ ‘.

Art. 3956: ‘ ‘La prescripción de las acciones personales, lleven o intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación’ ‘.

Nota al art. 3961: ‘ ‘... La prescripción de las acciones personales, está fundada únicamente en la negligencia del acreedor para perseguir su derecho, pues el deudor no puede ignorar la existencia de su obligación... los que tienen derechos condicionales o a plazo, pueden como medida conservatoria, entablar una demanda que interrumpa la prescripción’ ‘.

Deseo destacar que es mi tío, el Dr. Guillermo D. Dupleix, quien me enseñó que ‘ ‘quien no lee las notas, no conoce el Código Civil’ ‘.

Él supo aprenderlo de un destacado profesor suyo en la U.N.L.P.

Art. 3962: ‘ ‘La prescripción debe oponerse al contestar demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente oponerla’ ‘.

Art. 3964: ‘ ‘El juez no puede suplir de oficio la prescripción’ ‘.

Nota al art. 3964: ‘ ‘...Esta inacción o posesión no pueden ser conocidas y verificadas por los jueces, mientras no sean alegadas y probadas por el interesado. El juez, supliendo de oficio la prescripción, supliría hechos que debían demostrarse, y los jueces no pueden suplirlos de oficio. A más, muchas veces la conciencia puede resistir el oponer la prescripción. El que sabe que no ha pagado una deuda, puede no querer oponer la prescripción, y esta resultaría opuesta por el juez, si no admitiere la demanda del acreedor...’ ‘.

A continuación la ley se exploya sobre la suspensión y la interrupción de la prescripción, lo que trataremos en la parte pertinente directamente, para no ser redundante.

Art. 4017: ‘ ‘Por solo el silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley, queda el deudor libre de toda obligación. Para esta prescripción no es preciso justo titulo, ni buena fe ‘ ‘.

Art. 4019: plantea casos puntuales de acciones que nunca prescriben.

- Desde el Código de Comercio: es el Título XIV, ‘ ‘De la Prescripción Liberatoria’ ‘ el que nos interesa. Arts. 844 a 855.

Veamos:

Art. 844: ‘ ‘La prescripción mercantil está sujeta a las reglas establecidas para las prescripciones en el Código Civil, en todo lo que no se oponga a lo que disponen los artículos siguientes ‘ ‘.

Art. 846: ‘ ‘La prescripción ordinaria en materia comercial, tiene lugar a los diez (10) años, sin distinción entre presentes y ausentes, siempre que en este Código o en leyes especiales, no se establezca una prescripción mas corta ‘ ‘.

Más adelante el código clasifica acciones en particular, en función de los plazos de prescripción que se les asigna.

-En la LCQ: en la misma, es común encontrar plazos que manifiestamente se determinan como de caducidad (Ej. el del art. 163, en referencia al derecho a solicitar la extensión de la quiebra; o el del art. 60, en referencia al derecho a pedir la declaración de nulidad del acuerdo homologado por parte de un acreedor). De no hacerlo de modo expreso, toda vez que la ley se refiere a un plazo en el cual ejercer un derecho, ese es un plazo de caducidad.

Pero es curioso saber que apartándose del concepto defendido a ultranza por todo estudiante, (en virtud del cual la caducidad refiere a derechos, y la prescripción a acciones), la LCQ hace un uso indistinto de los términos, y así, por ejemplo, en el art. 38 dice: ‘ ‘Las acciones... caducan a los noventa días ‘ ‘.

Ello creo que no es un dato menor a la hora de considerar que el art. 56, que es nuestro punto central, dice textualmente ‘ ‘prescriben las acciones del acreedor ‘ ‘. Ya volveremos al tema en su momento.

3) **Análisis necesario de la evolución legal a través de las leyes 19.551, 24.522 y 26.086:**

Hasta el año 1995, fue la ley nacional 19.551 la que estableció el régimen de los concursos. (Su art. 67 en la parte pertinente decía: ‘ ‘Verificación Tardía: los efectos del acurdo homologado se aplican también a los acreedores que no hubiesen solicitado verificación, una vez que hayan sido verificados o declarados admisibles. Estos acreedores no pueden reclamar de sus coacreedores lo que hubieren percibido con arreglo al acuerdo, y el juez fijará la forma en que se aplicarán los efectos ya ocurridos, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones ‘ ‘).

En ese año, se dicta la ley 24.522, (actual), la que produjo mucho más que una modificación al régimen, un efectivo reemplazo del mismo. Ella incluso estableció las pautas para ordenar su aplicación a los procesos en trámite.

En consideración al objeto del presente informe, presento a continuación 4 citas doctrinarias, en referencia a la mutación del régimen, en lo relativo a prescripción.

“La problemática de la verificación tardía, aparece regulada por el art. 56 de la ley 24.522, el cual, en gran parte de su contenido, conserva la sustancia del art. 67. de la vieja ley 19.551. Sin embargo y yendo a lo técnico, modifica el tercer párrafo de la redacción originaria de aquel, incorporando novedades, alguna de las cuales – como la referida a la “prescripción” de las acciones – terminan con una de las polémicas mas estériles que animó a nuestro derecho concursal”.^[2]

² **MARTORELL**, ERNESTO EDUARDO, “TRATADO DE CONCURSOS Y QUIEBRAS, TOMO II B”, DEPALMA, BA, 2001. Página 669.

“¿Hasta cuándo puede presentarse un acreedor no concurrente en la etapa inicial? La ley 19.551 no establecía ninguna pauta, por lo que se suponía que podía hacerlo mientras no estuviera prescripta la acción que correspondía a su crédito. Y si el concurso había concluido y la acción no estaba prescripta, el acreedor podía de todos modos ejercer esa acción; en otras palabras el concurso no era causa de extinción de las obligaciones no verificadas, pero de todos modos el acreedor quedaba sometido a los efectos del acuerdo... la ley vigente... fijó un plazo de prescripción para las verificaciones tardías”.^[3]

“... durante la vigencia de la ley 19.551, se acostumbraba diferir el tratamiento de las verificaciones tardías hasta después de la junta. Se alegaban entonces razones de conveniencia para el tribunal y especialmente para la sindicatura, ocupados en otros menesteres.

Luego de la sanción de la ley 24.522, la estructura general del proceso se vio alterada por la irrupción del denominado periodo de exclusividad...”^[4]

“Durante el régimen de la ley 19.511, los acreedores tenían la facultad de presentarse a verificar mientras el concurso estuviera en trámite. Y ello así ocurría mientras este no se encontrara cumplido. El art. 59 vino a alterar ese régimen, estableciendo una conclusión anticipada con ciertos efectos parciales.

En el ordenamiento anterior, entonces, concluido el concurso, cabía interponer acciones individuales (aunque esto se cuestionó severamente), y regía la prescripción atinente a cada tipo de acción en los términos contemplados en el Código Civil y en el Código de Comercio”.^[5]

Creo que con ellos queda plenamente explicada la evolución que me interesa plantear.

Pero hoy día, desde el mes de abril de 2006, debemos ampliar el análisis, pues fue la sanción de la ley 26.086, la que trajo novedades.

³ **RIVERA, JULIO CESAR**, “INSTITUCIONES DE DERECHO COMERCIAL TOMO I CONCURSO”, RUBINZAL - CULZONI, STA. FE, 2003, páginas 413, 414.

⁴ **VAISER, LIDIA** - “VERIFICACION TARDIA EN EL CONCURSO PREVENTIVO” EN “DERECHO CONCURSAL” ROUILLON, ADOLFO A. N. (DIRECTOR) -, LA LEY 2004, página 883.

⁵ **VAISER, LIDIA** - “VERIFICACION TARDIA EN EL CONCURSO PREVENTIVO” EN “DERECHO CONCURSAL” ROUILLON, ADOLFO A. N. (DIRECTOR) -, LA LEY 2004, página 889.

Así, esta la ley (que es la más reciente reforma a la LCQ), se compone de solo 10 artículos. Plantea importantes cambios, como la modificación del art. 14 inc. 11, (que suprimiendo la constitución de un comité provisorio de acreedores - como contenido esencial de la resolución de apertura del concurso preventivo -, deroga tal instituto).

Pero en lo atinente a nuestro objeto, es la modificación al art. 56 la que nos ocupa. Así, los cambios son:

- En el 5to. párrafo, se suprime en el final, la expresión ‘ ‘o declarados admisibles’ ’
- En el 6to. párrafo, se agrega este fragmento: ‘ ‘ Si el título verificadorio fuera una sentencia de un juicio tramitado ante un tribunal distinto que el del concurso, por tratarse de una de las excepciones previstas en el artículo 21, el pedido de verificación no se considerará tardío, si, no obstante haberse excedido el plazo de dos años previsto en el párrafo anterior, aquél se dedujere dentro de los seis meses de haber quedado firme la sentencia.’ ’

Ello da cuenta de una sustancial modificación. Pues, hasta el 2006, el único plazo, llamémoslo de ‘ ‘prescripción’ ’ (ello porque su naturaleza será desarrollada como tópico más adelante), era el de los dos años desde la presentación en concurso preventivo por parte del deudor. Hoy el mismo se mantiene en vigencia, solo que se agrega una nueva estipulación, cual es la de permitir a las personas (acreedores), que por aplicación del art. 21 LCQ decidan o deban continuar sus procesos en trámite ante el juez natural, y deban en consecuencia aguardar la obtención de una sentencia (que deberá acoger su pretensión), para recién allí presentarse en el proceso concursal peticionando la verificación de su acreencia, hacerlo no regidos por el plazo perentorio de los dos años, sino por uno particular que es el de los 6 meses desde que la sentencia quede firme (o sea, consentida o ejecutoriada).

Es decir, (y sobre esto se manifestó ante mí la Dra. Gabriela Boquín tras una de sus conferencias), no debe jamás entenderse que los acreedores cuentan con un plazo de 2 años y 6 meses. Eso es tanto como no leer la norma, que es clarísima al respecto. Hay dos plazos individuales de prescripción, que han de correr para cada tipo de acreedor de modo particular, encontrándose uno y otro en idéntica situación a la hora de verse frente a un plazo expirado sin haber logrado la admisión pretendida en el concurso.

Sepamos que tales plazos no corresponden a un acreedor por su identidad, sino por la acción. Así, perfectamente podría un mismo acreedor quedar sujeto al computo de ambos plazos, simultáneamente, a causa de la diferencia de las acciones entabladas (distinta causa = distinta acción = distinto crédito).

4) **Definiciones:** me interesa presentarle al lector, tal como es la finalidad de este acápite, una serie de definiciones no legales, que contribuyan a la mejor comprensión del texto. En muchos casos, se verterán otras más adelante, pero ello ha de responder a una necesaria cita del autor en tratamiento. Las mismas son:

- **Derechos Subjetivos:** ‘ ‘ ‘Facultad reconocida por el ordenamiento jurídico para exigir de las demás personas un determinado comportamiento... Los derechos subjetivos se dividen en *patrimoniales* y *extrapatrimoniales*, según tengan o no valor pecuniario. Los derechos extrapatrimoniales se subdividen en *derechos de la personalidad* y *derechos de familia*. Los derechos patrimoniales se dividen en derechos *reales*, *derechos personales o de crédito* y *derechos intelectuales*.’ ‘ [6]

⁶ LLAMBIAS, JORGE JOAQUIN - ‘‘TRATADO DE DERECHO CIVIL, PARTE GENERAL, TOMO II’’, EDITORIAL PERROT, BA, 1997, páginas 157 y 158.

- **Derechos patrimoniales:** ‘ ‘son aquellos que sirven para la satisfacción de las necesidades económicas del titular y que son apreciables en dinero. Se dividen en dos categorías: derechos reales y derechos personales. En el Derecho moderno se debe agregar una tercera categoría que son los derechos intelectuales’ ‘. [7]
- **Derecho personal:** ‘ ‘es la facultad que se tiene de exigir de otra persona el cumplimiento de una obligación’ ‘. [8]
- **Obligación:** vínculo jurídico, en virtud del cual, una persona (deudor), queda constreñido al cumplimiento de una prestación debida en favor de otra persona (acreedor).
- **Acción:** ‘ ‘es la facultad que corresponde a una persona para requerir la intervención del Estado a efecto de tutelar una situación jurídica material.’ ‘ [9]
- **Fuero de atracción:** Derecho de origen legal, de un órgano jurisdiccional, para ejercer competencia sobre contiendas que se encuentran naturalmente fuera de su jurisdicción.¹⁰
- **Concurso Preventivo:** es un proceso judicial, que ‘ ‘...como procedimiento no liquidativo, implica la convocación o el llamamiento de todos los acreedores ante el requerimiento del deudor insolvente, con el objeto de lograr un acuerdo que pueda eliminar a cesación de pagos y permita sanear la empresa. Apunta a la formalización de un acuerdo entre el deudor y los acreedores, que se efectiviza cuando se logra determinada mayoría y es homologado por el juez’ ‘. [11]

⁷ **BORDA**, GUILLERMO A. – “TRATADO DE DERECHO CIVIL, PARTE GENERAL II”, EDITORIAL PERROT, BA, 1991, páginas 22 y 23.

⁸ **BORDA**, GUILLERMO A. – “TRATADO DE DERECHO CIVIL, PARTE GENERAL II”, EDITORIAL PERROT, BA, 1991, página 23.

⁹ Definición de Acción por dada por **ALSINA**, y citado por **LEVENE**, RICARDO - “MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL (2º EDICION, TOMO I)”, DEPALMA, AVELLANEDA, BA, 1993, Pág. 154.

¹⁰ Robb's Diccionario de Términos Legales, Google.

¹¹ **ESCUTI**, IGNACIO A. Y **JUNYENT BAS**, FRANCISCO - “INSTITUCIONES DE DERECHO CONCURSAL”, ALVERONI EDICIONES, CORDOBA, 1998, página 134.

- **Quiebra:** es el proceso judicial, que ‘ ‘provoca el desapoderamiento del deudor, tras lo cual se debe proceder a la liquidación de sus bienes y a la distribución del producto de dicha liquidación entre los acreedores a prorrata de sus acreencias’ ’. [12]
- **Verificación de créditos:** es el procedimiento único y necesario para lograr por parte de un acreedor, el reconocimiento de su crédito en el marco de un proceso concursal, (quiebra o concurso preventivo de su deudor), al efecto de poder hacerlo efectivo en el mismo. Destaca José Antonio Di Tullio, que ‘ ‘es un verdadero proceso de conocimiento, que tiene por finalidad declarar la calidad de acreedor de los peticionantes, con relación al deudor y frente a los demás acreedores, fijando la posición relativa entre ellos, para otorgarles el derecho a participar en el acuerdo (en caso de concurso preventivo), y en el cobro del dividendo falencial que les corresponda en la distribución con arreglo a su graduación (en hipótesis de quiebra), contemplándose en ese ámbito, todas las etapas propias de los procesos, desde la introductiva, hasta la decisoria con el consiguiente efecto de cosa juzgada. Se trata de un momento necesario e ineludible, y apunta a la determinación de la masa pasiva a través de la verificación, en formas simples y rápidas, de los créditos singulares.’ ’ [13]
- **Verificación tardía:** es el procedimiento de verificación de créditos, que tiene lugar en un proceso concursal tras la expiración del plazo de verificación tempestiva, y antes de operada la prescripción de la correspondiente acción.

¹² **MARTORELL, ERNESTO EDUARDO**, ‘‘TRATADO DE CONCURSOS Y QUIEBRAS, TOMO II B’’, DEPALMA, B.A., 2001.

¹³ **DI TULLIO, JOSE ANTONIO** - ‘‘TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS’’, LEXIS NEXIS , GERLI, BA, ARG., 2006, páginas 1,2,3.

- Para los siguientes tres conceptos, voy a seguir a Oscar A. Galíndez [¹⁴]. Así:

-Créditos Verificados: “son aquellos que no acusan observaciones del deudor o de algún acreedor, cuentan con dictamen favorable del síndico, y el juez los declara tales si lo estima procedente”.

-Créditos Admisibles: “son aquellos que exhiben observaciones y resultan desaconsejados por el síndico, o que han sido objeto de cuestionamientos por el deudor, o por algún acreedor, pero cuentan con dictamen favorable. El juez desestima las objeciones, y admite la pretensión”.

-Créditos Inadmisibles: “Son los que se encuentran en la misma situación anterior, pero el juez decide acoger las objeciones y rechaza la pretensión. Debe reputarse incluida en esta última categoría el crédito que no registrar cuestionamiento de los legitimados ni dictamen adverso del síndico, pero que el juez no estima procedente admitir”.

Una vez que el juez dicta la sentencia que declara el crédito “verificado”, entonces el acreedor pasa a ser concurrente.

- **Acción individual:** “es la que corresponde a la naturaleza del título con que se acciona, o crédito que se pretende hacer valer”. [¹⁵]

Aclaración: En la materia que tratamos, hay dos “acciones individuales” a las que nos hemos de referir. Ambas reciben idéntica denominación, pero su naturaleza es diversa. Nunca debemos confundirlas, pues ello obstaría al buen entendimiento de lo planteado en este desarrollo.

¹⁴ **GALINDEZ, OSCAR A.** - “VERIFICACION DE CREDITOS, 3º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA”, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA S.R.L., BS. AS., 2001, páginas 254 y ss.

¹⁵ **RIVERA, JULIO CESAR,** “INSTITUCIONES DE DERECHO COMERCIAL TOMO I CONCURSO”, RUBINZAL - CULZONI, STA. FE, 2003, página 411.

Por un lado está la acción individual que es propia de un derecho personal determinado, la cual tiene su origen en el que el Juez Hitters denomina “Derecho Fondal” (fallo “Reversat”). Ejemplo: la acción de responsabilidad civil contractual, en virtud de la cual por incumplimiento de un contrato, la parte incumplida demanda por daños. (Para definirla, en nada tenemos que atender al régimen concursal).

Por otro lado, está la acción individual de verificación tardía, que tiene una única fuente legal (art. 56 LCQ), y es una sola, (no hay dos de ellas). Su única función es la de permitir a un acreedor de deudor concursado, una vez concluido este, pero no prescripta la misma (en función de los plazos de la norma citada), ejercitarla para intentar la verificación de su acreencia (en el marco concursal, -por supuesto-, lo que está implícito en la competencia que ejerce el mismo juez del concurso).

O sea: una vez abierto el concurso preventivo, la línea del tiempo es esta: desde ese momento (considerando que no exista proceso en trámite), el acreedor se ve impedido de ejercitar su acción de derecho fondal –art. 21 LCQ- (salvo el laboral). Por tanto su único camino es la insinuación. Tiene tres oportunidades para hacerlo, cada una de modo distinto:

- 1) **Tempestivamente**: (plazo del art. 14 inc. 3 LCQ): por pedido ante el síndico.
- 2) **Tardíamente**:
 - A) *durante la tramitación del concurso*: por incidente.
 - B) *concluido el concurso*, por la acción individual de verificación tardía, (que no es indefinida en el tiempo, sino que está sujeta al plazo de prescripción que le corresponda en función del art. 56 LCQ).

Entonces, una vez expirado dicho plazo, esa acción prescribe, y por tanto ya no hay forma de que el acreedor se insinúe en el marco del concurso preventivo de su deudor. (Cesa el fuero de atracción).

Creo muy pragmático el comentario que hace Javier Armando Lorente [16], en referencia a los tres “castigos” que padece el acreedor como consecuencia de su presentación extemporánea en el proceso concursal (en lugar de la tempestiva), y por tanto la comparto con el lector. Él dice:

1) su trámite de insinuación al pasivo no es extrajudicial ante el síndico (la denominada fase necesaria por Maffía), sino que debe promover un incidente concursal (arts. 280 y s.s. LCQ).

2) no participa del cómputo de las mayorías que aprueban el o los acuerdos preventivos, por lo que pierde poder de negociación de las propuestas y, en definitiva, debe soportar los términos de aquellos acuerdos preventivos que el deudor alcanzó con las mayorías del art. 45 LCQ al ser excluido de formar la voluntad colectiva que decide la suerte de la propuesta.

3) soporta –en principio– las costas del incidente de verificación tardía.

Con los conceptos vertidos, doy entrada al análisis que nos ocupa en la presente obra.

¹⁶ **LORENTE**, JAVIER ARMANDO, “LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS TOMO I”, EDICIONES GOWA PROFESIONALES, Haedo, B.A., Arg., 2000, página 590 y ss.

TÓPICOS

A continuación, presento al lector cada uno de los tópicos que he de desarrollar para conformar la conclusión que corrobore o descarte la hipótesis planteada.

Cada uno será tratado en capítulo propio, con el esquema que sea conforme a la naturaleza de la cuestión abordada.

Respecto de las *fuentes del Derecho* a analizar, destaco que en este caso, el estudio se centra en la doctrina y la jurisprudencia, dado que lo atinente a nuestra investigación guarda relación únicamente con tales fuentes, (con lo que no procede, por ej. el estudio de la costumbre jurídica), y sí el exegético de la norma (Ley) que sirve de epicentro.

Con todo, son esas tres fuentes las que me asisten aquí.

Finalmente, como último capítulo, veremos citas que si bien no pertenecen directamente a ninguno de los anteriores siete puntos, son importantes de considerar para dar la completitud deseada por mí para la presente obra.

CAPÍTULO I

LOS PLAZOS DEL ART. 56 LCQ COMO DE CADUCIDAD O DE PRESCRIPCIÓN.

El presente planteo se concreta en virtud de encontrarse en la doctrina posturas que no dejan de considerar la idea de la naturaleza de los plazos del art. 56 como de caducidad, (no necesariamente alegando que lo sean, pero sí planteando la conveniencia de que lo fuesen). Creo importante abordar el tema, pues resulta sumamente interesante leer los argumentos dados desde ambas posturas al respecto.

Veo imprescindible el apelar al pensamiento del destacado Jorge Joaquín Llambías, cuando dice: “En cuanto a la prescripción, se han sostenido dos opiniones opuestas. Para la primera, expuesta por Pothier, y seguida por Aubry y Rau, Merlin, Guillouard, Baudry-Lacantiniere y Tissier, y entre nosotros por Salvat y Lafaille, la prescripción llamada extintiva o liberatoria, no extingue el derecho sino la acción judicial correlativa. De ahí que el derecho subsista, si bien reducido a la mínima eficiencia de la obligación natural, cuyo título goza de estas solas facultades: 1) retener la prestación pagada espontáneamente por el deudor (arts. 515 y 516); 2) garantizar la obligación natural con fianzas, hipotecas, etc., que son exigibles, pese a no serlo en derecho principal (art. 518). Para la segunda opinión... la obligación natural solo tiene una existencia extrajudicial, pero no es obligación válida, pero no es obligación válida y legalmente subsistente... Por nuestra parte, entendemos que la primera opción es exacta.”^[17]

Sentado ello, entremos al análisis de cada visión, y posteriormente realizaré una conclusión sobre el tópico.

1) Doctrina:

¹⁷ LLAMBIAS, JORGE JOAQUIN - “TRATADO DE DERECHO CIVIL, PARTE GENERAL, TOMO II”, EDITORIAL PERROT, BA, 1997, pág. 584.

A) Como plazo de Prescripción:

- ‘ ‘La prescripción supone la pérdida de la acción por el transcurso del tiempo y frente a la inactividad o silencio del deudor o el acreedor. El plazo puede ser suspendido (art. 3983 C.C., salvo en las obligaciones de carácter comercial en virtud del art. 854 del C. Com.), dispensado (art. 3980 C.C. y 845 C. Com.) o interrumpido (art. 3998 C.C.), y no corresponde la aplicación de oficio de la sanción prescriptiva por parte del tribunal interviniente. Asimismo debe destacarse que la prescripción no extingue definitivamente la obligación, sino que esta deviene inexigible civilmente, renaciendo como obligación natural (art. 515, inc. 2 C.C.). (Los subrayados son míos).

La caducidad tiene como efecto la pérdida del derecho por el mero transcurso del tiempo y puede ser declarada de oficio, opera de pleno derecho, siendo la perentoriedad del plazo característica fundamental de esta figura que no admite, en consecuencia, interrupción alguna que pueda alterar su curso temporal.

El proyecto encomendado por el Ministerio de Economía que a la postre se convirtió en la actual ley 24.522, incluyó el instituto de la prescripción concursal, a diferencia del que fuera impulsado por el Ministerio de Justicia que proponía la caducidad de los créditos no insinuados en el pasivo dentro del término previsto por la ley. Las diferencias son sustanciales ya que ambos institutos presentan consecuencias jurídicas distintas. El texto legal que surge del art. 56 no ofrece dudas en cuanto a que el término previsto es de prescripción, en los términos de la legislación de fondo y con los mismos alcances y efectos’ ‘. [18]

- ‘ ‘La Ley instituye un plazo de prescripción, y no de caducidad, como es el supuesto del plazo establecido para la articulación del incidente de revisión (art. 37 LCQ), o el previsto para la interposición de la acción de revocación de sentencia verifictoria por causa de dolo (art. 38 LCQ), en donde aunque no fuera invocada la mentada caducidad por el interesado,

¹⁸ **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - ‘ ‘TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS’ ‘, LEXIS NEXIS, Gerli, B.A., Arg., 2006, páginas 127 y 128.

por la propia naturaleza del instituto, el juez puede hacerlo jugar de oficio.´´ [19]

- Conforme con esta idea: Escuti y Junyent Bas [20]; Galíndez [21]; Iglesias [22]; Martorell [23]; Lorente [24]; Martínez de Petrazzini [25]; Rivera [26]; Vaiser [27]; Fassi y Gebhardt [28]; Rouillón [29]; Maure y Celano [30] y Carnero y De Gregorio [31].

¹⁹ **GALINDEZ**, OSCAR A. - “VERIFICACION DE CREDITOS, 3º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA”, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA S.R.L., BS. AS., 2001, página 272 y 273.

²⁰ **ESCUTI**, IGNACIO A. Y **JUNYENT BAS**, FRANCISCO - “INSTITUCIONES DE DERECHO CONCURSAL 2”, ALVERONI EDICIONES, CORDOBA, 2002, página 83.

²¹ **GALINDEZ**, OSCAR A. - “VERIFICACION DE CREDITOS, 3º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA”, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA S.R.L., BS. AS., 2001, páginas 190, 194, 272 y ss, 339, entre otras.

²² **IGLESIAS**, JOSE ANTONIO - “CONCURSOS Y QUIEBRAS. LEY 24.522 COMENTADA”, DEPALMA, B.A., 1995, página 113.

²³ **MARTORELL**, ERNESTO EDUARDO, “TRATADO DE CONCURSOS Y QUIEBRAS, TOMO II B”, DEPALMA, B.A., 2001, página 694.

²⁴ **LORENTE**, JAVIER ARMANDO, “LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS TOMO I”, EDICIONES GOWA PROFESIONALES, 2000, página 599 y ss.

²⁵ **MARTINEZ DE PETRAZZINI**, VERONICA F., “LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS”, EDICIONES MACCHI, 1997, pág. 102.

²⁶ **RIVERA**, JULIO CESAR, “INSTITUCIONES DE DERECHO COMERCIAL TOMO I CONCURSO”, RUBINZAL - CULZONI, 2003, página 413 y ss.

²⁷ **VAISER**, LIDIA - “VERIFICACION TARDIA EN EL CONCURSO PREVENTIVO” EN “DERECHO CONCURSAL” ROUILLON, ADOLFO A. N. (DIRECTOR) -, LA LEY 2004, páginas 883, 889.

²⁸ **FASSI**, SANTIAGO Y **GEHBARDT**, MARCELO - “CONCURSOS Y QUIEBRAS 7 º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA”, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA, BS. AS., 2000, página 179.

²⁹ **ROUILLON**, ADOLFO A. N. - “REGIMEN DE CONCURSOS Y QUIEBRAS LEY 24522,13 º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA”, ASTREA, BS. AS., 2004, página 146.

³⁰ **MOURE**, GRACIELA CRISTINA Y **CELANO**, JUAN CARLOS - “CONCURSO PREVENTIVO: TRATAMIENTO IMPOSOTIVO DE LAS QUITAS RESULTANTES DEL ACUERDO HOMOLOGADO”, JORNADAS DE DERECHO CONCURSAL, MENDOZA, Google, 2002.

³¹ **CARNERO**, SILVIA ALICIA Y **DE GREGORIO**, SILVANA - “ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE APLICAR LA PRESCRIPCION DEL ART. 56 LCQ TRATADOSE DE UN PROCESO DE DAÑOS QUE SE ENCONTRABA EN ETAPA PROBATORIA CUANDO EL DEMANDADO SE PRESENTO EN CONCURSO – TODO ELLO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY 24.522 ANTES DE LA REFORMA DE LA

B) Como plazo de caducidad:

- Es Verónica Romero [³²], quien traza en la obra citada, un análisis altamente considerable, acerca de la conveniencia que revestiría que el plazo del art. 56 fuese de caducidad (aun cuando reconoce que tal como existe hoy, refiere a la prescripción).

La autora apunta que la prescripción es de interpretación restrictiva, pues siempre se opta por el régimen más favorable al acreedor y por la conservación de los actos y los negocios jurídicos. También que es de Derecho Público, razón por la cual la ley prohíbe su renuncia anticipada al derecho de alegarla cuando no hubiere sido ganada, aunque, una vez adquirida, como todo derecho, puede ser renunciada.

Respecto de la caducidad, la plantea como un modo de extinción de ciertos derechos en razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo fijado por la ley, o la voluntad de los particulares.

Señala que el Proyecto de la Comisión del Ministerio de Justicia, establecía: ‘ ‘...pasado ese lapso, caducan los derechos y acciones del acreedor, tanto respeto de los otros acreedores, como del concursado, o terceros vinculados al acuerdo’ ’. Sin embargo, el Proyecto del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, (que se convertiría en ley 24.522), sustituye el término ‘ ‘caducan’ ’ por ‘ ‘prescriben’ ’, y se extiende el plazo de seis meses a dos años,

LEY 26.086’ ’, INSTITUTO DE DERECHO COMERCIAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MAR DEL PLATA, (Comentario al fallo ‘ ‘Reversat’ ’), AZUL, Google, 2008.

³² ROMERO, VERONICA - ‘ ‘PONENCIA XI JORNADAS BONAERENSES DE JOVENES ABOGADOS, COMISION DE DERECHO COMERCIAL, PONENCIA: EL PLAZO PREVISTO EN EL ART. 56 DE LA LCQ DEBE SER DE CADUCIDAD’ ’, ZARATE – CAMPANA, Google, salthu@estudiojuridicomdp.com.ar, 2000.

modificando también el plazo a partir del cual se comienza a contar el periodo.

Entonces, tras esta breve pero muy sustancial reseña, se adentra a su teoría, y dice: ‘ ‘De conformidad con lo establecido en el art. 3956 C.C., la prescripción de las acciones personales comienza a correr desde la fecha del título de la obligación... Ahora bien, el plazo de dos años previsto por el art. 56 LCQ... se cuenta desde la presentación en concurso, fecha que por cierto nunca coincidirá con el título base, en tanto solo pueden presentarse a verificar los acreedores con título o causa anterior a la presentación... Esto implica introducir como interrogante la cuestión de la existencia de dos ‘ ‘especies’ ‘ de prescripción: a) una, que nace con el título o causa, aplicable para deudores in bonis, y puede ser de 10, 5, 2 años, 3 meses, etc., y b) Otra, que nace con la presentación del concurso para deudores concursados preventivamente, independientemente de la fecha del título, y que solo puede ser de dos años o un término menor, y que se viene a superponer a la anterior. La existencia de dos plazos diversos de un mismo instituto (prescripción), o por lo menos, con distinto punto de arranque, evidentemente conspira contra la seguridad jurídica ‘ ‘. Es sorprendente ver con qué claridad la autora distingue las dos acciones y sus correspondientes plazos prescriptivos. Fíjese el lector, que el tema no surge sino desde el debate acerca de la naturaleza jurídica del plazo del art. 56 LCQ, que como este trabajo intenta reflejar, no es una cuestión menor, en tanto obedecen a él, numerosos efectos de singular importancia en materia de ejercicio de derechos adquiridos. Continuando con su exposición, dice: ‘ ‘... la prescripción se vincula a la acción, y no a la relación jurídica. Normalmente se tiene acción desde que la relación jurídica se ha formado, razón por la cual, en principio, la prescripción, no obstante afectar exclusivamente a la acción, comienza a correr desde la fecha de existencia de esa relación... Siendo la prescripción del crédito un medio de extinción de la acción verificatoria de quien no concurriera al concurso, el plazo corre desde que esta (acción verificatoria) puede ejercerse, es decir,

desde la presentación en concurso preventivo, independientemente de la fecha de la relación jurídica (y en tanto esta no esté prescripta, conforme las normas pertinentes).´´

Del presente pasaje, resalto la clara vinculación que la autora hace del concepto de prescripción con la acción, (no con el crédito en tanto derecho), y la conveniencia que ella pone de manifiesto en que se respete el estatuto propio de cada instituto (prescripción y caducidad), sin desvirtuarlos o hacer uso unívoco de ellos, tal como parece suceder en la ley (a pesar de quedar claro que ha sido voluntad del legislador establecer plazos prescriptivos en este artículo en particular).

A continuación, presento el muy clarificador panorama que plantea la autora, respecto a los efectos diferenciales que se deducen tras la admisión de uno u otro instituto. Así: ´´ En cuanto a las semejanzas: ambas importan la extinción de la posibilidad del ejercicio de un derecho de parte de su titular por su inactividad.-

En general, las diferencias son las siguientes:

* En cuanto al origen: se observa que la prescripción siempre nace de la ley, mientras que la caducidad puede provenir incluso de una sentencia judicial o de un negocio particular. En este caso, la diferencia apuntada no reviste utilidad práctica en tanto el plazo del art. 56 LCQ - de corresponder a caducidad- es un plazo legal.-

* En cuanto a la posibilidad de oposición: la caducidad es oponible contra todos, la prescripción solo es oponible contra aquellos, respecto de los cuales ha corrido. Aquí nos encontramos con un elemento de gran utilidad, si es que se persigue la consolidación de la situación del concursado.

* En cuanto a las causales de suspensión: la prescripción está sujeta a causales de interrupción y suspensión, la caducidad no lo está.- Puesto que contrariamente a lo que ocurre con la prescripción, la caducidad no puede interrumpirse pues es de cumplimiento fatal; pero puede impedirse ejecutando el acto necesario y previsto por la ley o el contrato, antes de que se cumpla el plazo.-

* En cuanto a la posibilidad de renuncia: la caducidad es irrenunciable y no da lugar al renacimiento de los derechos perdidos por el transcurso del término correspondiente, la renuncia de la prescripción adquirida implica el renacimiento de la acción y la posibilidad del ejercicio del derecho convertido en obligación natural por extinción de la acción.-

* Contrariamente a lo que ocurre con la prescripción, la caducidad puede ser declarada de oficio de modo tal que puede ser dictada aún cuando no hubiera sido solicitada por ninguna de las partes. Entonces, si mantenemos el instituto "prescripción" en el texto del art. 56 LCQ., siempre tropezaremos con el mismo inconveniente: de reconocer virtualidad interruptiva al acto de interposición de demanda, al compromiso o al reconocimiento -fuera del proceso concursal-, como expresamente lo prevé el código civil, podrá algún juez decretar la prescripción acusada de estos créditos aún insinuados más allá de los dos años desde la presentación en concurso?.- ´ ´.

Comento que el paralelo que la autora traza, está muñado de una indudable solidez técnica, y me resulta admirable como, a pesar de adelantar su tesis respecto de la necesidad y conveniencia de que el plazo fuese de caducidad, perfila cada instituto de modo clarísimo, aun estudiándolo en relación con el art. 56 LCQ, pero sin desconocer la existencia de una postura interpretativa de la ley muy arraigada, que no comulga con la idea que se plantea. Por otra parte, entiendo que una vez analizados esos distinguos, es momento de llegar al planteo esencial que la autora hace, cual es: ´ ´ De los términos de la norma surge por un lado, terminante, la pérdida del derecho de los presentados tardíamente. Por qué calificar entonces el instrumento como prescripción, cuando más simple, más puro y eficaz es entenderlo como caducidad, instituto que no se nos ofrece conflictivo y evitará indeseables variaciones de interpretación atentatorias de la seguridad jurídica? En efecto, si nos atenemos a la naturaleza de la institución, podemos afirmar, que la distinción entre prescripción y caducidad no está en su efecto sino en su función. El efecto de ambas es idéntico: la liberación... Así, cuando la ley ha otorgado un plazo para el ejercicio de una

acción limitando en el tiempo su ejercicio, nos hallamos frente a un supuesto de prescripción, en tanto que cuando la ley ha otorgado un derecho pero a condición de que sea ejercido en ese determinado lapso, el vencimiento implica la caducidad del derecho que ya no podrá ser ejercido por el acontecimiento de la condición antedicha... Por todo ello se recomienda: modificar el art. 56 de la LCQ determinando el plazo allí previsto, como de caducidad. ‘ ‘

Así llegamos al final del análisis de esta valiosa obra, a mi entender, que me permite tratar con dominio uno de las tesis que toman lugar dentro de uno de los tópicos que planteo en el presente desarrollo. Los argumentos dados me parecen irrefutables, respecto de la evidente conveniencia de una manifestación legal expresa, que le adjudique al plazo su rol de caducidad. (Lo cual sería dar finalmente conformidad al art. 68 del Proyecto del Ministerio de Justicia). De lo contrario, el instituto de la prescripción seguirá encontrándose desvirtuado, inmerso en un régimen especial – cual es el concursal –, que si bien no tiene entidad para romper con el estatuto de la primera, en definitiva lo hace, por una mala completitud que la redacción de la norma ha alcanzado, la que finalmente, da por tierra la normal y limpia obtención de la finalidad legal.

- Por su parte Alegría dice: ‘ ‘ Parte de la doctrina ha expresado que prefiere un caso de caducidad a uno de prescripción y adherimos a tal principio, siempre tratando de respetar el más amplio y mejor ejercicio de los derechos por todos los interesados y por ello creemos que el plazo de prescripción debe correr, eventualmente, desde la homologación del acuerdo. ‘ ‘ ^[33]

³³ **ALEGRIA, HECTOR** - “LA LLAMADA “PRESCRIPCION CONCURSAL” (ART. 56, 6º PARRAFO, LEY 24.522)”, ESPECIAL PARA LA LEY, LA LEY 2003-B,661, LA LEY ONLINE, 2003, pág. 7.

- Paralelamente es Truffat quien dice: ‘ ‘... hubiera sido preferible un plazo de caducidad, y no uno de prescripción...^[34]’ ’ Mas tarde el autor critica el dies a quo, diciendo que debería ser el de la apertura del concurso preventivo, no el de la presentación por parte del deudor. Agrega que ‘ ‘... es necesario sostener los efectos novatorios de la homologación... y articular un régimen de caducidad (isí!, de caducidad), y no de prescripción para quienes no hubieran petitionado la transformación de sus juicios de conocimiento en trámite previos al concurso en incidentes concursales, o no hubieran requerido verificación tardía. Así y solo así, el concurso funcionará en muy breve plazo como un *due diligence legal* y, en consecuencia, se facilitará el ingreso de nuevos capitales o la transferencia de la propiedad empresaria a nuevos y mejores emprendedores, dado que las garantías por contingencias y pasivos ocultos a prestar por el empresario original sólo deberán referirse a los deudas preconcursales, y porque cualquier eventual inversor se sentiría confiado sobre la extensión de las obligaciones del deudor concordatario.^[35]’ ’ Veo firmeza en los argumentos que el autor esboza, en pro de la conveniencia de la naturaleza caducante de los plazos.
- Lorente dice: ‘ ‘Por nuestra parte, y aun considerando acertada la incorporación de un instituto para extinguir – por transcurso de tiempo– las acciones y/o derechos contra un concursado, creemos que en lugar de la prescripción concursal hubiera resultado más apropiado instaurar la caducidad concursal, tal como lo proyecta alguna reforma al art. 56 de la ley concursal.^[36]’ ’

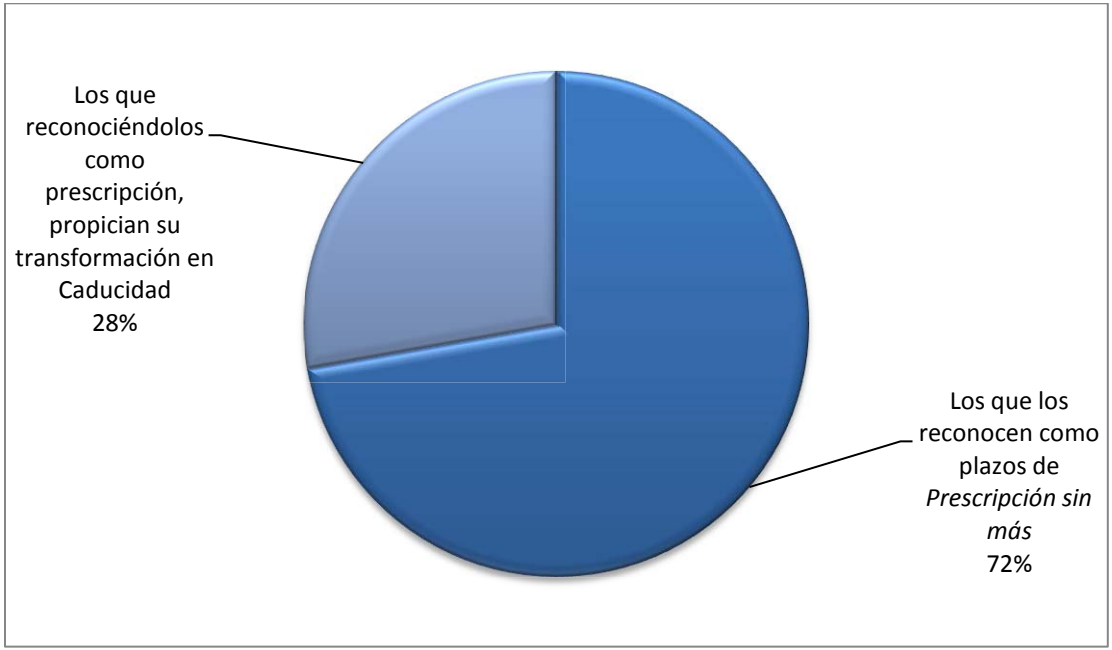
³⁴ **TRUFFAT**, EDGARDO DANIEL, - ‘ ‘FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS’ ’, ASTREA, BUENOS AIRES, 2007, pág. 193.

³⁵ **TRUFFAT**, EDGARDO DANIEL, - ‘ ‘FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS’ ’, ASTREA, BUENOS AIRES, 2007, pág. 216.

³⁶ **LORENTE**, JAVIER ARMANDO, ‘ ‘LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS TOMO I’ ’, EDICIONES GOWA PROFESIONALES; Haedo, BA, Argentina, 2000, pág. 601.

- Otros dos autores que se presentan a favor de la caducidad, aunque convencidos que el plazo actual es de prescripción, son Horacio y Guillermo Garaguso. [³⁷]

C) Proporción:



Así, vemos claramente la notable inclinación en la doctrina, tendiente a tratar el tema sin formular la idea de la conveniencia de modificación por la caducidad, todo ello sentada la unanimidad en el reconocimiento de la naturaleza prescriptiva de los actuales plazos del art. 56 LCQ.

Tales datos surgen de la toma de 18 fuentes, en las que la división es de 13 a 5. Por tanto, y como en todo resultado estadístico, lógicamente no intento decir que toda la doctrina mantenga esta proporción, pero sin duda encuentro la “muestra” suficiente en cantidad y sólida en calidad para presentar al lector este resultado.

³⁷ **GARAGUSO, HORACIO PABLO Y GARAGUSO, GUILLERMO HORACIO FRANCISCO** “PONENCIA 9 DERECHO COMERCIAL Y CONCURSAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MAR DEL PLATA”, COLEGIO DE ABOGADOS MAR DEL PLATA, MAR DEL PLATA, Google, 2008, en relación al fallo “Arpez S.A. s/ Quiebra – casusa nº 45.895, resolución del 30/6/2008, de trámite ante el Juzgado Civil y Comercial nº 10 de Mar del Plata.

2) Jurisprudencia:

D) Como plazo de Prescripción:

Los fundamentos del reconocimiento de naturaleza prescriptiva al plazo del art. 56 LCQ, se encuentran reiteradamente en la jurisprudencia consultada. Así:

- La prescripción puede oponerse como defensa al contestar el traslado del incidente de verificación tardía, o como acción declarativa, tal como se resolvió en “Nobles S.A. s/ Inc. De declaración de prescripción del crédito de la DGI” (Sala E, 23/12/99, JA del 10/11/99). [³⁸]
- “Vega Lecich, Félix Roberto c/ Conductil S.A. s/ Quiebra s/ Incidente de Verificación Tardía” – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, Abril de 2008. Parte Pertinente: “ Por último, y sin entrar analizar si resulta aplicable, o no, al proceso de quiebra el plazo de prescripción previsto en la LCQ: 56, no debe perderse de vista que la prescripción, en tanto medio de extinción de la acción, corre desde que ésta se encuentra en movimiento, independientemente de la fecha de la relación jurídica respectiva. Por ende, si como ocurre en el caso, el derecho del titular no está expedito, la acción tampoco está en curso de prescripción, simplemente porque no ha nacido (Llambías Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil - Parte General", Tº II, p. 662).- ”
- “Transporte del Oeste S.A. s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Verificación de Crédito”, Expte. 50.707, Excma. Cámara de Apelación Civil y Comercial, Sala I, Morón, 2004. Parte Pertinente: “ ... sin embargo, tratándose de un plazo de prescripción – posición también afirmada por la Casación Provincial – el instituto señalado debe ser analizado en los términos de la legislación de fondo.”

³⁸ **VAISER**, LIDIA - “VERIFICACION TARDIA EN EL CONCURSO PREVENTIVO” EN “DERECHO CONCURSAL” ROUILLON, ADOLFO A. N. (DIRECTOR) -, LA LEY 2004, página 890.

- “Asegura de Créditos y Garantías S.A. c/ Dirección General de Aduanas”, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G, Año 2007, La Ley Online. Parte Pertinente: ‘ ‘...Que, respecto del planteo de prescripción que se pudiera oponer en base al art. 56 de la ley 24.522, cabe señalar que conforme el régimen del Código Aduanero la acción fiscal para imponer pena y requerir el pago de diferencias por tributos debe analizarse según las normas previstas en este cuerpo legal, ya que son las específicas de las obligaciones tributarias aduaneras. El art. 56 de la ley 24.522 sólo puede tener la incidencia que más adelante se expresa... Que pese a lo expuesto, no parece lógico ni razonable —a mi juicio— que se aplique el régimen de prescripción abreviada de los dos años que contempla el mentado art. 56 de la Ley de Concursos y Quiebras, no sólo porque la misma finalidad de esa norma lo impide sino también porque se encuentra vigente, el régimen de prescripción instaurado por el Código Aduanero, y el régimen procesal de determinación de los tributos también previsto en ese cuerpo legal, que resultan no compatibles con esa norma, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema más arriba citada ‘ ‘
- “Ora S.A. s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Verificación Tardía (AFIP)”, LLBA 2006 (Febrero), 138 – Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Garantías en lo Penal de Necochea, año 2005 – La Ley Online. Parte pertinente: ‘ ‘... En ese aspecto debe recordarse que la prescripción liberatoria posee tres notas distintivas básicas que son el transcurso de un tiempo dado, la inacción del acreedor y la posibilidad de actuar durante aquel tiempo. Este último aspecto es el que no se revisó adecuadamente en la presente causa. Afirman Caseaux y Trigo Represas ("Derecho de las Obligaciones", t. III, p. 639 y sigtes., LEP, 1991) que "La prescripción es inseparable de la acción y comienza desde que ésta existe, por lo cual se puede afirmar que el curso de la prescripción se inicia desde que el crédito es exigible. A la inversa, la prescripción no corre mientras no existe una posibilidad actual de ejercitar una acción, cuando ésta no ha nacido" (donde el destacado me pertenece). ‘ ‘

- “Ferroviaria S.A. s/ Concurso Preventivo (hoy Cramdown)” Expte. 31.699, 1º Juzgado de Procesos Concursales, Mendoza, 2001. Parte pertinente: “... no debemos olvidarnos también otras normas de la LCQ avanzan y derogan disposiciones legales de <orden público> y que fuera del marco de los procesos universales no admiten excepción alguna. Así, el 56, párr.7º que crea un régimen propio de prescripción, modificando el momento a partir del cual se computa (apertura del concurso) y no desde la fecha del título de obligación conforme al art. 3.956 C.Civ.- y el plazo máximo - dos años , y no el mayor previsto para cada obligación en particular-”
- “Laguna La Tosca S.A. s/ Concurso Preventivo s / Incidente de Verificación Tardía (Robert, Hugo y otros)”, Expte. 47.508, Excm. Cámara Civil Y Comercial Departamental Azul, Sala II, 2004. Parte pertinente: “Por su lado el agravio de la sindicatura (fs.455/456) puntualizó que es erróneo prescindir del plazo de prescripción del art.56 L.C., norma de orden público, que torna inaplicables otros plazos de prescripción. Por ello concluye que a la fecha de promoción del incidente de verificación tardía había operado esa prescripción... En anterior oportunidad, en los inicios de la vigencia de la ley 24522 y “obiter dicta”, esta Sala analizó la naturaleza jurídica del plazo del art.56 L.C. (prescripción o caducidad) concluyendo que predominaba entonces el criterio de que ese plazo es de prescripción, porque la ley vigente se apartó del proyecto de la Comisión del Ministerio de Justicia que se refería expresamente a la caducidad del pedido de verificación del crédito dentro del plazo de 6 meses contados desde la homologación del acuerdo (conf. Iglesias, José A. “Concursos y Quiebras. Ley 24522. Comentada” p.112/113; Grispo, Jorge “Tratado sobre la Ley de Concursos y Quiebras. Ley 24522”, T.II. p.256, Nº64; “Antecedentes Parlamentarios”, Suplemento L.L. 1995-219, parágrafo 177; exposición del Dr. Alegría en p.443 de esa obra en las “Jornadas Organizadas por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados”; Rivera-Roitman-Vítolo, “Concursos y quiebras”, p.103, cit. en esta Sala Causa 42084, 26/12/2000

“O.S.P.R.E.R.A. Incidente Verif.Tardía. Autos Princip.: Illia, M.A. y otra. Quiebra.”, D.J.J. 160-95).

Conforme:

- “Robles, Rodolfo Pedro s/ concurso preventivo”, Expte. 95.150, Sala Primera de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, La Plata, LL 2003, B, 667 – Sitio Web SCBA N° 020195150.
- “Telearte S.A. Empresa de Radio y Televisión s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Verificación (AFIP-DGI)”, Expte. 53.925, Juzgado de 1º Instancia en lo Comercial N° 16 Sec. N° 32, Buenos Aires, año 2008.
- “Estudio de Arquitectura s/ Quiebra”, Sitio SCBA, Fallo 01004818 (Excma. Cámara de Apelaciones San Nicolás de los Arroyos).
- “Prestaciones Médico Asistenciales S.A. s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Verificación Tardía (Por Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) – Juzgado n° 7 Sec. N° 13, Capital Federal – 049862/2008ai.
- “RUBIO Gloria y otro c/ Compañía Productora Alimentos s/ concurso preventivo s/ Incidente de Verificación” Expte. 131.995, Juzgado Civil y Comercial n° 10 Mar del Plata – Sitio web SCBA, n° 0102131995.
- “Mazzini, Marcelo Omar s/ Incidente de Verificación de Crédito” Expte. 106.200 – Excma. Cámara Segunda de Apelaciones, La Plata – Sitio Web SCBA n° 0201106200.

E) Como plazo de caducidad:

No existe en la jurisprudencia consultada por el autor de esta obra caso alguno en que el órgano jurisdiccional haya dado tratamiento a un plazo del art. 56 LCQ como plazo de caducidad. Hay unanimidad en el reconocimiento de su naturaleza prescriptiva, lo que es saludable toda vez que de no ser así, sería evidente la injusticia de tal situación.

Los tribunales argentinos no han dudado en cómo aplicar la norma desde su aparición, con fundamento esencialmente en el pasaje que reza “prescriben las acciones del acreedor”.

Ello, sumado al hecho de ser la redacción de la ley, el resultado de la adopción de la fórmula propuesta por el Proyecto del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, ha conformado a los magistrados para no dar lugar a la hesitación a la hora de adjudicar tal naturaleza jurídica a este instituto.

F) Conclusión del Tópico:

Mi conclusión es sencilla. La controversia conceptual de hoy, no tiene por objeto la naturaleza de los plazos del art. 56 LCQ en la redacción actual. Ello está salvado: son de prescripción.

Pero sí es noble el planteo de cuán grande sería la conveniencia de estatuirles el carácter de caducidad, pues como hemos desarrollado en este capítulo, la operatividad que la norma habría de ostentar, sería mucho mayor, y habría de contribuir mejor a la obtención del fin perseguido por el legislador.

Propicio la instauración de la reforma, por considerarla conducente a la hora de ahorrar fuerzas en discusiones sobre legitimación sindical para oponer la defensa, o la operación de causales interruptivas o suspensivas, o

la posibilidad de que el deudor renuncie la prescripción ganada y afecte derechos de los demás *creditores*, y hasta por dar al juez la posibilidad de oponerla de oficio, y así, acentuadamente, dar un marco de igualdad aun mayor entre los acreedores.

La caducidad “no perdona”, y por tanto, si el legislador busca (acertadamente) recomponer la vida de la empresa (o el deudor) concursado rápidamente para hacerla reingresar a la vida jurídica plena con vigor, y en ese plan, crea un proceso (concurso preventivo) que en mucho ha de aniquilar derechos de acreedores, debe hacerlo con firmeza, adoptando la vía más clara, justa y pareja, cual es a caducidad de la acción de verificación tardía.

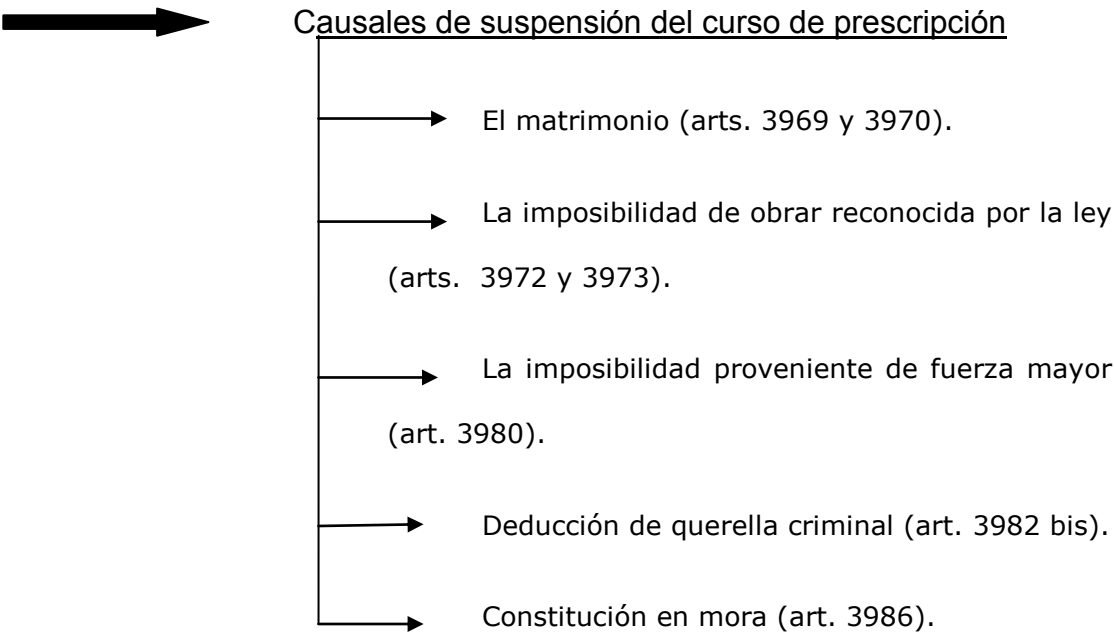
CAPÍTULO II

ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN E INTERRUPCIÓN DE LOS
PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN.

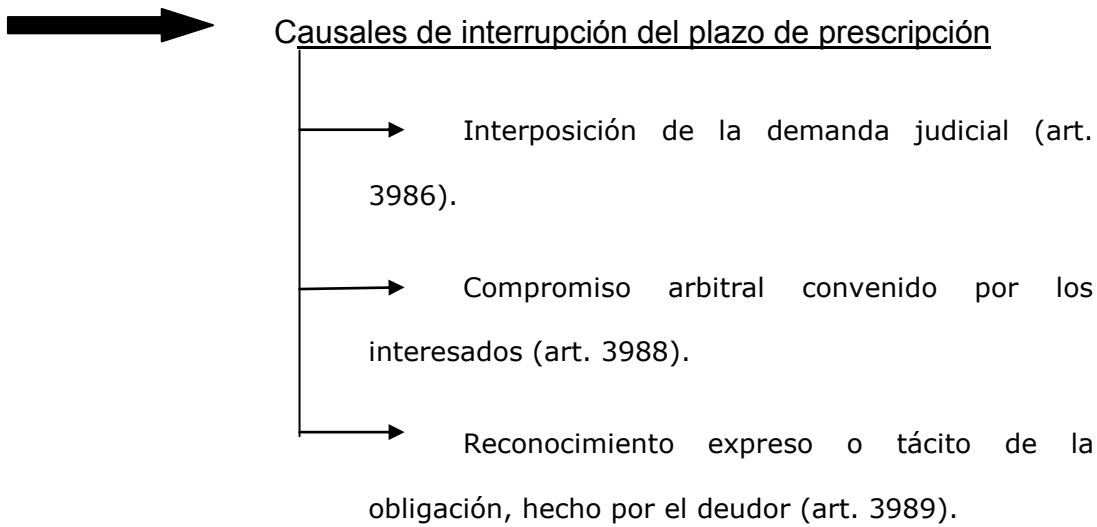
Partiendo de la base inequívoca de que los plazos del art. 56 LCQ son de prescripción, (obviados todos los reparos que se han hecho en el capítulo anterior acerca de la conveniencia de ello), resultan fundamentales las siguientes tres cuestiones en referencia a la aplicación de las causales de suspensión e interrupción de los mismos, a saber:

- 1. Si proceden o no.
- 2. Cuáles proceden.
- 3. Qué acción es la que se protege.

Recurro nuevamente a Llambías ^[39] para dotar a mi obra del siguiente esquema:



³⁹ **LLAMBIAS, JORGE JOAQUIN** - “TRATADO DE DERECHO CIVIL, PARTE GENERAL, TOMO II”, EDITORIAL PERROT, BA, 1997, página 599 y ss.



Recordemos que por imperio del art. 844 del C.Com., son todas aplicables en materia comercial.

Entrando en la LCQ, lo que quiero comentar preliminarmente al lector, es que tras el año 2006 debemos hacer ciertos reparos a la hora de considerar el punto. Como sabemos, el art. 56 en su actual redacción presenta dos plazos de prescripción de la acción de verificación tardía:

1. El primero, de dos años (cuyo *dies a quo* es la presentación en concurso preventivo), para acreedores que no estén en las excepciones del art. 21 (los procesos en trámite no suspendidos en virtud del fuero de atracción concursal, por su naturaleza o por la voluntad del acreedor de continuarlos ante el juez natural);
2. El nuevo, de seis meses, desde que los acreedores del art. 21 obtienen una sentencia firme favorable en proceso tramitado ante juez natural (juicio continuado).

Entonces: para ver cómo juegan las causales de suspensión e interrupción analizadas, siempre tenemos que tener bien claro qué plazo es el que se intenta suspender o interrumpir (dependiendo de que el acreedor

cuenta con un título -ej. contrato- o un pronunciamiento -ej. sentencia favorable firme- verificadorio). Ello es así, toda vez que aquel acreedor al que le corresponda el plazo de los seis meses, deberá probar la concurrencia de una de dichas causales, efectivamente desde que su acción de verificación ha quedado expedita. O sea, desde que su sentencia favorable tomó estado de firmeza. Con ello quiero decir que la alegación de una casual que tomó lugar anteriormente, no deberá ser recogida como válida a los efectos de mantener con vida esa acción.

Pero por el otro lado, tenemos al otro tipo de acreedor (a los efectos de la prescripción de su acción verificadoria): el del plazo de dos años, que queda subsumido en tal régimen por no tener abierto un proceso en contra del deudor al momento de tomar operatividad el fuero de atracción, que es la presentación en concurso de su deudor, (y por tanto estar impedido de hacerlo por imperio del art. 21 párr. 1º LCQ, salvo las acciones laborales).

El caso de este acreedor, no presenta mayores dificultades, toda vez que, de idéntico modo que el anterior, para lograr se declare en el concurso operada la suspensión o interrupción del plazo prescriptivo en su contra, él ha de probar que la correspondiente causal tuvo lugar en el tiempo que ha transcurrido desde que su acción verificadoria se tornó ejercitable, (presentación en concurso dice la ley, pero debemos saber que en caso de rechazarse *in limine* la demanda de apertura, el *dies a quo* habrá de tomar lugar desde que quede firme la resolución de la Alzada que lo declare abierto), hasta el momento en que efectivamente promueva el incidente de verificación tardía. (Recordemos que ello nunca puede darse en el caso de verificación tempestiva, pues el plazo para presentarse a verificar tempestivamente, el juez lo determina en la resolución de apertura, art. 14 inc. 3 LCQ, y por tanto solo expirado este, se podrá denominar “tardía” a la misma. Recién ahí habrá quedado abierta la vía incidental para plantearla

tardíamente, y por ello poder aplicar el art. 56 que le es propio a este tipo de verificación únicamente).

El acreedor que obtiene su sentencia favorable ante juez natural, pero antes de operados los 2 años del art. 56, nada tiene que temerle a dicho plazo, pues el mismo **no** le resulta aplicable (al menos no por ese título).

Cuenta con un íntegro plazo de seis meses para presentar su incidencia. (No comparto la doctrina que sostiene que si logra la sentencia requerida antes de operados los dos años, debe urgir su verificación). Ello me parece completamente erróneo, toda vez que tal interpretación implica un no entendimiento de la razón de ser del plazo de seis meses, que de ningún modo puede jugar en contra del acreedor victorioso en juicio continuado, al que la misma norma tutela. Más allá de este análisis desde la ratio legis del precepto, entiendo que el texto legal se explica a sí mismo sin dificultades, y no cabe la posibilidad de alterar su sustancia, tergiversando sus eventuales efectos. Hay dos plazos, uno para cada situación. Goza cada uno de plena independencia.

En relación a la parte del precepto que motiva esta última explicación, quiero mencionar algo: la norma dice textual: ‘ ‘... Si el título verificadorio fuese una sentencia de un juicio tramitado ante un tribunal distinto que el del concurso, por tratarse de una de las excepciones previstas en el art. 21, el pedido de verificación **no** se considerará tardío, si, no obstante haberse excedido el plazo de dos años previsto en el párrafo anterior, aquel se dedujere dentro de los seis meses de haber quedado firme la sentencia ‘ ‘(los resaltados son míos). Aquí, veo una notable divergencia entre el texto legal y lo que creo el legislador ha querido estatuir. Me parece que el término ‘ ‘tardío’ ‘, debió ser ‘ ‘prescripto’ ‘, en tanto así la frase tomaría sentido. Llego a esta conclusión, en tanto es imposible catalogar lógicamente de no tardía a la mentada verificación, pues de no ser tal, siempre ha de ser tempestiva (dado que solo hay dos tipos de

ella). La tempestiva, como bien sabemos, es la que toma lugar durante el plazo del art. 14 inc. 3. Fuera de tal lapso temporal, siempre será tardía.

También veo una vía interpretativa secundaria en la norma que contiene tal disposición (la que regla el trámite de la ver. tardía), y finalmente doy por esclarecido el tema, solo con pensar que la finalidad de dicha aclaración por parte del legislador, es la de proteger la acción por la que se entable la verificación (que ha de ser por vía incidental, o por acción individual de verificación, si el concurso ha concluido), de su eventual prescripción. O sea, no cabe duda de que ello es lo que el legislador quiso decir, pero no lo hizo. Conforme con esta posición, Truffat [⁴⁰]. No considero esa parte verdaderamente conflictiva, pero entiendo que en tanto no se la aclare de raíz (tal como me lo propuse), no habrá sino de contribuir al incremento de la complejidad del precepto que atendemos en esta producción monográfica.

Lo cierto es que el complejo art 56 LCQ, debe ser indefectiblemente estudiado en íntima correlación con el art. 21 del mismo cuerpo legal, pues es este ultimo el que determina (según la naturaleza de los créditos, y la eventual opción ejercida por el acreedor), qué plazo ha de serle aplicable a su acción de verificación tardía.

Retomando nuestros interrogantes, veamos:

1) Doctrina:

a) Autores que tratan el tema:

- Lidia Vaiser, es la autora que escojo en esta ocasión para abrir el tema, pues es ella quien nos da el planteo inicial cuando dice: ‘ ‘Se

⁴⁰ **TRUFFAT**, EDGARDO DANIEL, - ‘ ‘FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS’ ’, ASTREA, BUENOS AIRES, 2007, pág. 151 y ss.

trata, como resulta explícito, de un término de prescripción y no de caducidad, por lo que caben en la especie, todas las causales interruptivas y suspensivas que los códigos de fondo contemplan (Garrote M. s/ CP s/ Inc. por GBA, sala E, 27/04/99). Como la propia norma lo establece, el pedido de verificación interrumpe la prescripción... En un caso... en el cual la deudora denunció su estado concursal, pero consintió la prosecución de la causa laboral, fue desestimada la defensa de prescripción opuesta (‘ ‘Empresa Central El Rápido...’ ’, Sala B, 23/05/2000)’ ’^[41]. O sea que la autora nos plantea la procedibilidad de las causales de ambos medios de alterar el curso prescriptivo, dado que es unánime en doctrina y jurisprudencia el reconocimiento de la naturaleza de los plazos como de prescripción. Entones, como punto siguiente, nos cabe abordar el tema de qué tipos de causales han de considerarse.

Traigo al lector, los siguientes comentarios:

- ‘ ‘...las hipótesis de interrupción que dependen del deudor (reconocimiento, art. 3939 C.C.), o del deudor y del acreedor conjuntamente (sometimiento a árbitros, art. 3988 C.C.), pueden resultar compatibles desde que el plazo breve rige exclusivamente para el concurso preventivo, proceso que no priva al deudor de la administración de sus bienes. No admitir el reconocimiento como causal de interrupción, puede implicar autorizar al deudor a volverse sobre sus propios actos, y contrariar de este modo, el principio mayor de la buena fe. (Así se manifiesta la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci en fallo citado por Di Tullio)... Con relación al supuesto de dispensa de la prescripción en los términos del art. 3980 C.C., la misma ha sido aceptada sin inconvenientes por la jurisprudencia, de modo que es posible su aplicación en la verificación de créditos’ ’. ^[42]

⁴¹ **VAISER, LIDIA** - ‘ ‘VERIFICACION TARDIA EN EL CONCURSO PREVENTIVO’ ’ EN ‘ ‘DERECHO CONCURSAL’ ’ ROUILLON, ADOLFO A. N. (DIRECTOR) -, LA LEY 2004, página 890.

⁴² **DI TULLIO, JOSE ANTONIO** - ‘ ‘TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS’ ’, LEXIS NEXIS, 2006, página 132.

- **Alegría:** ‘ ‘ Definido como prescripción, el plazo de la norma es susceptible de suspensión e interrupción... Si el concursado ha admitido ciertos créditos en un incidente de revisión cuyo trámite ha caducado por perención de la instancia, esa actitud importa una causal de interrupción suficiente como para obstar la aplicación lisa y llana del plazo de dos años del art. 56 LCQ en un reclamo posterior ^[43]... La jurisprudencia también ha resuelto que la intimación administrativa de pago de gravámenes ha producido la suspensión por un año de la prescripción, tal como lo establece la ley 19.489... situación que lleva a igual conclusión a que si se aplicara a esa intimación el precepto del art. 3986, segunda parte del C.C. ^[44] ‘ ‘ ^[45]
- **Di Tullio**, nos dice respecto de la prescripción de la acción para exigir el otorgamiento de escritura traslativa de dominio, que: ‘ ‘... si el vendedor hace tradición de la cosa o recibe el precio, tales actos deben ser tomados como un reconocimiento tácito interruptivo de prescripción (art. 3989 C.C.)... con tal tesis, después de la tradición, la obligación que tiene el vendedor de escriturar, se vuelve en la práctica imprescriptible. ‘ ‘ ^[46] Considero de la mayor importancia ver cómo actúa el precepto prescriptivo del art. 56 LCQ frente a este tipo específico de prestación debida, pues, en el pasivo de un deudor concursado, puede revestir significativa envergadura, y en la vida de los negocios jurídicos, la compraventa de inmuebles siempre será uno de los más destacados, complejos e importantes.

⁴³ En tal pasaje, Héctor Alegría refiere al precedente: ‘ ‘CNCom., Sala D, ‘Establecimiento elaborador de alimentos Sacaan de Argentina s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación promovido por Municipalidad de Ituzaingó’, 17/10/2000, ED, 192-411.’ ‘

⁴⁴ En tal pasaje, Héctor Alegría refiere al precedente: ‘ ‘ CNCom., sala E, "Garrote, Manuel A., s/ inc. de verif. por Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", 27/04/99, LA LEY, 1999-E, 452’ ‘.

⁴⁵ **ALEGRIA, HECTOR** - ‘ ‘LA LLAMADA ‘ ‘PRESCRIPCION CONCURSAL ‘ ‘ (ART. 56, 6º PARRAFO, LEY 24.522)’ ‘, ESPECIAL PARA LA LEY, LA LEY 2003-B,661, LA LEY ONLINE, 2003, pág. 5.

⁴⁶ **DI TULLIO, JOSE ANTONIO** - ‘ ‘TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS’ ‘, LEXIS NEXIS, 2006, página 493.

- La autora que nos proveyera el mayor desarrollo de la idea de la conveniencia de la instauración del plazo del art. 56 como de caducidad, Verónica M. Romero, aborda también el tema de la admisión de causales de suspensión e interrupción, pues dice: ‘ ‘ Es en el supuesto de constitución en mora, previsto por el art. 3986 CC., donde válidamente el acreedor pudo haber intimado de pago a su deudor después de decretada la apertura del concurso (y en completa ignorancia de esta presentación, en tanto suele demorar la publicación de edictos alrededor de un mes), y pretenderá hacer valer la suspensión de la prescripción liberatoria por un año (o menor que corresponda), en base a la citada normativa. En este caso pregunto: admiten los términos del art. 56 LCQ. el instituto mencionado, llevando a considerar viva la acción aún pasados, por ej., tres años de la presentación en concurso?... Es posible interrumpir el curso de la prescripción? Resulta ilustrativo analizar si las causales admitidas por el C.C., son idóneas para producir este efecto en el ámbito concursal... Demanda judicial (art. 3986 CC): ... realizada la publicación de edictos, debe necesariamente concurrir al proceso universal, a promover el incidente verificadorio pertinente... Pero para el caso de que, desoyendo el mandato legal interpusiera demanda -en sentido amplio- ante un juez distinto, esta presentación, formulada ante juez "incompetente" que en virtud del art. 3986 CC es plenamente eficaz para interrumpir la prescripción: puede esgrimirse en el concurso, pasados los dos años de su apertura? En el mismo sentido: promovida demanda con anterioridad a la presentación en concurso, la falta de insinuación del crédito debatido judicialmente en el concurso, mantiene la interrupción causada por demanda, más allá del plazo del art. 56 LCQ? Entiendo que estos interrogantes merecen respuesta negativa. ‘ ‘ [47].
- La autora nos da su idea respecto de estos puntos, en doctrina que es dividida. Así vemos por ejemplo a Lorente, que nos dice: ‘ ‘ La

⁴⁷ ROMERO, VERONICA M. - “PONENCIA XI JORNADAS BONAERENSES DE JOVENES ABOGADOS, COMISION DE DERECHO COMERCIAL, PONENCIA: EL PLAZO PREVISTO EN EL ART. 56 DE LA LCQ DEBE SER DE CADUCIDAD”, ZARATE – CAMPANA, Google, salthu@estudiojuridicomdp.com.ar, 2000.

principal vía interruptiva de la prescripción concursal es, necesariamente, la promoción de la demanda por el crédito en cuestión ante el juez devenido incompetente por efecto del fuero de atracción concursal (art. 21 LCQ). ^[48] ‘ ‘

- También aparece en escena la doctrinaria de Rivera ^[49]: ‘ ‘el plazo de prescripción es susceptible de interrupción y prescripción (léase ‘ ‘suspensión’’)(la aclaración es mía), inclusive por la causa del artículo 3986, segundo párrafo del C.C., esto es la constitución en mora producida por interpelación. Entre las causales de interrupción de la prescripción debe incluirse la participación en un proceso judicial que, pese a que debió haber sido atraído, continuó su trámite fuera del tribunal concursal, debiendo computarse el plazo de prescripción desde que quedó firme la sentencia dictada en ese proceso’ ‘. Me interesa mucho este pasaje, pues presenta la constitución en mora como operativa en este caso.

Conforme:

- Escuti y Bas: ‘ ‘...el termino de prescripción que establece el art. 56 en su sexto párrafo, tiene como punto de partida el efecto característico de la demanda verifcatoria, contemplado en el art. 32 de la ley 24.522 que interrumpe la prescripción e impide la caducidad del derecho, y por ello se establece esta prescripción concursal, para asegurar la conformación del pasivo verificado’ ‘ ^[50].
- Galíndez ^[51]

⁴⁸ **LORENTE**, JAVIER ARMANDO, ‘ ‘LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS TOMO I’, EDICIONES GOWA PROFESIONALES, 2000, página 605.

⁴⁹ **RIVERA**, JULIO CESAR, ‘ ‘INSTITUCIONES DE DERECHO COMERCIAL TOMO I CONCURSO’, RUBINZAL - CULZONI, 2003, página 415.

⁵⁰ **ESCUTI**, IGNACIO A. Y **JUNYENT BAS**, FRANCISCO - ‘ ‘INSTITUCIONES DE DERECHO CONCURSAL 2’, ALVERONI EDICIONES, 2002, página 83.

⁵¹ **GALINDEZ**, OSCAR A. - ‘ ‘VERIFICACION DE CREDITOS, 3º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA’, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA, BS. AS., 2001, página 339.

Veamos que muchas son obras anteriores a la reforma de 2006. Hoy, es esencial para atender el punto, estarse al precepto del art. 21 LCQ, y en su consecuencia, ver si el proceso continuado frente al juez natural por el acreedor no concurrente en el concurso, está o no incluido en tal norma, porque de no estarlo, no le será aplicable el plazo de prescripción de la acción vericatoria de 6 meses que prevé el art. 56 LCQ, (a contarse desde que la sentencia quede firme). Ello es así, pues el fuero de atracción concursal, “llama”, de modo compulsivo, a todos los acreedores a verificar sus créditos, desterrando otra posibilidad de hacer valer el derecho, salvo aquellos que por el art. 21 guardan la “opción” de verificar o continuar (según Truffat la opción se ejerce al suspender y presentarse a verificar).

- Garaguso [⁵²]: los autores hacen muy interesantes acotaciones respecto del reconocimiento como medio de interrupción (art. 3989 C.C.). Así:
 - ♦ “ El plazo de la prescripción no puede encontrarse cumplido, pues en tal caso el reconocimiento es ineficiente y no suple la novación como forma de restaurar el derecho de crédito ya extinguido;
 - ♦ El reconocimiento del deudor no impide al síndico o a los acreedores y otros interesados oponer la prescripción cumplida; (muy interesante para el tópico del capítulo correspondiente a este tema).
 - ♦ El reconocimiento puede ser ineficaz si el deudor ya ha iniciado el proceso concursal preventivo, pues supondría afectar la situación de los acreedores por causa anterior a la presentación.”

b) Autores que no tratan el tema: *(de conformidad únicamente a la doctrina y obras consultada por el autor de esta obra).*

⁵² **GARAGUSO**, HORACIO PABLO Y **GARAGUSO**, GUILLERMO HORACIO FRANCISCO “PONENCIA 9 DERECHO COMERCIAL Y CONCURSAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MAR DEL PLATA”, COLEGIO DE ABOGADOS MAR DEL PLATA , MAR DEL PLATA, Google, 2008, en relación al fallo “Arpez S.A. s/ Quiebra – casusa nº 45.895, resolución del 30/6/2008, de trámite ante el Juzgado Civil y Comercial nº 10 de Mar del Plata.

- Iglesias [⁵³]: se limita,(en su estudio artículo por artículo de la ley 24.522), a compararlo con el art. 67 de la ley 19.551, y a ver las formas de plantear la verificación.
- Martorell [⁵⁴]: dice que ‘ ‘ los términos podrán ser motivo de las suspensiones e interrupciones de su curso previstas por la normativa vigente ‘ ‘. No ingresa al estudio de ellas.
- Martínez de Petrazzini [⁵⁵]: no dice una palabra al respecto.
- Stacco [⁵⁶]: no toca el tema.
- Fassi y Gebhardt [⁵⁷]: todo lo que aportan al respecto es: “si el acreedor no se ha presentado oportunamente a pedir la verificación de su crédito, en la oportunidad legal, la prescripción NO se interrumpe, y ella sigue corriendo hasta el momento en que se formula la presentación tardía. Es que si bien la ley le prohíbe, durante el trámite concursal, la ejecución individual, le ha abierto al camino a la ejecución colectiva, y por tanto la oportunidad para el ejercicio del derecho. No queda muy claro si los autores entienden que la prescripción no se interrumpe porque sí (por el solo hecho de no verificar), lo cual no me parece, pues es obvio que es así; o si no admiten los autores ninguna causal para que ello suceda más que la “presentación tardía”. En este último caso, rompen con el lineamiento de la restante doctrina,

⁵³ **IGLESIAS**, JOSE ANTONIO - “CONCURSOS Y QUIEBRAS. LEY 24.522 COMENTADA”, DEPALMA, 1995, página 111.

⁵⁴ **MARTORELL**, ERNESTO EDUARDO, “TRATADO DE CONCURSOS Y QUIEBRAS, TOMO II B”, DEPALMA, 2001, página 694.

⁵⁵ **MARTINEZ DE PETRAZZINI**, VERONICA F., “LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS”, EDICIONES MACCHI, 1997, páginas 101 y ss.

⁵⁶ **STACCO**, JORGE SANTOS - “INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA: ASPECTOS PROCESALES”, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, TRELEW, 1997.

⁵⁷ **FASSI**, SANTIAGO Y **GEHBARDT**, MARCELO - “CONCURSOS Y QUIEBRAS 7 º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA”, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA, BS. AS., 2000, página 179.

y por ello se justifica que no traten el tema en su desarrollo (directamente no lo creen procedente).

- Rouillón [⁵⁸]: no trata el tema, aun cuando lo roza, por considerar el curioso supuesto (que tranquilamente puede darse en la praxis), acerca de que los dos años desde la presentación en concurso, transcurran antes de que se dé publicidad luego de tramitado el recurso de apelación que revoque la sentencia del juez concursal que rechazaba la solicitud del acreedor, lo que resuelve el autor diciendo: ‘ ‘supuesto en que no podría sostenerse razonablemente que los créditos prescribieron antes de la propia apertura concursal o de que los acreedores se enteren de ella, debiendo los jueces en tal supuesto adaptar esta regla a tal peculiar circunstancia evitando interpretaciones confiscatorias’ ’. Lo que me llama mucho la atención, es que el autor tenga una finalidad tendiente a otorgar seguridad al mantenimiento del derecho del acreedor ante el absurdo (y por ello propicie una interpretación flexible del texto de la ley), todo ello cuando la misma ley (C.C.), ofrece las herramientas idóneas para otorgar tales seguridades y protección a los derechos. Concretamente, el art. 3980 (imposibilidad de hecho).

2) Jurisprudencia:

Bajo este título veremos los precedentes que he seleccionado al efecto de presentar las ideas más destacadas en relación al tema que venimos tratando. Con ello:

⁵⁸ **ROUILLON**, ADOLFO A. N. - ‘ ‘REGIMEN DE CONCURSOS Y QUIEBRAS LEY 24522,13 ° EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA’ ’, ASTREA, BS. AS., 2004, página 146.

- La Suprema Corte de la Nación, tiene dicho que el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva, razón por la cual, en caso de duda, debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho. Así:
 ‘ ‘El reconocimiento tácito interruptivo de la prescripción, resulta de todo hecho o acto que importe la admisión de la existencia del derecho invocado y se manifieste con la certidumbre exigida por el art. 918 del C.C., y que ante la duda deba estarse por la existencia de la interrupción; y por demanda (art. 3986 C.C.), debe entenderse toda presentación judicial que traduzca la intención de mantener vivo el derecho de que se trate. ‘ ‘ [59]
- ‘ ‘se trata, como resulta explícito, de un término de prescripción y no de caducidad, por lo que caben en la especie todas las causales interruptivas y suspensivas que los códigos de fondo contemplan (‘ ‘Garrote M. s/ C.P. s/Inc. por GCBA, Sala E, 27/04/09) ‘ ‘. [60]
- Un fallo de la SCBA, muy destacado por la riqueza de sus contenidos y el voto dividido de los magistrados, es el que tuvo lugar en autos caratulados: ‘ ‘Reversat, Ricardo David y Otra c/ Expreso General Sarmiento S.A. s/ Incidente de Verificación de crédito ‘ ‘ Expte. 93.969, fallo de la SCJBA de fecha 2/7/08, originario del Juzgado Civil Y Comercial nº 2 de San Martín. Es altamente interesante de ser estudiado, en tanto siendo posterior a la reforma a la LCQ de 2006 (2008), se trata el tema de la operatividad o no de efectos suspensivos de la demanda por daños y perjuicios interpuesta por el acreedor ante juez natural (1997), durante la vigencia del régimen de la ley 24.522 sin su más reciente reforma, y por tanto no dando cabida al plazo de seis meses nuevo, sino rondando el debate únicamente sobre el de dos años desde la presentación en concurso del deudor (1999), para

⁵⁹ **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - ‘ ‘TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS ‘ ‘, LEXIS NEXIS, 2006, página 491, Conf. Fallos 312:2352, 312:2152 y 312:2134.

⁶⁰ **VAISER**, LIDIA - ‘ ‘VERIFICACION TARDIA EN EL CONCURSO PREVENTIVO ‘ ‘ EN ‘ ‘DERECHO CONCURSAL ‘ ‘ ROUILLON, ADOLFO A. N. (DIRECTOR) -, LA LEY 2004, página 890.

poder verificar su crédito (que es una indemnización derivada de un accidente de tránsito), la que se intenta en 2003, y se acoge la excepción de prescripción opuesta por la concursada. Es decir, la cuestión se resuelve según el régimen anterior. Los jueces que votan a favor del rechazo de la excepción opuesta por la concursada y la sindicatura (Jueces Pettigiani, Kogan, Genoud y de Lázzari), lo hacen con estos argumentos:

''Ha sostenido esta Corte que la interrupción producida por la demanda se prolonga, cualesquiera sea luego la rapidez o continuidad del trámite, en toda la duración del proceso (conf. Ac. 56.600, sent. del 5-VII-1996; Ac. 80.352, sent. del 17-X-2001; Ac. 83.056, sent. del 1-III-2004). Y en el presente caso, si bien dicho acto procesal -principiante de la reseñada causa civil- tuvo lugar con anterioridad a la presentación del deudor en concurso preventivo, cierto es que la interrupción del plazo de prescripción originada por dicha demanda ha de entenderse mantenida durante todo el tiempo que duró la tramitación de la misma... También se ha dicho en la Ac. 77.817 (sent. del 28-V-2003) que conforme surge de un análisis gramatical del texto del art. 56 de la ley 24.522 no existen dudas en cuanto a que el término previsto en el mismo es de prescripción, debiendo descartarse que se trate de un plazo de caducidad; por lo que el instituto señalado debe ser analizado en los términos de la legislación de fondo. Siendo así, el plazo puede ser suspendido (art. 3983, Cód. Civil), dispensado (arts. 3980, Cód. cit. y 845, Cód. de Com.), o interrumpido (art. 3998, Cód. Civil; conf. Roitman, Horacio, "Prescripción en la Ley de Concursos" en revista de Derecho Privado y Comunitario, n° 22, págs. 197/197 vta.) de acuerdo a las previsiones del derecho de fondo (conf. Rivera-Roitman-Vitolo, "Ley de Concursos y Quiebras", t° 1, pág. 407), si bien en tanto ello no importe desconocer o afectar principios de orden público concursal (arg. art. 159 y ccdtes. ley 24.522; conf. Truffat, Daniel "Procedimientos de admisión al pasivo concursal", Ad-Hoc, Bs. As., 2000, 1° edic., pág. 137; Alegría, Héctor "La llamada 'prescripción concursal' (Artículo 56, 6° párrafo, ley 24.522)", "La Ley", 2003-B-661; Gargaruso, Guillermo "La prescripción concursal: ¿un

problema sin solución?", "Jurisprudencia Argentina", 2003-IV-1350; entre otros).

En igual sentido se ha expresado que la ley 24.522 no prescinde totalmente de las disposiciones de otros ordenamientos, de ahí que resulte de aplicación al concurso preventivo el art. 3989 del Código Civil para interrumpir la prescripción de la verificación tardía de créditos (conf. C.N.Com., sala E, 8-V-2000, en "La Ley", 2000-F-228; en igual sentido C.N.Com., sala D, 21-IX-1999, en "El Derecho", ejemplar del 02-II-2000)...

La entidad interruptiva del referido plazo de prescripción concursal, reconocida en autos a la continuación del trámite del proceso individual ante el juez originariamente competente, no afecta principios de orden público concursal en tanto constituye demostración cabal del sostenimiento de la pretensión crediticia por parte del insinuante más allá de la eficacia concursal de tales actos procesales posteriores al inicio del citado proceso universal.

Siguiendo este orden de ideas y analizando las constancias de autos, advierto que resulta acreditada la violación de la doctrina legal que cita el recurrente a fs. 153 (conf. art. 289, C.P.C.C.). ' ' (Ello así porque la causa llega al entendimiento de la Corte mediante la interposición de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal).

Pero es el juez Hitters, quien disidiendo (votando por el rechazo del recurso), afirma: ' 'He de discrepar con mis colegas preopinantes, ya que considero que el recurso no puede prosperar...

El juez del concurso rechazó la prescripción opuesta, afirmando que el plazo extintivo del art. 56 de la ley falimentaria no puede comenzar a correr en caso de derechos litigiosos, hasta tanto se dicte sentencia firme que reconozca la pretensión, por lo que -en el *sub lite*- dicho término habría tenido nacimiento recién el 1 de octubre de 2002, confirmando así la tempestividad del pedido verificadorio. La alzada revocó dicha decisión... consideró que al momento de la iniciación del incidente de verificación tardía, la acción se hallaba prescripta.

En este sentido, he participado de la doctrina de este Tribunal según la cual el plazo aludido es el de prescripción y no el de caducidad, por lo que debe ser analizado en los términos de la legislación de fondo, pudiendo ser suspendido, dispensado o interrumpido (Ac. 77.817, sent. del 28-V-2003).

Sobre esta base, deben observarse dos circunstancias que son pertinentes para la resolución del caso: ¿cuándo opera el *dies a quo* del término estatuido en el art. 56 de la Ley de Concursos y Quiebras? Y, en su caso ¿se ha perfeccionado la causal de interrupción prevista en el art. 3986 del Código Civil?

En cuanto al primer tópico, creo que debe distinguirse la prescripción del crédito reclamado, con la de la pretensión verifcatoria.

El sistema vigente al momento de la incoación de estas actuaciones, diseñado por la ley 24.522 (antes de la reforma de la ley 26.086) (el subrayado es mío), aunaba la pretensión de reconocimiento judicial de un derecho, con el pedido de incorporación del mismo en el pasivo concursal (objetivo específico del mecanismo verifcatorio). Así, los pretendidos acreedores que hubieran demandado a la fallida con anterioridad a la apertura del concurso, podían continuar ante el juez del concurso dichos reclamos (valiendo la decisión como pronunciamiento verifcatorio), u optar por iniciar el trámite de conformidad con lo estipulado en los arts. 32 y ccs. del citado cuerpo legal.

Esto disminuía el riesgo de que se suscitaran problemas como el acaecido en el *sub discussio*, ya que resultaban inescindibles la acción fonal con la pretensión verifcatoria: reconocida la primera, actuaba automáticamente la segunda, con la consecuente interacción recíproca de las causales de interrupción.

Apartándose de dichas previsiones, el caso de marras no fue sometido al fuero de atracción. Por ende, luego de abierto el trámite universal, se mantuvo la escisión de las pretensiones de condena y de reconocimiento del crédito en el pasivo falencial. Esto llevó a que no existiera en el concurso pedido alguno para que se compute la acreencia respectiva, lo que implicó que el

transcurso del plazo de prescripción del incidente de verificación tardía no haya encontrado en autos acto interruptivo alguno que lo haga renacer.

La regulación del citado art. 56 coloca a la fecha de iniciación del concurso como **dies a quo** de la prescripción del pedido para incorporar tardíamente un derecho al pasivo.

El hecho de que los quejosos hayan mantenido "extraconcursalmente" su interés por la conservación del crédito siguiendo adelante con el proceso de daños, sólo repercute en el ámbito de la existencia del derecho fondal manteniendo interrumpido el término extintivo del crédito, pero no en el campo del concurso. (El subrayado es mío) Lo que se debate aquí es la subsistencia del derecho a verificar la acreencia en el proceso universal del deudor insolvente, prerrogativa que cuenta con modalidades regladas para su ejercicio (arts. 21 inc. 1 y 32 y ccs., ley 24.522) y cuyo planteamiento tiene el pregonado efecto interruptivo, que evita el decaimiento de la acción vericatoria por el transcurso del término de dos años antes del dictado de la sentencia respectiva.

Reitero que esta disyuntiva no se hubiera presentado en caso de que se hubiera dado cumplimiento a las previsiones del art. 21 inc. 1) del cuerpo normativo citado, ya que -en tal situación- la procedencia del derecho a ser indemnizado (acción fondal) y a incorporar el mismo en el pasivo concursal (acción vericatoria) hubieran sido abordados de manera conjunta.

Por ello es que no resulta óbice a lo expresado afirmar -aplicando el principio *actio non natur no praescribuntur*- que el derecho a verificar sólo nace con la sentencia firme que acoge la pretensión resarcitoria, momento hasta el cual no habría posibilidades de insinuar el crédito en el concurso.

El *dies a quo* de la pretensión vericatoria nace con la apertura del concurso y no con el dictado de la sentencia de conocimiento sobre el crédito exigido, en razón de que a partir de dicho momento los interesados tienen a su disposición los mecanismos específicos ya aludidos para reclamar el reconocimiento del derecho a la indemnización y la incorporación en la masa. La

acción, por ende, nace en dicha oportunidad.

A mayor abundamiento podría agregarse que en esta clase de trámites, se hayan sometidos al principio de universalidad incluso algunos créditos no exigibles (v. art. 125, L.C.Q.), por lo que aun habiéndose vulnerado el fuero de atracción entonces vigente, (el subrayado es mío) era posible que los accionantes se presentaran antes de obtener sentencia firme y se insinuaran en el pasivo dejando sometida la procedencia del pedido a las resultas del proceso antecedente.

Si bien una presentación semejante no hubiese constituido una senda adecuada para lograr la verificación, hubiera sí importado un acto interruptivo de la prescripción de la acción de verificación tardía, en los términos del art. 3896 del Código Civil, ya que habría exteriorizado la voluntad inequívoca de mantener subsistente el derecho a sumar la obligación respectiva en el pasivo universal. (El resaltado es mío).

Por lo expuesto... el recurso debe ser rechazado ´ ´.

Me parece esta sentencia de la SCBA, esencial para poder graficar dos líneas interpretativas disímiles a considerar, en un caso que tiene como peculiar el ser atendido de conformidad al régimen anterior a la reforma del 2006 a la LCQ, pero con posterioridad a ella. Aclaro que el lector debe ser cauto al interpretar el caso que acabo de presentar. En doctrina y jurisprudencia, es prácticamente incontrovertido el planteo de que la prescripción del art. 56 de la LCQ se aplica a los procesos concursales abiertos bajo el régimen de la ley 19551 ^[61]. Pero para ello, el plazo de dos años (que la ley 24.522 disponía en forma única), debía contarse desde que dicha ley entraba en vigencia. Pero el tema que nosotros acabamos de ver, no solo refiere a la bisagra temporal ley 24.522/reforma 2006, sino que

⁶¹ **ALEGRIA, HECTOR** - “LA LLAMADA “PRESCRIPCION CONCURSAL” (ART. 56, 6º PARRAFO, LEY 24.522)”, ESPECIAL PARA LA LEY, LA LEY 2003-B,661, LA LEY ONLINE, 2003, pág. 3.

además, lo que trata es la aplicación de la reforma, y eventualmente el estudio de qué causales de suspensión e interrupción han tenido lugar en el caso en particular.

Por tanto, creo haber satisfecho este punto ineludible, dado que es fundamental aun hoy, (a tres años del nuevo régimen), conocer cómo se resuelven cuestiones de aplicabilidad de la reforma, en tanto, por la complejidad propia de los procesos concursales, más la dilación escandalosa de muchos juicios en la República Argentina, es una cuestión que concierne al concursalista del presente.

Otros Fallos que me interesa comentar, son:

- "Caimari S.A.I.C.I. s/ Conc. Prev. s/incidente de pronto pago (Roldan Nicandro Oscar)" - CNCOM - 26/04/2007: "Caimari S.A.I.C.I. se presentó en concurso preventivo con fecha 25.09.01, el presente incidente se inició como pronto pago el 13.08.03 y, ante el dictamen desfavorable del síndico obrante en fs. 40 de fecha 5.4.05, se reencauzó la pretensión crediticia como verificación tardía el 15.9.05. En este marco, y si bien es cierto que la normativa concursal no establece expresamente que la promoción del incidente de verificación se halla concatenada con el fracaso del pronto pago, juzga esta Sala que resulta improcedente la excepción opuesta por la concursada, cuando como en el caso, a pesar de haber transcurrido objetivamente el plazo establecido por el art. 56 LCQ desde la presentación en concurso hasta la interposición de la verificación que da cuenta el escrito de fs. 109/14, se encuentra incontrovertido que el verificante había reclamado el pronto pago de su acreencia con anterioridad al plazo de referencia. Ello así, porque tal requerimiento interrumpió el término bienal, poniendo de manifiesto la voluntad del acreedor de mantener vivo su derecho y hacerlo efectivo. En consecuencia, se aprecia que en el subexamine no operó la prescripción alegada por la quejosa, toda vez que cuando se readecuó el trámite no había recaído resolución sobre la pretensión de pronto pago y, por ende, no había comenzado a correr otra vez el plazo en cuestión".

- “ Volkswagen S.A. de Ahorros para Fines Determinados c/ Gago, Cecilia Marta y Otro s/ Ejecución prendaria ”, [Sitio Web SCBA](#), Sumario B353897, CC0203 LP 95482 RSD-315-4 S 18-11-2004, Juez Billordo: “ ... Resulta también hábil para interrumpir el curso de la prescripción, la petición ejecutoria incoada dentro del plazo bienal prescripto por el artículo 56 Ley 24.522.- ”
- “Moya, Mónica Cristina s/ Incidente verificación de crédito” [Sitio Web SCBA](#), Sumario B255606, CC0201 LP 103017 RSD-45-5 S 5-4-2005, Juez MARROCO (SD): “ ... Si el juicio laboral ha continuado, a pesar del efecto de la notificación presumida que produce la publicación edictal de la apertura del concurso preventivo del empleador, esa demanda tiene virtualidad interruptiva del curso de la prescripción prevista en el art. 56 de la ley 24.522 (art. 3986 Código Civil), porque las tramitaciones cumplidas en ese pleito evidencian la intención de no hacer abandono de su derecho y no dejarlo perder, máxime que la concursada ha acallado su "status" concursal en el trámite del juicio laboral y que no ha informado oportunamente en el concurso la existencia de tal juicio, por lo que mal puede ahora, oponer la prescripción concursal, por aquello de que nadie debe extraer provecho de su reticencia y menos aún de su dolo. ”
- “Rubio Gloria y otro c/ Compañía Productora Alimentos s/ concurso preventivo s/ Incidente de Verificación” Expte. 131.995, Juzgado Civil y Comercial nº 10 Mar del Plata – [Sitio web SCBA](#), nº 0102131995 - CC0102 MP 131995 RSD-314-5 S 26-5-2005, Juez ZAMPINI (SD): “ Siendo de aplicación al proceso concursal lo normado en los arts. 3986, 3987 y conchs. del C. Civil, debe reconocerse carácter de acto interruptivo de la prescripción a los actos procesales realizados en otra instancia, en la medida que exteriorizan la voluntad del titular del derecho de no dejar que prescriba... Además... como enseña Vélez Sarfield en su nota al art. 3986 C.C., “ aunque la demanda sea nula, prueba la diligencia de quien la interpone. ” Algo destacado de este fallo es también: “ ... No fue lógicamente la demanda (promovida antes del

concurso) la que interrumpió la prescripción del art. 56 LCQ, sino que lo fueron los actos procesales cumplidos en sede laboral con posterioridad a la presentación del deudor en convocatoria, aun cuando quepa reputar a tales actos nulos, por el hecho de haber sido realizados ante juez incompetente.´´

- En ´´Mazzini, Marcelo Omar s/ Incidente de Verificación de Crédito´´ Expte. 106.200 – Excma. Cámara Segunda de Apelaciones, La Plata – Sitio Web SCBA nº 0201106200, se dijo: ´´... la interrupción sucedida para alguno de los acreedores, no puede beneficiar a quienes no actuaron oportunamente en defensa de sus derechos.´´
- Fallos que sugiero en relación al tópico (ver datos de autos en apartado especial), son:
 - ´´Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.´´
 - ´´Laguna La Tosca S.A.´´
 - ´´Schneider´´, muy interesante respecto de la posibilidad de utilizar la demanda contra ´´demandado genérico´´ como causal de interrupción.
 - ´´Telearte S.A.´´
 - ´´Transporte del Oeste´´

3) Conclusión del Tópico:

Al dar inicio a este capítulo, formulaba tres preguntas, que ahora tienen respuesta, a saber:

- 1) **¿Proceden las causales?** Indudablemente sí.
- 2) **¿Cuáles?** Todas las del derecho de fondo (Código Civil, esencialmente).
- 3) **¿Qué acción protegen?** Es la acción vericatoria (tardía) del art. 56 LCQ. Lo que resulta trascendental, es ver qué plazo ha de corresponder al acreedor en concreto, para ver si una causal alegada, resulta efectivamente aplicable al caso concreto. O sea: la

defensa anti-prescripción que es la interrupción o suspensión de su curso, debe estar fundada siempre en una causa legal que haya tenido lugar en el tiempo, luego de “nacida” la acción de verificación que en el caso concreto se haya de instar.

CAPÍTULO III

LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO PARA PLANTEAR LA DEFENSA DE PRESCRIPCIÓN.

Pretendo iniciar este capítulo, citando al C.P.N. Valentín Carciochi, quien dice: ‘ ‘El contador síndico... es un funcionario judicial, al servicio del Juez del concurso, de la masa de acreedores, y del interés general del proceso.[⁶²]’ ‘ En tal idea, creo que lo más atinado es verlo como un órgano esencialmente imparcial, que no puede, (menos debe), ponerse en defensa de intereses de parte, toda vez que la ley no lo legitime expresamente, en particular cuando es la parte la legitimada inequívoca.

Más adelante, el autor, (en oportunidad de estudiar el rol del contador síndico como observador del pedido de verificación de créditos, art. 34 LCQ), dice: ‘ ‘La Temporalidad; el peticionante debe mencionar y probar, si su acreencia es vencida o a vencer. El observante debe prever la prescripción legal del crédito, no solo conociendo los plazos de cada título y de cada obligación, que tienen distintos vencimientos... y hay temporalidades diversas e implícitas, etc.’ ‘ [⁶³]. Ello me autoriza a vislumbrar que reconociendo en cabeza del síndico el deber de cerciorarse de la vida o no de cada derecho presentado a verificarse, en cuanto a los plazos prescriptivos de los títulos fuente de la obligación y las acciones individuales correspondientes, el autor (contador), tiene una posición en pro de la legitimación de la sindicatura para plantear la defensa.

⁶² **CARCIOCHI**, VALENTIN JULIO, -“EL CONTADOR PUBLICO EN LOS CONCURSOS Y QUIEBRAS – EL CONTADOR CONCURSALISTA”, OSMAR D. BUYATTI LIBRERÍA EDITORIAL, AVELLANEDA, BA, ARGENTINA, 2004, página 113.

⁶³ **CARCIOCHI**, VALENTIN JULIO, -“EL CONTADOR PUBLICO EN LOS CONCURSOS Y QUIEBRAS – EL CONTADOR CONCURSALISTA”, OSMAR D. BUYATTI LIBRERÍA EDITORIAL, AVELLANEDA, BA, ARGENTINA, 2004, página 121.

Con esta reseña, comienzo el estudio del tópico en el conocimiento de que la cuestión planteada habilita el debate, toda vez que la ley, (sin ser un caso de laguna legal plena), no resuelve el planteo. Por tanto veamos:

1) Doctrina:

a) Está Legitimado:

- ‘ ‘Con relación a la oposición de la prescripción, la misma debe ser deducida por el concursado preventivamente, revistiendo legitimación suficiente también el síndico... No desconocemos que la función que debe cumplir la sindicatura en el incidente de verificación tardía, en el marco de un concurso preventivo, se halla discutida en doctrina y jurisprudencia recientes... El síndico asume el rol de técnico imparcial que persigue la determinación real del pasivo, y cuenta para ello con las prerrogativas de las que goza en su condición de funcionario, que se vinculan por contrapartida, con el deber que le asigna la legislación falencial de velar por los intereses del concurso. ‘ ‘ [64] Tales son los argumentos vertidos por la doctrina que se inclina por reconocer la debida legitimación al síndico concursal. Me parecen firmes, puesto que aun cuando la prescripción no puede ser planteada de oficio, no debemos nunca confundir la figura de la sindicatura con la del órgano jurisdiccional, porque que ello implicaría una notable desnaturalización del instituto. Mi postura la planteo en la conclusión del tópico.
- Alegría: ‘ ‘ Una reflexión especial requiere considerar si el síndico o, en su caso, el Comité de Acreedores, tienen facultad para oponer la prescripción, aun cuando no hubiera sido interpuesta por el concursado. La cuestión merece un desarrollo particular de cierta extensión, pero, en principio, anticipamos nuestra opinión favorable al reconocimiento de esa facultad, precisamente porque uno y otro órgano tutelan el interés

⁶⁴ **DI TULLIO, JOSE ANTONIO** - ‘ ‘TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS’, LEXIS NEXIS, 2006, páginas 404 y 405.

concursal (concretamente, de los acreedores). Aún más, debe pensarse si esa facultad no corresponde también a cualquier acreedor ‘interesado’.
[⁶⁵]’ ’

- Casadío Martínez es citado por Galíndez, quien dice: ‘ ‘... Casadío Martínez, quien sostiene que el síndico se encuentra legitimado para oponer la prescripción, a los fines de una adecuada conformación del pasivo concursal. Invoca para ello el art. 3963 del C.C., que dispone que ‘los acreedores y todos los interesados en hacer valer la prescripción, pueden oponerla a pesar de la renuncia expresa o tacita del deudor o propietarios’. [⁶⁶]’ ’
- Fassi y Gebhardt: ‘ ‘El síndico debe, pues, oponer la prescripción en la primera oportunidad en que intervenga en el incidente. Nota: Cfr. Varangot, *Verificación de Créditos*, ED 27-995. [⁶⁷]’ ’
- Garaguso: ‘ ‘Ciertamente está aun sin contestar y es motivo de fallos encontrados la posibilidad que sea el síndico quien oponga la prescripción... El reconocimiento del deudor no impide al síndico o a los acreedores y otros interesados oponer la prescripción cumplida. [⁶⁸]’ ’
- García: ‘ ‘Nos preguntamos también, si el síndico puede hacer valer la prescripción operada respecto de la acción del acreedor. Creemos que **tal facultad debe conferirse al síndico** - cuando antes no la ejerció el concursado- pero no en función de un “interés” en la declaración de la prescripción, sino en virtud de sus especiales facultades instructorias en la

⁶⁵ **ALEGRIA, HECTOR** - ‘ ‘LA LLAMADA “PRESCRIPCION CONCURSAL” (ART. 56, 6º PARRAFO, LEY 24.522)’, ESPECIAL PARA LA LEY, LA LEY 2003-B,661, LA LEY ONLINE, 2003, pág. 6.

⁶⁶ **GALINDEZ, OSCAR A.** - ‘ ‘VERIFICACION DE CREDITOS, 3º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA’, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA S.R.L., BS. AS., 2001, nota 27 de pág. 272.

⁶⁷ **FASSI, SANTIAGO Y GEBHARDT, MARCELO** - ‘ ‘CONCURSOS Y QUIEBRAS 7 º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA’, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA, BS. AS., 2000, pág. 179.

⁶⁸ **GARAGUSO, HORACIO PABLO Y GARAGUSO, GUILLERMO HORACIO FRANCISCO** ‘ ‘PONENCIA 9 DERECHO COMERCIAL Y CONCURSAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MAR DEL PLATA’, COLEGIO DE ABOGADOS MAR DEL PLATA, MAR DEL PLATA, Google, 2008, en relación al fallo ‘ ‘Arpez S.A. s/ Quiebra – casusa nº 45.895, resolución del 30/6/2008, de trámite ante el Juzgado Civil y Comercial nº 10 de Mar del Plata.

determinación de la legitimidad y extensión de cada uno de los créditos, y en la correcta delimitación de la masa pasiva. No encontramos obstáculo alguno en que el síndico, en la intervención que le corresponda en la acción verifcatoria planteada, denuncie (más que “oponga”) la prescripción operada respecto de la misma. Entendemos que **el síndico debe** poner de manifiesto al juez (respecto de quien actúa como órgano auxiliar) toda circunstancia que obste a la validación de una pretensión verifcatoria, como por ejemplo la extinción de la obligación, por cualquier modo en que ella hubiera operado, incluso por prescripción. **Ello sin perjuicio del derecho de defensa que deberá asegurarse al acreedor insinuante frente a la objeción sindical.** ^[69]’ ’ (Los resaltados son míos). Al respecto deseo agregar que entiendo que cuando la autora parece relegar la facultad de oposición de la excepción de prescripción por parte del síndico al caso de ausencia de planteo de la misma por el deudor, entiendo que no quiere decir que de hacerlo también (ambos simultáneamente), la sindical no sería válida. Interpreto que lo que la autora pone de manifiesto es lo innecesario de tal acontecer, pues una vez que el deudor lo haga, ya no habrá “riesgo” de que el juez deje de tener ante sus ojos la petición por resolver, y tenga el poder de hacerlo (el que no posee de oficio). Entonces en ese caso, el síndico ve su misión de control ejercida, si bien de modo indirecto. Pero sería erróneo entender que el síndico deba “esperar” el no planteo de la defensa por parte del concursado, pues ello no tiene ningún asidero, y esencialmente, porque ambos han de contar (de reconocerle la facultad al síndico), con idéntico plazo para el ejercicio del mismo acto procesal.

⁶⁹ **GARCIA, SILVANA** - “DOS CUESTIONES SOBRE PRESCRIPCION ABREVIADA CONCURSAL (ART. 56 LCQ)”, PUB. LLL EDITORIAL 2009 (JUNIO), 505, LA LEY ONLINE.

b) No está Legitimado:

- Galíndez: ‘ ‘El síndico **no** es sujeto legitimado para oponer la prescripción en el informe individual, ya que es un órgano imparcial que no reviste calidad de parte interesada. En cambio, sí se encuentran habilitados para su oposición el deudor o fallido y los demás acreedores que pidieron verificación. [70]’ ’
- Lorente: ‘ ‘Por remisión a la amplia facultad que el art. 3963 del C.C. hace a los ‘interesados’ para oponer la prescripción, creemos que también podría hacer valer el instituto un titular de un crédito del concurso (art. 240 LCQ), aunque **no** podría hacerlo el síndico, por carecer de interés legítimo para ello... Nota 147: En igual sentido **NICHELMANN**, Víctor Hugo. [71]’ ’
- Rivera: ‘ ‘La ley prevé que en el primer caso, incidente tramitado durante el concurso, son partes el deudor y el acreedor. El síndico se limita a presentar un informe una vez concluido el período de prueba. [72]’ ’
- Stacco: si bien el autor no se manifiesta en concreto respecto de la legitimación a la hora de oponer la prescripción, dice en referencia al síndico lo siguiente: ‘ ‘El síndico es un ‘funcionario del concurso’ (art. 251 LCQ), cuya actuación es personal (art. 258 LCQ), con las funciones que le otorga la ley (art. 254 LCQ)... asume, como órgano del concurso, la posición formal de contradictor legitimado por la L.C., impropriamente llamado ‘parte’ en la terminología de la ley... entendiendo este concepto en sentido de ‘parte procesal’ es decir sujeto necesario en las relaciones

⁷⁰ **GALINDEZ**, OSCAR A. - ‘ ‘VERIFICACION DE CREDITOS, 3º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA’, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA S.R.L., BS. AS., 2001, pág. 272; 340.

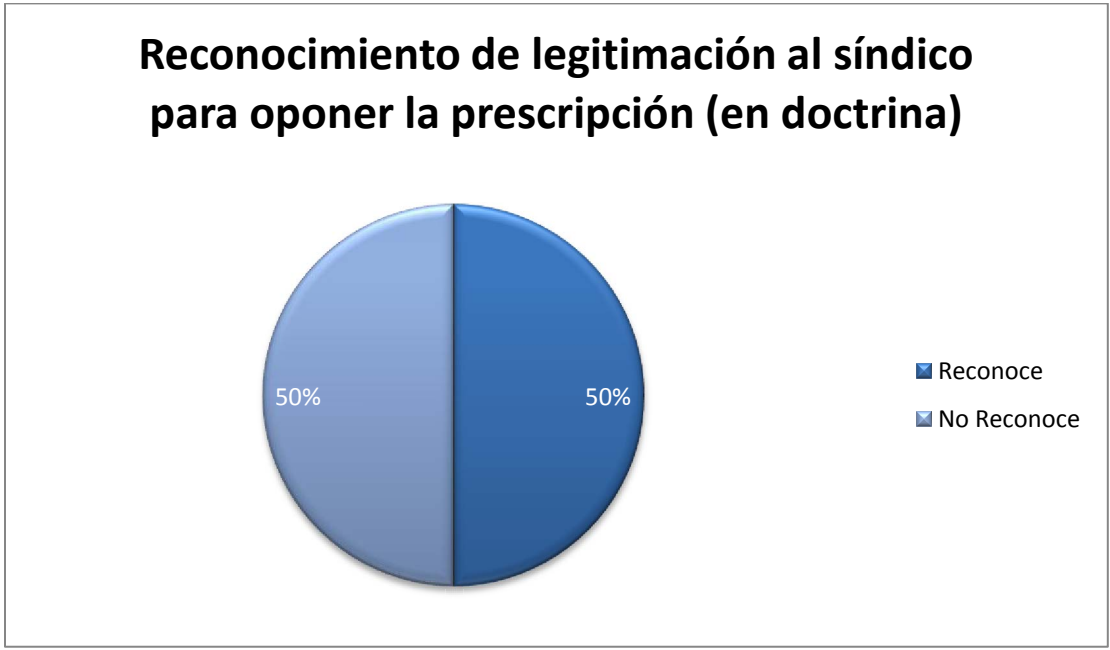
⁷¹ **LORENTE**, JAVIER ARMANDO, ‘ ‘LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS TOMO I’, EDICIONES GOWA PROFESIONALES; Haedo, BA, Argentina, 2000, pág. 602.

⁷² **RIVERA**, JULIO CESAR, ‘ ‘INSTITUCIONES DE DERECHO COMERCIAL TOMO I CONCURSO’, RUBINZAL - CULZONI, STA. FE, 2003, pág. 412.

procesales de los juicios e incidentes que menciona la ley. No, evidentemente, parte sustancial, como titular del derecho en litigio. [73]’’

- ‘’Plazo de prescripción concursal en la conversión de quiebra en concurso. Legitimación del síndico para oponer la prescripción... Los autores concluyen que... la sindicatura no se encuentra legitimada a oponer la excepción de prescripción debido a que no reviste el carácter de parte en los incidentes de verificación tardía en un concurso preventivo y la deudora no se encuentra desapoderada (art.15 L.C.Q). [74]’’

c) Proporción:



Así se presentan las proporciones en la doctrina consultada, en la que sobre un total de 12 fuentes que tratan el tema expresamente, el 50 % reconoce, y la otra mitad no. Así queda plenamente reflejado el marco dividido en el que la cuestión es pensada por los autores.

⁷³ **STACCO, JORGE SANTOS** - ‘’INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA: ASPECTOS PROCESALES’’, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, TRELEW, 1997, pág. 10.

⁷⁴ **CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DEBUENOS AIRES, DELEGACIÓN LOMAS DE ZAMORA** - 3º CONGRESO PROVINCIAL DE SÍNDICOS CONCURSALES - ‘’CONCLUSIONES’’, DEL 25 DE AGOSTO DE 2007, GOOGLE.

2) Jurisprudencia:

Toda la jurisprudencia consultada, en los casos pertinentes, se muestra a favor del reconocimiento de la facultad. La mayoría lo hace de modo incontrovertido, aun cuando la parte interesada haya cuestionado la legitimación en instancias anteriores, pero sin inferirse de ello efectos diferenciales, por ser también el deudor quien ejerce idéntica medio de defensa, pero en su caso sí, con el carácter de parte. Así, algunos de los más destacados pasajes son:

- “Recientemente, si bien con el argumento del "interés" en la declaración, se ha sentenciado: ‘El síndico se encuentra facultado para invocar la prescripción de un crédito insinuado en un proceso de verificación tardía, pues si bien no es propiamente parte del proceso incidental en virtud de lo dispuesto por el art. 3963 del C.C y por la función que desarrolla debe ser considerado entre los interesados que pueden hacer valer la defensa citada’ (CCCRos. Sala II, 21-12-2000, "F.E.c/ Prince, Edgardo s/ quiebra s/ verif. tardía", LL Litoral, 2001, pág. 970). [75]”
- ‘ ‘El señor juez a quo hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la concursada (fs. 38/40) y la sindicatura (fs. 55/56), declarando prescripta la acción verifcatoria incoada, con costas al incidentista vencido. [76]’ ‘ Al respecto me interesa señalar que en este caso, como se ve en la referencia a fojas, la actuación del síndico y la del deudor son independientes, con lo que, si bien ambos plantean la prescripción, cada uno lo hace a su forma. Ello no modifica el planteo. Sería inadmisibile una presentación conjunta, puesto que no respondería en absoluto a la naturaleza de ambos sujetos, uno parte,

⁷⁵ **GARCIA, SILVANA** - “DOS CUESTIONES SOBRE PRESCRIPCION ABREVIADA CONCURSAL (ART. 56 LCQ)”, PUB. LLL EDITORIAL 2009 (JUNIO), 505, LA LEY ONLINE.

⁷⁶ “Transporte del Oeste S.A. s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Verificación de Crédito”, Expte. 50.707, Excma. Cámara de Apelación Civil y Comercial, Sala I, Morón, 2004.

el otro “parte necesaria” pero imparcial. Pero lo saliente, es ver que en este caso que atendemos, ya no importa tanto la legitimación del síndico, porque aun cuando se le niegue la misma, habrá de proceder el planteo de la parte.

- “Dictada la sentencia definitiva de Cámara... se presentó el abogado... promoviendo acción subrogatoria... Solicitó sea verificada tardíamente la totalidad de las sumas adeudadas a sus clientes... La sindicatura opuso contra este pedido la excepción de prescripción, que constituye el núcleo de la problemática abordada en esta sede.^[77]” Más adelante en el fallo el juez Pettigiani dice: “Por ello, propicio el acogimiento de la propuesta... deberá... rechazarse la excepción de prescripción opuesta por la sindicatura y la concursada.”

3) Conclusión del Tópico:

Estoy convencido de la falta de legitimación del síndico para oponer la prescripción, puesto que: si bien no es él (el síndico), el órgano jurisdiccional, (quien tiene vedada por ley la posibilidad de plantear o decretar la prescripción), aun conserva una naturaleza intrínsecamente imparcial (la que de por sí es absolutamente necesaria por la relevancia de sus funciones).

Así, veamos que un acreedor al intentar verificar su crédito, lo hace “frente” a los demás acreedores, y “ante” el síndico. O sea, si existe interés en la declaración de la prescripción, es a los coacreedores a quien les incumbe la carga procesal, en defensa indirecta de su propio derecho, y obviamente al deudor, que tiene la más amplia defensa que un sujeto de derecho pueda ejercer (la de los derechos propios). Con ello quiero decir que

⁷⁷ “Reversat, Ricardo David y Otra c/ Expreso General Sarmiento S.A. s/ Incidente de Verificación de crédito” Expte. 93.969, fallo de la SCJBA de fecha 2/7/08, originario del Juzgado Civil Y Comercial nº 2 de San Martín.

siendo la prescripción un instituto que resiste hasta la posibilidad de la dispensa, o la renuncia (expresa o bien tácita por la inacción ante la formulación del pedido), no es el síndico la figura que la ley tiene en mira al momento de otorgar la herramienta que constituye la excepción de prescripción. (Ello lo hago valer análogamente para la eventual promoción de una acción declarativa de prescripción).

Por tanto entiendo que la cuestión de la legitimación del síndico en sentido amplio, -no solo en este supuesto, sino en toda su actuación en los procesos concursales-, debe de ser resuelta por la regla en virtud de la cual, lo que salva la duda es el texto legal. Dado que hay pasajes de la ley 24.522 que le otorgan tal legitimación de modo expreso, (art. 17; art. 24; 95; 110; 119; 142; 175; 176; 181; 191 últ. Párr.; 214; 272), tanto en lo atinente a recurrencia como otros casos de legitimación, entiendo que cuando la ley no lo hace, ello conspira contra la posibilidad de vérsela reconocida tácitamente.

El art. 254 LCQ no resulta revelador al respecto, en tanto preceptúa: ‘ ‘Funciones. El síndico tiene las funciones indicadas por la ley en el trámite del concurso preventivo, hasta su finalización y en todo el proceso de quiebra, incluso su liquidación.’ ’ Naturalmente una fórmula tan general como la enunciada, no ha de venir a salvar la duda de modo inmediato. Pero si ingresamos al sentido de la norma, (que es la única manera de no verla como una obviedad), advertimos que lo que el legislador debió haber querido estatuir, es que las funciones del síndico, son las establecidas en la ley, y ninguna más. De alguna manera, decir: ‘ ‘son funciones del síndico, las establecidas en la ley, y sólo ellas.’ ’

En tal inteligencia, percibo que se contribuye a la obtención de una mayor seguridad jurídica en el marco del concurso, lo que en un proceso de tan notoria complejidad y pluralidad de sujetos intervinientes, reviste la mayor importancia.

CAPÍTULO IV

EL ART. 56 DE LA LCQ COMO NORMA DEL CONCURSO PREVENTIVO O DE LA QUIEBRA.

El planteo que hago en este capítulo, versa sobre la posibilidad de hacer aplicación de los efectos de la norma en el marco de la quiebra.

Sabido es que por su ubicación y su sentido de ser, ha de resultar aplicable al concurso preventivo. Pero por lineal que se presente el título en su eventual respuesta, lo cierto es que la indagación en él, brinda resultados muy valiosos a la hora de dar luz a la temática, lo que en Derecho siempre es necesario, en miras de alcanzar mejores fórmulas legales, y así resoluciones judiciales más justas, y parejas.

Es así que presento al lector la siguiente exposición de las fuentes consultadas:

1) Doctrina:

a) Como norma exclusivamente del concurso preventivo exitoso:

- “En la jurisprudencia nacional prevalece la corriente restrictiva en la materia, por cuanto considera inaplicable en la quiebra el plazo de prescripción de dos años del art. 56 LCQ. No existe discusión en este punto en particular. La previsión legal contenida en el art. 56 LCQ, que contempla la prescripción, se aplica exclusivamente a los concursos preventivos y por tanto no rige en los procesos de falencia, pues:
 - El art. 200, referido al periodo informativo de la quiebra, no contiene remisión alguna a aquella norma (art. 56).
 - La diferente finalidad del concurso y de la quiebra, justifica que la prescripción solo se haya previsto en el primer caso, ello así debido a

que la quiebra persigue el pago de los acreedores a través de la liquidación de los bienes, por lo que la diligencia del acreedor en solicitar el reconocimiento de su crédito, le permitirá participar en el dividendo concursal, empero resulta indiferente a los efectos de sanear la situación patrimonial del deudor, como sucede en el concurso preventivo.

La Corte Suprema de Mendoza, explica con acierto que la aplicación restringida del mencionado artículo y su no extensión a la quiebra se apoya en los siguientes argumentos relevantes:

- La metodología del legislador...
- La ratio legis...
- La prohibición de analogía en materia de prescripción...^[78] Me

parece sumamente valioso el aporte del autor, puesto que encuadra el tema muy concisamente y de un modo concreto, apoyado también en la más alta jurisprudencia mendocina, que de por sí, se caracteriza por su solidez conceptual.

- ‘ ‘El efecto de abreviación de la prescripción liberatoria, lo produce el concurso preventivo exitoso, esto es, el que no se frustra terminado por el desistimiento o quiebra indirecta. ‘ ‘^[79]
- **Alegría dice:** ‘ ‘En general, la doctrina y la jurisprudencia declaran la inaplicabilidad de la prescripción del art. 56 a los casos de quiebra^[80] ‘ ‘. **Agrega:**

⁷⁸ **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - ‘ ‘TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS’, LEXIS NEXIS, 2006, páginas 141, 142.

⁷⁹ **ESCUTI**, IGNACIO A. Y **JUNYENT BAS**, FRANCISCO - ‘ ‘INSTITUCIONES DE DERECHO CONCURSAL’, ALVERONI EDICIONES, 1998, página 196.

⁸⁰ Refiere a nota ‘ ‘CIMINELLI, Juan Carlos, "Efectos del concurso preventivo", p. 86, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2001; CRAMER, Gabriel, "Viabilidad de la aplicación del art. 56 de la ley 24.522 a los procesos falenciales", en obra colectiva dirigida por VITOLO, Daniel Roque, "La protección de los terceros en las sociedades y en los concursos", p. 295, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2000; GARCIA, Silvana M., cit. 29, p. 236; JUNYENT BAS, Francisco y MOLINA SANDOVAL, Carlos A., "Verificación tardía: prescripción, rol de la sindicatura y otras cuestiones conexas en la ley 24.522" en "De la insolvencia". II Congreso Iberoamericano, In Memoriam de Héctor Cámara y Francisco Quintana Ferreyra, t. III, Ed. Advocatus, Córdoba, 2000, ps. 218/221 y cita de CRAMER en nota 10; RIVERA, Julio César, ROITMAN, Horacio y VITOLO, Daniel Roque, "Ley de concursos y quiebras", t. I, p. 407, Ed. Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2000. CNCom., sala D, "Construcciones Gallo S.R.L.

“Además de la interpretación restrictiva que fundamenta la no aplicabilidad del precepto a la quiebra, también se ha fundamentado en que la finalidad del instituto sólo lo hace aplicable cuando el acuerdo es posible o se encuentra en cumplimiento, pero no en una etapa liquidativa donde esa seguridad en beneficio de la recuperación del deudor, de los acreedores y de los terceros eventualmente participantes, desaparece en pos de la liquidación falencial.”^[81]

- Lorente: “Ciertamente que si hemos de atender a la finalidad del instituto, no cabe duda que **la prescripción concursal no se produce si el concurso preventivo se frustra**, ni tampoco en caso de quiebra indirecta, pues la prescripción se justifica en evitar el desequilibrio que produce la aparición de acreedores dormidos, y en beneficio de la salvaguarda de la empresa económicamente viable.”^[82] (Resaltado es mío).

b) Casos de quiebra:

- Di Tullio, presenta el siguiente análisis bajo el título “Quiebra Indirecta”. Dice: “Una corriente de opinión –con apoyo en numerosa jurisprudencia– ha sostenido que la introducción... de este plazo acotado de prescripción solo tendrá efectos en el caso del concurso preventivo que

s/quiebra s/inc. de pronto pago por Fontán, Néstor Javier”, 16/09/99; CApel. Civil y Com. de Azul, sala II, “Illia, M. A. y otra s/ quiebra s/ inc. de verif. tardía por O.S.P.R.E.R.A.”, 26/12/2000, LLBA, 2001-812; DJBA, 160-95; CApel Civil y Com. Rosario, sala IV, “Schoijet, Abraham c. Establecimiento Mecánico Record S.R.L. s/ quiebra”, 23/02/2001, LLLitoral, 2002-431, con nota de CARREGA, Francisco José; en sentido diverso, HEQUERA, cit. 1 p. 4. “De lege ferenda”, HEQUERA, Elena B., “Problemas que plantea la prescripción en la verificación tardía de créditos”, en Doctrina societaria y concursal, t. XII, p. 784, Ed. Errepar, Bs. As., 2001, propone la incorporación de la prescripción al régimen de la quiebra en una reforma legal.

⁸¹ **ALEGRIA, HECTOR** - “LA LLAMADA “PRESCRIPCION CONCURSAL” (ART. 56, 6º PARRAFO, LEY 24.522)”, ESPECIAL PARA LA LEY, LA LEY 2003-B,661, LA LEY ONLINE, 2003, pág. 5.

⁸² **LORENTE, JAVIER ARMANDO**, “LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS TOMO I”, EDICIONES GOWA PROFESIONALES; Haedo, BA, Argentina, 2000, pág. 604.

culmine con acuerdo preventivo homologado, esto es para el caso que no resulte frustrado por el desistimiento o la quiebra indirecta (casos que obstan al perfeccionamiento de lo que se denomina en doctrina el “concurso exitoso”). Rivera, sostiene que sólo es aplicable en el concurso preventivo, y que en caso de quiebra indirecta, las prescripciones operadas en el concurso fracasado, no se interrumpen por la quiebra ulterior. No tiene aplicación en caso de quiebra indirecta y su posición se funda en que la prescripción es de interpretación restrictiva.’’^[83] (Entre paréntesis es mío). Con este pasaje, queda planteada la idea general, de autores que sin titubear en ver al plazo de art. 56 como propio del concurso preventivo, extienden su análisis a los casos de quiebra directa (viéndolo como inaplicable), e indirecta (resolviendo la cuestión a favor de que si la prescripción se operó - algunos autores exigen que se haya declarado judicialmente- durante la tramitación del proceso preventivo, entonces la acción verifcatoria no renace, sino que ha muerto).

Así, me parece interesantísimo el planteo conceptual de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, (en cita de Di Tullio), en la que dice: ‘ ‘ ¿Qué ocurre cuando se llega a la quiebra por el fracaso del acuerdo preventivo? Desde la doctrina se han dado tres posibles respuestas:

1. La acción no renace: las acciones prescriptas por aplicación del art. 56 del concurso preventivo, no renacen por el hecho de la quiebra posterior... (así Rivera, Heredia)... esta tesis sin distingos, se aparta de la *ratio legis*.
2. Posición intermedia: depende de la existencia o no de una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada... (Así: Maffía; García).
3. Inaplicabilidad del art. 56 en la quiebra, cualquiera sea el medio por el que se llegó a ella: (Así: Rouillón; Figueroa Casas; Hequera).’’^[84]

⁸³ **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - “TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS”, LEXIS NEXIS, 2006, página 144, 145.

⁸⁴ **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - “TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS”, LEXIS NEXIS, 2006, nota en página 146, en referencia a: “Cristalerías de Cuyo S.A. s/

Creo que así expresado, quedan puramente vistas las posibilidades, y sus alternativas soluciones. Incluso agrego que José Antonio Di Tullio, entiende que si entre la presentación en concurso (y su rechazo *in limine*), y la resolución del tribunal de ulterior instancia que haga lugar a la apertura, transcurrieran los plazos del art. 56, sería “absurdo” entender que todo el pasivo concursal de repente se ha prescripto. Con ello, se comprende que la tramitación de un recurso en segunda instancia, tiene efectos suspensivos, pues hay una imposibilidad de hecho de promover la verificación por parte del acreedor. (art. 3980 C.C.) El caso del concurso preventivo al que se llega por conversión de una quiebra anterior, se analiza en 2 d) del presente capítulo.

- Galíndez por su parte dice: “En el supuesto de quiebra indirecta, debe reputarse que las acciones prescriptas con anterioridad, por aplicación del art. 56 LCQ, no renacen, ya que la extinción es definitiva. [85]” Veamos que el autor no exige la declaración de la prescripción, sino el presupuesto único de haberse operado el plazo correspondiente del art. 56 durante la tramitación del proceso preventivo. Así, si bien no llama a la norma perteneciente a la quiebra, hace operar sus efectos aun ella, en el caso citado.
- Rivera: “... si es una quiebra indirecta, las acciones prescriptas por aplicación del art. 56 del al LC en el concurso preventivo precedente, no renacen por el hecho de la quiebra posterior. Sin embargo algunos autores sostienen que, para que la acción de verificación no renazca en la

Concurso Preventivo s/ Incidente de Verificación Tardía. Cesación” Expte. 72.073 - Suprema Corte de Justicia de Mendoza – 12/04/2002.

⁸⁵ **GALINDEZ**, OSCAR A. - “VERIFICACION DE CREDITOS, 3º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA”, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA S.R.L., BS. AS., 2001, pág. 340.

quiebra indirecta posterior, es preciso que haya existido una sentencia que haya efectivamente declarado prescripta la acción. Y para otros, el efecto prescriptivo se produce solo en un concurso preventivo exitoso, esto es, el que no se frustra terminado por desistimiento o quiebra indirecta. ^[86] ‘ ‘ Mas adelante el autor aclara que adhiere a la doctrina de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, por cuanto coincide en que la tesis adecuada es la de hacer valer la ratio legis de la norma.

- Silvana García dice: ‘ ‘ Sintetizando los argumentos de la Cámara -que recoge lo sostenido por el a-quo- lo que ella afirma, es que si la concursada está en etapa de cumplimiento del acuerdo, con cuotas pendientes de cancelación, la prescripción no puede declararse; ello por el riesgo de que el concurso derive luego en quiebra indirecta, donde el acreedor, según se sostiene en el fallo, sí podría validar su crédito pues la prescripción breve no opera. Como primera reflexión, el decisorio se enrola en una de las tendencias que en doctrina se sustentan en torno a la cuestión de si la prescripción abreviada concursal opera y puede ser declarada en caso de quiebra indirecta. Según la Cámara, **en caso de quiebra indirecta por incumplimiento del acuerdo, el acreedor que no se insinuó en el concurso preventivo fracasado, estaría habilitado para intentar verificación de su crédito pues la prescripción abreviada concursal no podría operar.**^[87] ‘ ‘ (el resaltado es mío).

Más adelante la autora agrega que es su tesis la que postula que -sólo si hubo expresa declaración de prescripción en el concurso anterior, la misma se mantiene en la quiebra indirecta, de lo contrario

⁸⁶ RIVERA, JULIO CESAR, “INSTITUCIONES DE DERECHO COMERCIAL TOMO I CONCURSO”, RUBINZAL - CULZONI, STA. FE, 2003, pág. 416.

⁸⁷ GARCIA, SILVANA - “DOS CUESTIONES SOBRE PRESCRIPCION ABREVIADA CONCURSAL (ART. 56 LCQ)”, PUB. LLL EDITORIAL 2009 (JUNIO), 505, LA LEY ONLINE, pág. 2 – en referencia a: “Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, sala III (CCivComRosario)(SalalIII) CCiv. y Com., Rosario, sala III - 2008/10/20 - Coop. Agrícola Ganadera Dr. F. Netri Ltda c. Lua Seguros La Porteña S.A. s/ Incidente de Cancelación de Hipoteca.”

no puede ser ya declarada-. Dice: `` Sostenemos esta posición sustentándola no sólo en la ubicación sistemática de la norma del art. 56 LCQ... sino también y principalmente, en la finalidad tenida en cuenta por el legislador al incorporar el instituto. Ella ha sido dotar de cierta estabilidad al acuerdo, evitando incursiones súbitas de acreedores que obviamente aparejan riesgo para las posibilidades de su cumplimiento. Así, la "intangibilidad" del acuerdo está en la mira del legislador. ... Por tal razón, **la operatividad de la prescripción normada por el art. 56 LCQ, presupone no sólo el transcurso del plazo legal y la inacción del acreedor, sino la existencia de un acuerdo que ha sido homologado**, sea que a dicha homologación se haya arribado dentro del período de exclusividad o dentro de la etapa de salvataje (art. 48 LCQ). Es decir, la norma en análisis resulta aplicable en tanto exista un acuerdo cuya estabilidad proteger. Entonces, **cuando la falencia (indirecta) sobreviene antes de la homologación del acuerdo**, en esa quiebra, al no haberse verificado en el concurso anterior el presupuesto de aplicación del efecto prescriptivo, **no** podrán considerarse extinguidos los créditos que no hubieran sido insinuados dentro del plazo del art. 56 LCQ en el trámite fracasado. Por este mismo argumento (ausencia de acuerdo homologado), debe descartarse la posibilidad de la existencia de prescripciones ya declaradas en el concurso anterior. Y **si la quiebra indirecta tiene lugar una vez homologado el acuerdo**, aun cuando en principio se habría dado el presupuesto de funcionamiento de la prescripción (la homologación), creemos que la misma **no** podrá ser alegada frente al acreedor concursal que no habiendo concurrido dentro del plazo establecido en el art. 56 LCQ, intenta insinuarse ahora. Ello así porque no se verifican las razones tenidas en cuenta por el legislador para tornar aplicable la prescripción normada, fundamentalmente no existirá ya estabilidad de un acuerdo que proteger. Por lo tanto, sostenemos que el acreedor anterior que no verificó en el concurso, puede insinuarse -de no haber prescripto su crédito conforme al derecho de fondo- en la quiebra indirecta posterior. **No es que la acción "renazca" sino que -en**

función de los fundamentos vertidos- nunca murió.^[88] ‘ ‘ Coincido estoicamente con la autora.

- Truffat: ‘ ‘No hay prescripción concursal en la quiebra, sin embargo, si esta fuera secuencia de un concurso que hubiera tramitado por algo más de dos años y medio, y la sentencia hubiere pasado en autoridad de cosa juzgada, seguida por seis meses de inacción; aun vigente el concurso preventivo luego frustrado o fracasado, podría deducirse prescripción contra un pedido verificadorio formulado en tal ocasión. ^[89]‘ ‘ No comprendo a qué corresponden los plazos a que refiere el autor. Entiendo que su idea es coincidente con la que reconoce la procedibilidad de la excepción de prescripción en tanto los plazos del art. 56 LCQ se hayan operado durante la vida del concurso preventivo. Pero el plazo de ‘ ‘dos años y medio’ ’, francamente no interpreto de donde surge. Y el de ‘ ‘seis meses de inacción’ ’, lo veo muy cercano al de seis meses del art. 56 desde que la sentencia recaída ante juez natural intenta verificarse, pero no es lo que dice el autor. Por tanto, no comprendo acabadamente su idea.

2) Jurisprudencia:

c) Como norma exclusivamente del concurso preventivo exitoso:

- ‘ ‘El plazo acotado de prescripción aplicable solo al concurso preventivo... (dice Di Tullio), y en nota agrega: En un fallo que sin dudas marcará el camino a seguir en la interpretación de este instituto, la Suprema Corte

⁸⁸ **GARCIA, SILVANA** - ‘ ‘DOS CUESTIONES SOBRE PRESCRIPCION ABREVIADA CONCURSAL (ART. 56 LCQ)’ ’, PUB. LLL EDITORIAL 2009 (JUNIO), 505, LA LEY ONLINE, pág.3.

⁸⁹ **TRUFFAT, EDGARDO DANIEL**, - ‘ ‘FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS’ ’, ASTREA, BUENOS AIRES, 2007, pág. 196.

de Mendoza ha fijado su doctrina, resolviendo que el art. 56 LCQ, no resulta aplicable cuando al momento de dictar sentencia no subsiste la situación de concurso preventivo, en razón de haberse declarado la quiebra por el fracaso de aquel, puesto que ha dejado de regir la ratio legis de la norma, es decir, la loable finalidad de no prolongar por largos periodos la aparición de acreedores que reclamen sus créditos contra el concursado cuando hay concurso preventivo exitoso (Suprema Corte de Justicia de Mendoza, 12/4/2002, ‘ ‘Cristalerías de Cuyo S.A., LL Gran Cuyo 2002-386 ‘ ‘).[⁹⁰]

- Di Tullio nos presenta el caso ‘ ‘Nova Cosméticas’ ‘, diciendo que en el mismo, la Cámara de Apelaciones había confirmado el decisorio de primera instancia que en su momento rechazó el incidente de verificación tardía, al tener por operada la prescripción que prevé el art. 56 LCQ... Y la Corte de la Provincia de Buenos Aires, con apoyo en el dictamen del Procurador General, revocó la decisión impugnada, dándole la razón al recurrente. Así, transcribe el siguiente fragmento de tal dictamen: ‘ ‘... las remisiones contenidas en los artículos 126 y 200 ley 24.522, (dentro del tramo que regula el trámite de la quiebra), respecto del régimen de la verificación tardía en los concursos preventivos, en efecto, solo pueden entenderse referidos a las vías procesales para llevar adelante este tipo de pretensiones (incidente). Pero no en lo que hace concretamente al plazo de prescripción de los créditos reclamados de esta forma. En primer lugar porque ello no surge de la propia letra de la ley. Nótese que al art. 56 no alude a ninguna de las normas involucradas en esta remisión. El art. 200 solo involucra los arts. 35 a 40. Por otra parte, tampoco los términos en que se redacta la norma que contiene el plazo bianual de prescripción permite su aplicación a la quiebra ya que el evento procesal tomado en cuenta por el legislador para

⁹⁰ **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - ‘ ‘TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS’ ‘, LEXIS NEXIS, 2006, pagina 134.

establecer el *dies a quo* – presentación en concurso –, es inexistente en este trámite. ´ ´^[91]

- La Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de la ciudad de Mar del Plata, dejó sin efecto la resolución de primera instancia que había rechazado el incidente de verificación tardía, al tener por operada la prescripción que prevé el art. 56 LCQ... por considerar que el mismo se refiere exclusivamente a la verificación tardía en el concurso preventivo, y que no existe norma similar cuando se trata de verificación en la quiebra. ^[92]
- También se ha dicho: ´ ´ Ahora bien el art. 56 LCQ no es aplicable a los procesos de quiebra puesto que no pueden crearse términos de prescripción por analogía, y siendo los plazos de prescripción excepcionales de interpretación estricta y aplicación limitada, la conclusión debe ser que en las verificaciones tardías en las quiebras no rige el plazo de prescripción excepcional establecido en el mentado art. 56 (Sala D, 14.6.2000, "*Compañía Industrial Ganadera Penta SA s/ quiebra s/ incidente de verificación por Zacarias, Salvador*", Sala B, 25.11.98, "*Bodegas y viñedos Recoaro SA s/ quiebra s/ incidente de pronto por Oropel, Domingo Gregorio*", Sala B, 9.11.01, "*Frate, Gustavo Guillermo s/ quiebra s/ inc. De verificación de crédito por Liendo de Bonelli, Nelly Haydee y otros*", Sala D, 16/9/99 "*Construcciones Gallo SRL s/ quiebra s/ inc. de pronto pago por Fontan, Nestor Javier*"). Asimismo, destácase que el art. 56 LCQ se refiere con exclusividad a la verificación tardía en concurso y no existe norma similar cuando se trata de la mencionada verificación en quiebra; razón por la cual dicha solución no es extensible en principio a este último supuesto. Por su parte, tampoco se advierte aplicable dicha norma a los supuestos de quiebra indirecta como el de la especie. Ello, pues **el efecto prescriptivo lo produce el concurso preventivo exitoso**, esto es el que no se frustra terminado por

⁹¹ **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - ´ ´TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS´ ´, LEXIS NEXIS, 2006, página 142, acerca de autos ´ ´Nova Cosméticas S.A. s/ quiebra s/ incidente de verificación tardía (Banco Provincia de Buenos Aires)´ ´, tramitado por ante la Suprema Corte de Buenos Aires, 23/4/2003, RDPyC 2003-1.

⁹² ´ ´Melucci, Félix Luis s/ incidente de Verificación Tardía en autos: Cooperativa Agropecuaria e Industria s/ Concurso Preventivo (hoy su quiebra) - Cámara Civil y Comercial Mar del Plata, Sala 2ª, 15/6/2004.

desistimiento o quiebra indirecta, en atención a que se trata de la aplicación de normas referidas a prescripción insusceptibles de ser interpretadas por extensión a supuestos análogos o similares, habida cuenta del criterio restrictivo que debe primar en su consideración (art. 3949 CC). [⁹³]" (el resaltado es mío). Clarísima la postura del tribunal.

- "... estamos frente a una quiebra indirecta... En este tipo de procesos -y sin desconocer la unidad del concurso preventivo devenido en liquidatorio- la regla del art. 56 **no es aplicable**. Ello por cuanto su finalidad está inescindiblemente ligada al concurso preventivo, pues lo que se persigue con su aplicación es satisfacer "la necesidad del deudor cesante de cristalizar el pasivo, de modo de favorecer las negociaciones del concursado con sus acreedores y de permitirle una mayor previsibilidad en el diseño de una solución preventiva de la crisis" (JA, Lorente, "Ley de Concursos y Quiebras", t. I, p. 600, Ed. Gowa, 2000). Si estamos en un proceso preventivo que se frustró y devino liquidatorio, perseguir aquella finalidad se vuelve ilógico, porque su fundamento desapareció, y es bien sabido que "cesando la razón de la ley, cesa su disposición" (el adagio latino *cessante ratione legis, cessat ejus dispositio*, citado por Guillermo A. Borda "Reglas prácticas para la interpretación de la ley civil")... Por otra parte las palabras utilizadas por la ley refieren supuestos indudablemente referidos a la solución preventiva y no existe una norma interna de remisión que autorice ese recurso hermenéutico. En el mismo sentido se expresa Osvaldo J. Maffía ("Verificación de créditos", p. 413, Depalma, 1999) destacando que el art. 200 LCQ -verificación en la quiebra posterior de los créditos concursales- indica como aplicables los arts. 36, 37, 38 y 40 sin mencionar al 56. **Sin embargo puede suceder que -como en autos- la insinuación tardía se haya iniciado durante el concurso preventivo...** lo que puede dar lugar a dudas sobre la aplicabilidad o no del cuestionado precepto concursal. Sin embargo la más destacada doctrina (Maffía, Alegría y Kemelmajer de Carlucci) se ha encargado del

⁹³ "Prestaciones Médico Asistenciales S.A. s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Verificación Tardía (Por Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) – Juzgado nº 7 Sec. Nº 13, Capital Federal – 049862/2008ai.

tema y esbozado una respuesta que me parece ajustada al régimen general de interpretación y aplicación de la prescripción liberatoria. Refiere el primero de los autores citados... que si al momento de la declaración de falencia no existe una decisión favorable a la liberación del deudor, pasada en autoridad de cosa juzgada, no corresponde aplicar la prescripción breve del art. 56 LCQ, situación que se reporta en autos, donde al momento de emitir este voto ha transcurrido más de un año de la declaración de quiebra, como he referido en párrafos anteriores.

Juegan entonces a favor de la pervivencia del crédito, por un lado **la inexistencia de cosa juzgada** que admita la prescripción **y** por el otro **la conocida interpretación estricta que** debe seguirse de las normas de dicha forma de extinción de las obligaciones. [⁹⁴]’ ’ (el resaltado es mío).

- ’ ’ Luego, y **al excluir la Casación Provincial la aplicación del art.56 L.C. a las quiebras**, se refirió concretamente al término de dos años como de prescripción, añadiendo que como tal es de interpretación estricta (S.C.B.A. Ac.79698 “Nova Cosméticos S.A. Quiebra. Incidente verificación tardía: Bco. Provincia de Buenos Aires”; esta Sala causa Nº45778, 17/7/2003, “Carrocerías Rodríguez S.C.A. s/ Concurso Preventivo. Incidente de Verificación Tardía (Parra Italo A.)”).[⁹⁵]’ ’ (el resaltado es mío).

d) Casos de quiebra:

- Un precedente muy interesante de conocer, resuelve acoger la defensa de prescripción opuesta en los términos del artículo 56 LCQ, si surge que la demanda fue promovida cuando había concluido el plazo bienal, sin que constituya óbice a lo expuesto que se trate de

⁹⁴ “Ora S.A. s/ Concurso Preventivo s/ incidente de verificación tardía (Administración Federal de Ingresos Públicos) – Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Garantías en lo Penal de Necochea – 17/08/2005, publicado en LLBA 2006 (Febrero), 138. La Ley Online.

⁹⁵ “Laguna La Tosca S.A. s/ Concurso Preventivo s / Incidente de Verificación Tardía (Robert, Hugo y otros)”, Expte. 47.508, Excma. Cámara Civil Y Comercial Departamental Azul, Sala II, 2004.

una quiebra convertida en concurso preventivo, pues ello no incide en los parámetros temporales que rigen el cómputo de aquel plazo. Ello es así, toda vez que la norma no formula distingos respecto del carácter originario o del carácter derivado – en caso de quiebra antecedente-.[⁹⁶]

- También: ‘ ‘Cabe agregar, que una vez abierto el concurso preventivo se opera la reducción de los plazos de prescripción en aquellos casos en que los que se encuentran en curso superen el plazo legal. Las reducciones así operadas **no** se vuelven a modificar en la quiebra que pudiera ser declarada ulteriormente – supuesto que se da en la especie-, ni existe excepción alguna a ese plazo de prescripción generalizado para todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación (arg. Art. 202 LC; Cám. 2º Sala II, La Plata, causa 99.466 R.S. 103/03).[⁹⁷] ‘ ‘ (el resaltado es mío).

3) Conclusión del Tópico:

Es indudable que toda la doctrina entiende y acuerda, que los plazos del art. 56 LCQ no son de aplicación en el caso de quiebra directa, sino solo en el concurso preventivo.

Pero en lo relativo a la quiebra indirecta, debemos –para concluir-, tomar partido por aquellas posiciones que los aplican solo cuando la prescripción ha sido declarada previamente (durante el concurso, por sentencia); o aquellas que la ven operada cuando el

⁹⁶ **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - ‘ ‘TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS’’, LEXIS NEXIS, 2006, página 147, en referencia a autos ‘ ‘Sebastián Maronese S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación por fisco Nacional (AFIP - DGI), RDPyC 2001 – 3 – 657.’’

⁹⁷ ‘ ‘Transporte del Oeste S.A. s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Verificación de Crédito’’, Expte. 50.707, Excma. Cámara de Apelación Civil y Comercial, Sala I, Morón, 2004.

plazo ha transcurrido durante la tramitación del concurso –sin sentencia que la declare-.

Por tanto proyecto aclarar que lo que se plantea, no es lo mismo.

En un caso (el 2do.), se intenta hacer valer la prescripción en sí misma (con base en el art. 56 LCQ). Pero en el otro, lo que se opondrá como defensa, ya no es la prescripción, sino la cosa juzgada, que teniendo como fondo de la resolución la prescripción operada, se hace valer en proceso distinto a aquel en el que recayó sentencia declarativa.

Por tanto, opino que el caso de la sentencia no ofrece dudas, y de existir, siempre ha de poder ser opuesta, y por tanto encontrará la acción ningún espacio para su supervivencia.

Pero en el caso de no existir pronunciamiento declarativo, considero que la expiración del plazo durante el concurso, sin que la prescripción se haya hecho valer, no es óbice para que al devenir la quiebra indirecta se pueda concurrir a verificar, pues es el mismo caso que si fuese una quiebra directa, (en lo atinente a su naturaleza liquidativa), y por tanto la norma concursal, ya ha servido al deudor lo suficiente durante el concurso (el que le hubiere favorecido de ser exitoso), y, de no llegar este a buen fin, en el conjunto de consecuencias disvaliosas que la quiebra indirecta le ha de significar, creo que la no aplicación del art. 56, es una de ellas.

Es hora de que la interpretación se torne estricta con el deudor, y se dé espacio al acreedor, que en definitiva no ve satisfecho su crédito del modo lineal, sino que ha de tener que “convivir” con las eventualidades del proceso falencial de su obligado. A esta altura de la relación crediticia, es tiempo de coadyuvar –desde la ley- a la

procuración del cobro, la que creo es también la voluntad del legislador.

CAPÍTULO V

FINALIDAD DEL ART. 56 LCQ (VOLUNTAD DEL LEGISLADOR)

En este capítulo, pretendo exponer lo que las fuentes estudiadas comprenden que el legislador tuvo en mira al momento de redactar la ley.

Creo que es fundamental, siempre, atender a tal medio hermenéutico. Pero muy especialmente lo es en este caso, pues muchas de las conclusiones a que deba arribarse, tanto para el intérprete de parte, como especialmente para el Juez, constarán necesariamente en la argumentación que las funde, de referencias a la referida voluntad.

Es importante hacer un estudio serio de la misma, porque de no darse, se habilitaría la formulación de conjeturas, e incluso su desviación, y ello haría simplemente que el entuerto que se intente solucionar, aclarándolo, se vea agravado en su complicación.

Como última reflexión preliminar, quiero acotar que para dar lugar al estudio de la voluntad del legislador, en un caso en concreto, me parece crucial atender a la gradación de fuentes del art. 16 C.C., y por lo tanto dar primordial ubicación a la letra de la ley, que no puede nunca ser desestimada de lleno por argumentos a favor de una voluntad legislativa en contrario, dado que la ley (en especial en sentido formal, como es nuestro caso), cualesquiera fuese su texto, resulta obligatoria por imperio constitucional, y las vías legales de abrogación de sus efectos, son solo la derogación, o la declaración de inconstitucionalidad (en el caso concreto, y cuando corresponda). Por tanto, quiero decir que no es admisible romper con el texto de la ley, so pretexto de que el legislador no quiso decir lo que la ley finalmente decreta, pues ello en sí mismo es inconstitucional, y profundamente peligroso.

1) Doctrina:

- “Los autores de la ley expresaron: “al encarar esta reforma, se tomó en cuenta la necesidad que existe respecto de que no pueda prolongarse por amplios periodos la posibilidad de aparición de acreedores que reclamen sus créditos contra el concurso. En efecto, las posibilidades de recuperación de la empresa por la vía de la homologación del acuerdo, ya sea a instancia de la propuesta originada en el deudor como el sistema de cramdown, y en el caso de quiebra, por la liquidación de la misma o la conversión en concurso preventivo, privilegian el mantenimiento de la empresa en marcha o la reducción de las contingencias o riesgos futuros”.[⁹⁸]
- “La ley 24.522 previó, al incorporar este instituto, poner un límite a la incorporación de acreencias insinuadas con posterioridad a la homologación del acuerdo preventivo, que provocan inestabilidad e incertidumbre en la determinación integral del pasivo concursal, y tornan incierto el salvataje, y esta modificación legislativa ha sido valorada positivamente por la doctrina”.[⁹⁹] O sea que (conforme la cita), la razón de ser del art. 56, no es extinguir el derecho, sino establecer un plazo para conformar el pasivo concursal.
- “La ley protege los derechos, pero no ampara la negligencia, el abandono y desinterés del particular que no los ejerce. En el caso del concurso preventivo, ello se ve reflejado en la situación de los acreedores que con indiferencia se han mantenido ajenos al trámite concursal, sea porque no verificaron sus acreencias en forma tempestiva (art. 32), o bien porque no se insinuaron por la vía tardía, en la oportunidad prevista por la ley. El plazo acotado de prescripción pone fin a esta situación desigual,

⁹⁸ **DI TULLIO, JOSE ANTONIO** - “TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS”, LEXIS NEXIS, 2006, página 406, citando “Comentario al Proyecto de Ley de Concursos y Quiebras, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 1995, página 51, comentario al art. 56, cit. Por Roitman, Horacio, “Prescripción en la Ley de Concursos”, cit. Pág.191.

⁹⁹ **DI TULLIO, JOSE ANTONIO** - “TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS”, LEXIS NEXIS, 2006, páginas 124, 125.

vedando la posibilidad a los acreedores inactivos de insinuar sus créditos en forma ilimitada en el tiempo’’.^[100] Véase que aquí el autor, no presenta al plazo del art. 56 como una norma tendiente a cristalizar el pasivo, sino esencialmente como una medida condenatoria del acreedor inactivo, con una meta finalidad sí de otorgar seguridad jurídica a las relaciones obligacionales, (propia de toda prescripción y no de esta en particular). Pero considerando que ello ya había tenido lugar por parte del legislador (desde que cada acción individual tiene su propio plazo de operatividad), me resultaría redundante el plazo del art. 56 si es que fuese su finalidad la planteada por el autor citado.

- **Alegría:** ‘ ‘... se ha destacado (y esto nos parece de suma importancia), que en la solución concursal la estabilidad y fijeza del pasivo y la precisa determinación de aquéllos que tienen derecho a las prestaciones del acuerdo, es fundamental para poder llegar a soluciones serias de la crisis empresarial, las que en definitiva llevan al mantenimiento de la empresa en marcha... De esta manera podemos decir que el peligro del aumento de los pasivos, con los llamados pasivos eventuales u ocultos, conspira con las posibilidades de solución concursal: en muchos casos las agrava porque sus condiciones serán más inconvenientes para los acreedores y en otros las hará imposibles. ^[101]’ ‘
- **Rivera – Roitman – Vítolo:** ‘ ‘La *ratio* del art. 56, sexto párrafo, reside en la conveniencia de no prolongar por largos períodos la aparición de acreedores que reclamen sus créditos contra el concurso. En el tema pugnan los intereses del acreedor renuente –afectado por la fijación del plazo para actuar– y los intereses de los demás intervinientes y especialmente los de la economía en general para la que es valiosa la continuidad de la actividad. Se sigue en la tesitura de dar seguridad y certeza de la composición del activo y pasivo aun en desmedro de los

¹⁰⁰ **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - ‘ ‘TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS’ ‘, LEXIS NEXIS, 2006, páginas 125 y 126.

¹⁰¹ **ALEGRIA**, HECTOR - ‘ ‘LA LLAMADA ‘ ‘PRESCRIPCION CONCURSAL ‘ ‘ (ART. 56, 6º PARRAFO, LEY 24.522)’ ‘, ESPECIAL PARA LA LEY, LA LEY 2003-B,661, LA LEY ONLINE, 2003, pág. 2.

acreedores. Además, no es razonable que un acreedor guarde tan notoria inactividad frente a la presentación en concurso del deudor. En ese orden de ideas es que debe entenderse que este plazo acotado de prescripción no solo ha de ser aplicable a los acreedores quirografarios sino que también el mismo ha de alcanzar el caso de los créditos privilegiados. Es menester poner un límite temporal a la aparición de lo que en doctrina se ha llamado ‘pasivos ocultos’, intentándose con esta medida ‘cristalizar’ la situación del deudor, lo que es altamente favorable para el supuesto de salvataje previsto en el art. 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, por ejemplo.^[102]’’

- **Martínez de Petrazzini:** ‘ ‘Se intenta... con esta medida ‘cristalizar’ la situación del deudor, lo cual es altamente favorable para el objetivo de salvar la empresa mediante su adquisición por un tercero por el procedimiento del art. 48, ya que el interesado puede saber cuál es la situación real del pasivo, sin tener que temer algún otro pasivo contingente, que pueda surgir luego de transferida la propiedad. ^[103]’ ’
- **Truffat:** ‘ ‘... no puede dejar de repararse que el dispositivo no está estructurado teniendo en miras al *debitor* sino a los otros acreedores...^[104]’ ’
- **De conformidad:** Escuti y Bas ^[105], Lorente ^[106], Rivera ^[107], Vaiser ^[108], D’ Albano Torres ^[109].

¹⁰² **RIVERA, JULIO CESAR - ROITMAN, HORACIO – VITOLO, DANIEL ENRIQUE**, -‘‘LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS, TOMO I (ARTS. 1 A 76)’’, RUBINZAL – CULZONI EDITORES, SANTA FE, 2002, pág. 410.

¹⁰³ **MARTINEZ DE PETRAZZINI, VERONICA F.**, ‘‘LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS’’, EDICIONES MACCHI, B.A., 1997, pág. 103.

¹⁰⁴ **TRUFFAT, EDGARDO DANIEL**, - ‘‘FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS’’, ASTREA, BUENOS AIRES, 2007, pág. 217/218.

¹⁰⁵ **ESCUTI, IGNACIO A. Y JUNYENT BAS, FRANCISCO** - ‘‘INSTITUCIONES DE DERECHO CONCURSAL 2’’, ALVERONI EDICIONES, Córdoba, 2002, pág. 83.

¹⁰⁶ **LORENTE, JAVIER ARMANDO**, ‘‘LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS TOMO I’’, EDICIONES GOWA PROFESIONALES; Haedo, BA, Argentina, 2000, pág. 600.

¹⁰⁷ **RIVERA, JULIO CESAR**, ‘‘INSTITUCIONES DE DERECHO COMERCIAL TOMO I CONCURSO’’, RUBINZAL - CULZONI, STA. FE, 2003, pág. 414.

2) Jurisprudencia:

- Es Di Tullio quien presenta el caso ‘ ‘Martinelli’ ’ y dice ‘ ‘resuelto por el Tercer Juzgado de Procesos Concursales y Registro de Mendoza (confirmado por la Cámara de Apelaciones). En ese caso se interpretó que el fundamento de la inclusión del art. 56 párrafo 6º, en la ley concursal, reside en la conveniencia de no prolongar por largos periodos la aparición de acreedores que reclamen sus créditos contra el concurso.’ ’ [110]
- El mismo autor nos da el caso de los tribunales platenses ‘ ‘Robles’ ’ y dice: ‘ ‘La inclusión en la legislación concursal de la prescripción abreviada de dos años, reposa en la finalidad misma del concurso, concebido en función de la crisis de la empresa, como medio de la recomposición del pasivo y su reestructuración, procurando salvaguarda, lo que en definitiva redunda en beneficio de la economía, y del interés social, aun a costa del sacrificio de los acreedores... El plazo fijado contempla e integra equilibradamente los intereses en pugna de los acreedores concurrentes frente a los renuentes, y los del deudor concursado frente a la necesidad de su consolidación patrimonial a los fines de su saneamiento económico, a través de la continuidad y recuperación empresarial.’ ’ [111]

¹⁰⁸ **VAISER, LIDIA** - ‘ ‘VERIFICACION TARDIA EN EL CONCURSO PREVENTIVO’ ’ EN ‘ ‘DERECHO CONCURSAL’ ’ ROUILLON, ADOLFO A. N. (DIRECTOR) -, LA LEY 2004, pág. 890.

¹⁰⁹ **D’ALBANO TORRES, PATRICIA I.** - ‘ ‘LA PRESCRIPCION CONCURSAL Y LA RESPONSABILIDAD FISCAL POR DEUDA AJENA DE LOS DIRECTIVOS DE LAS SOCIEDADES’ ’, PONENCIA EN XVIII ENCUENTRO DE INSTITUTOS DE DERECHO COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, B.A., Google, sf.

¹¹⁰ **DI TULLIO, JOSE ANTONIO** - ‘ ‘TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS’ ’, LEXIS NEXIS, 2006, página 135, sobre ‘ ‘Martinelli, Luis Pascual y otra en Martinelli, Luis Pascual y Otra s/ Concurso Preventivo. Incidente’ ’ 4/5/1998, del Juzg. Conc. Y Reg. Mendoza, nº 3, a cargo del Dr. Mosso, confirmado por la C. Civ. y Com. Min. Trib. Mendoza, con nota de Holand, Mario D., ‘ ‘Prescripción de créditos privilegiados en el concurso preventivo’ ’, Zeus, 82-D-67.

¹¹¹ **DI TULLIO, JOSE ANTONIO** - ‘ ‘TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS’ ’, LEXIS NEXIS, 2006, página 136, sobre ‘ ‘Robles, Rodolfo Pedro s/ Concurso Preventivo’ ’, tramitado ante la C. Civ. Y Com. La Plata, Sala 1ª, 10/10/2002, LL Suplemento de Concursos y Quiebras del 14/3/2003, p.20.

- ‘ ‘El plazo de prescripción que contempla el art. 56 de la ley 24.522 es de aplicación a todo tipo de obligación, comprendidas las de cusa laboral. Es que el ordenamiento concursal, tras la reforma introducida en el año 1995 tiene por finalidad generar un mecanismo de extinción de las deudas, en este caso mediante la posibilidad de articular la defensa de prescripción, en virtud de la cual se impide el reclamo por pérdida de la acción. Se persigue con ello que el pasivo del deudor quede de algún modo determinado en forma definitiva, contribuyendo de esta forma a facilitar la superación de la cesación de pagos. [¹¹²]’ ’
- ‘ ‘... se ha dicho que la aplicación de este plazo de prescripción garantiza al tercero o acreedor un cuadro de estabilidad, certeza y seguridad en las relaciones jurídicas adquiridas, que influirá en la toma de decisiones en el momento de planificar a futuro la recuperación, saneamiento y reinserción de la empresa en el mercado (Roitman H. "Prescripción en la ley de concursos", Revista de derecho privado y comunitario", Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, T°22, p. 191). [¹¹³]’ ’
- ‘ ‘Ello por cuanto su finalidad está inescindiblemente ligada al concurso preventivo, pues lo que se persigue con su aplicación es satisfacer "la necesidad del deudor cesante de cristalizar el pasivo, de modo de favorecer las negociaciones del concursado con sus acreedores y de permitirle una mayor previsibilidad en el diseño de una solución preventiva de la crisis" (JA, Lorente, "Ley de Concursos y Quiebras", t. I, p. 600, Ed. Gowa, 2000). [¹¹⁴]’ ’

¹¹² ‘ ‘Fundación José María Mainetti para el progreso de la medicina s/ Incidente de Verificación Tardía - Sitio Web SCBA, Sumario B301059, CC0202 LP 99466 RSD-1-3-S4-3-2003, Juez Ferrer.

¹¹³ ‘ ‘Telearte S.A. Empresa de Radio y Televisión s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Verificación (AFIP-DGI)’, Expte. 53.925, Juzgado de 1º Instancia en lo Comercial Nº 16 Sec. Nº 32, Buenos Aires, año 2008.

¹¹⁴ ‘ ‘Ora S.A. s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Verificación Tardía (AFIP)’, LLBA 2006 (Febrero), 138 – Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Garantías en lo Penal de Necochea, año 2005 – La Ley Online.

3) Conclusión del Tópico:

Resulta evidente que la ratio legis de la norma, o voluntad del legislador, es la de, en primer lugar, mediante la delimitación temporal de los plazos para presentarse los acreedores a verificar sus créditos, proveer al proceso concursal de un medio para que, en plazos prudenciales (o sea, adecuados para ambas partes de la relación obligacional), se pueda generar un cuadro de situación que autorice a los participantes del litigio a comprender cuál es el estado del patrimonio del deudor, lo que ha de interesar a todos, llámese deudor (para saber cuánto debe y con qué cuenta para pagar), acreedores concurrentes (para saber cuán real es la posibilidad de alzarse con sus prestaciones debidas), e incluso para otros acreedores, (que considerando la realidad del concursado, deciden no embarcarse en el procedimiento, resignando sus acreencias a cambio de evitar alterar sus vidas con el ingreso a un juicio de años, que en apariencias no habrá de irrogarle los beneficios anhelados). Por cierto, también importa a terceros la constitución del pasivo concursal, puesto que ellos están legitimados, (en los casos que procede), para efectuar el salvataje del art. 48 LCQ.

Pero en segundo término, (en el tiempo, pero primero en importancia), lo que el legislador persigue con la norma, es que finalizado el proceso concursal, el deudor recupere la libertad obligacional que no llegó a procurarse por sus medios, y que consigue mediante la tramitación del proceso que ha sido concebido en el ordenamiento jurídico específicamente con esa misión.

Creo que el concurso preventivo, a diferencia de la quiebra, debe ser estudiado siempre como un mecanismo para liberación del deudor (empresa o persona de existencia visible), -y no tendiente en primer término a colaborar con el acreedor a que se haga de su cobro-, pues es el “acuerdo”

el mayor reflejo de la calidad favorecedora del obligado que todo el proceso reviste, y que lo distingue de la quiebra, donde no solo no existe acuerdo, sino que ella, en sí misma, es prevista por la ley, como una sanción que le resulta al deudor que no da al concurso que él mismo instó, el curso que el mismo mereció.

Por tanto, el art. 56 LCQ, debe ser interpretado siempre teniendo en caro la esencia del proceso concursal preventivo, que es que terminado el mismo, (y extinguida por prescripción la acción de verificación tardía, durante o posteriormente a él), el deudor ya nada adeude o deba a sus “ex acreedores” (de fecha anterior a la presentación).

CAPÍTULO VI

SITUACIÓN DEL ACREEDOR FRENTE AL CONCURSAMIENTO DE SU DEUDOR.

Las posibles circunstancias en las que se ha de hallar un acreedor desde la ley 26.086, son a mí entender muy fáciles de encuadrar legalmente, y por tanto, claras en su comprensión.

Así, el acreedor es tal desde el momento en que el vínculo jurídico que define la obligación tiene lugar. Pero puede que su crédito no sea exigible sino hasta un determinado momento (ej. por estar sujeto a plazo o condición). Considerando el caso de crédito exigible desde su origen (incondicional), o aquel que lo llega a ser por darse la condición u operarse el plazo que lo posterga en su exigibilidad, el acreedor se halla dotado de acción. Con ello, se pone de realce el carácter civil de la obligación en virtud de la cual él es sujeto activo, y tiene a su favor una prestación debida por el deudor. Hasta aquí pura teoría obligacional. Pero entremos en el marco concursal, donde esta breve reseña ha de operar plenos efectos.

- [Primero vamos al caso más lineal](#). El acreedor tiene acción, pero no la ha ejercitado, y su deudor se concursa. En ese supuesto, el primero ya no puede entablar su demanda (en la que ejercita la acción individual del derecho extraconcursal), salvo que sea un acreedor laboral. Ello es así por imperio del art. 21LCQ, el que determina que los juicios que quedan excluidos del fuero de atracción concursal, continúan ante el juez originario, o ante el que resulte competente si se trata de acciones laborales nuevas. O sea, aun presentado en concurso el deudor, el acreedor laboral cuya acción tenga causa en, o surja de título anterior a tal situación, puede accionar. Es el único caso. Los demás

acreedores, que siguiendo el ejemplo no tengan juicio en trámite, tienen abierta una sola vía que es la de la verificación (obviamente en el marco del concurso), en cualquiera de sus modalidades de acuerdo al tiempo en que se la formule. [Acoto que Truffat dice que ‘ ‘quien estuviera pronto a demandar a un sujeto (incluso habiendo iniciado el trámite de mediación...) y se encontrara con la presentación en concurso o quiebra de aquel, ya no podrá accionar a su respecto. Solo le restará la vía verificatoria. Y poco importará que la complejidad del asunto, la dependencia respecto de pruebas de ardua obtención, etc., conspiren contra toda posibilidad de ser verificado en la etapa tempestiva. Deberá transitar tal camino para luego, en un incidente de revisión que no deja de ser pese a su trámite abreviado un juicio de conocimiento pleno, hacer valer los eventuales derechos que le cupieran. También podrá demorar su reclamo – mientras no se exceda de dos años desde la presentación en concurso-, y promover un incidente de verificación tardía (que también es un juicio de conocimiento pleno y trámite rápido, simplificado o abreviado). Solo que en esta ocasión, y por la elección del camino, quedará casi ineludiblemente sujeto a la imposición de costas ‘ ‘¹¹⁵]. Veo en este fragmento una tremenda claridad respecto de un punto muy saliente, cual es en qué marco el acreedor despliega la defensa propia de su derecho, si la ley le impide recurrir al juez natural. La respuesta es en el incidente de revisión [¹¹⁶] (de resultar necesario), o en el incidente de verificación tardía.

- [El segundo caso](#), está íntimamente relacionado: es el del acreedor laboral, que ante el concurso de su deudor, se presenta a formular

¹¹⁵ **TRUFFAT**, EDGARDO DANIEL, - “FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS”, ASTREA, BUENOS AIRES, 2007, pág. 159.

¹¹⁶ Ver **TRUFFAT**, EDGARDO DANIEL, - “FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS”, ASTREA, BUENOS AIRES, 2007, página 202.

pedido de pronto pago, y le es denegado. En ese caso, ya nada tiene que hacer en el concurso (por ahora), y su única vía abierta es la de recurrir al juez natural (laboral). Como se ve, también es un caso de excepción, pues no opera respecto de él la cosa juzgada, que habría de imposibilitarle la promoción de un juicio posterior, con fundamento en que ha recaído pronunciamiento definitivo firme en su contra en proceso en el que se ventiló idéntica acción (igual objeto, sujetos y causa fuente), pues ello habilitaría, como es lógico, la oposición de una muy destructiva excepción de cosa juzgada. Para llegar a esta conclusión, basta leer el art. 16 párrafo 7º.

- Otros casos son los [acreedores del art. 21 incs. 1 y 3 LCQ](#), o sea, los que teniendo un proceso contra el deudor, en trámite ante juez natural, y siendo de ciertas naturalezas (ej. expropiación, entre otros), no cuentan con ninguna opción frente al concursamiento del deudor, más que continuar en tal sede la *litis*, hasta obtener sentencia firme favorable, que le habilite la acción verifcatoria correspondiente con base en tal pronunciamiento. (Obviamente de no hacerse lugar a la acción allí planteada, ya nada quedará de la obligación en tanto civil, por la cosa juzgada operada).
- Entonces, descriptos estos supuestos, nos iremos a dedicar de lleno a los [acreedores del art. 21 inc. 2 LCQ](#). Ellos son los que, ante el concursamiento de sus deudor, y teniendo contra él proceso en trámite, (claro está, ante el juez natural), cuentan con la opción entre suspender sus procesos y concurrir al concurso en miras de verificar sus acreencias por la vía que corresponda, o continuar los primeros hasta lograr sentencia firme favorable, para ahí sí, verificarla directamente.

Estos acreedores son de dos tipos: - los que llevan adelante un proceso de conocimiento (el que está definido por este tipo de acción – entre los tres posibles: de conocimiento, ejecutiva, cautelar --, no por la materia a la que tal acción sea relativa).

- los acreedores laborales (que se definen sí por la materia sobre la que versa su acción, y en su consecuencia el proceso que tiene lugar tras su ejercicio).

Entonces: estos dos tipos de acreedores, han de optar necesariamente, (incluso por omisión, dando lugar a que su proceso en trámite siga el curso que le es natural). Quiero decir: el acreedor siempre queda dentro de una de las dos posibilidades. Si decide continuar con el proceso ante el juez natural (el denominado por Truffat “juicio continuado”), ello no requiere mayores explicaciones, más que comentar que cuando tenga su sentencia favorable firme, tendrá un plazo de seis meses para hacerla valer en el marco del concurso, aun cuando el mismo haya concluido, por medio de la **acción individual** (de verificación), que regula el mismísimo art. 56 LCQ. Es sustancial decir que tal acción, ha de promoverse ante el juez concursal, (pues en definitiva es casi la misma verificación tardía, pero tras el concurso, y por tanto es una acción de naturaleza netamente concursal). Sobre la misma, destaco que como aclara Truffat [¹¹⁷], lo más probable es que ella se incidentalice por decisión del juez. El autor, también dice al respecto: “El sedicente *accipiens* tendrá cuidado (pues su pedido es en verdad una demanda) en determinar adecuadamente el objeto – no basta una remisión a la sentencia originaria-, pero no debe ingresar en todo aquello que ya quedó probado y que fue sentenciado.

¹¹⁷ TRUFFAT, EDGARDO DANIEL, - “FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS”, ASTREA, BUENOS AIRES, 2007, pág. 162.

También deberá ajustar su *petitium* a la particularidad del subingreso concursal (ej. indicando si le corresponde algún privilegio y por qué). Es difícil determinar si tal incidente es, en verdad, un incidente tardío... entendemos que no... Lo cierto es que, en principio, no dará lugar a la imposición de costas. ' '[¹¹⁸] También comenta que ni el síndico ni el fallido podrán venir contra el reconocimiento de la sentencia recaída en el juzgado originario. Ello es así toda vez que ambos han tomado parte en tales procesos, cada uno desde su posición. No les fue indiferente la tramitación de los mismos. Podrán si:

A. Oponer la prescripción (no el síndico en el concurso preventivo, dice Truffat).

B. Peticionar la adecuación de la sentencia a parámetros concursales desatendidos por el juzgador original.

C. Objetar la personería o la legitimación del presentante.

D. Denunciar que se está frente a sentencia írrita (por grosero error jurídico, por violación de normas de orden público concursal, por violación del derecho de defensa en el juicio continuado).

E. El síndico, podrá denunciar que la sentencia se obtuvo con connivencia entre acreedor y deudor (porque este último se defendió con torpeza inexplicable, porque dejó caducar pruebas indispensables, etc.).

¹¹⁸ **TRUFFAT**, EDGARDO DANIEL, - “FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS”, ASTREA, BUENOS AIRES, 2007 pág. 162/163.

Todas estas posibilidades nos las explica Truffat¹¹⁹, quien concluye el tema, diciendo que si un acreedor quisiera impugnar-observar el pedido, debería hacerlo por la vía de las “simples manifestaciones”, que el juez meritara.

Sepamos que la legitimación de los creadores, se da porque: ‘ ‘La sentencia, en tanto sentencia, no afecta a los demás acreedores. Un contrato a verificar, en tanto contrato, tampoco los afecta. Pero tanto la sentencia como el contrato, (en tanto ‘causa’ del crédito, o si se prefiere, en tanto ‘titulo verificador’) sí afectan... a los demás acreedores y su derecho de control correspondiente resta intacto en sus manos.¹²⁰ ‘ ‘

Pero todo ello vale como lo manifesté ut supra, para el caso en que el acreedor decida continuar el juicio.

Ahora: ¿Qué ocurre si opta por suspenderlo y presentar su pedido de verificación? A ello apunto.

La decisión de optar por una u otra posibilidad, plantea en el acreedor un verdadero momento de consideración de su situación particular. No existe una opción más beneficiosa o conveniente que la otra, a priori.

Como muy claramente lo comenta Truffat, es casi el actuar propio de todo abogado prudente, el asesorar a su cliente (acreedor), que informe sobre su opción al juez del concurso (de manera de hacer indisputable su habilitación para hacer valer el control concurrente sobre los pedidos verificatorios de los otros, y para controlar el curso del expediente). ‘ ‘Si su reclamo demanda un sinnúmero de probanzas... es obvio que hará bien en quedarse en sede originaria... Seguramente tampoco optará por concurrir a sede concursal si el demandado no contestó en su hora la demanda, o si produjo un responde de

¹¹⁹ **TRUFFAT**, EDGARDO DANIEL, - “FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS”, ASTREA, BUENOS AIRES, 2007, pág. 163.

¹²⁰ **TRUFFAT**, EDGARDO DANIEL, - “FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS”, ASTREA, BUENOS AIRES, 2007, pág. 209/210.

pésimo nivel, o si perdió un número significativo de pruebas, o si la mayoría de las probanzas rendidas, en especial las periciales, le son ostensiblemente favorables.’’^[121] Veo en este pasaje, una estupenda explicación del autor, que nos permite dar luz al caso en cuestión, permitiéndonos imaginar situaciones concretas en la cuales el buen criterio, la medida, y sobre todo, el conocimiento jurídico técnico, nos indicarán continuar el juicio. ‘‘Optar por ello’’, si se lo quiere plantear en los términos de la ley.

Por el otro lado, el autor nos dice: ‘‘Ahora bien, si el juicio estuviera apenas promovido, si las probanzas fueran tan sencillas que se agotaran... en lo documental, si el intercambio epistolar previo a la demanda contuviera prácticamente el reconocimiento de deuda por el demandado, si en el listado de acreedores del juicio concursal estuviera expresamente denunciado el crédito resistido en sede originaria, el autor deberá autointerrogarse sobre la chance a perder –en el sentido de no formar base de cómputo-.’’^[122] Así, con esa pureza conceptual, el autor nos grafica ahora la contrapartida, y dentro de las eventualidades que habrían de persuadir al acreedor acerca de la conveniencia de suspender el juicio y verificar, la de hacerlo por contar con correspondencia epistolar que implique ‘‘prácticamente’’ un reconocimiento de deuda por parte del deudor, me parece brillante desde la cintura del abogado audaz, que potencia la virtualidad benéfica de todos los recursos que tiene a su alcance. Aquí, (y me permito hacer este comentario porque de modo indirecto se relaciona con nuestro estudio), tal como me lo ha enseñado mi admirado tío, Guillermo Dupleix, es el derecho procesal – el de forma-, el que en su uso inteligente, puede significar una inconmensurable ventaja ante los tribunales, cuando se lo conoce de modo puro y extenso.

¹²¹ **TRUFFAT**, EDGARDO DANIEL, - ‘‘FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS’’, ASTREA, BUENOS AIRES, 2007, pág. 160.

¹²² **TRUFFAT**, EDGARDO DANIEL, - ‘‘FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS’’, ASTREA, BUENOS AIRES, 2007, pág. 160/161.

Muchas veces los juicios se ganan o se pierden por cuestiones de forma. Está en el buen abogado, el talentoso, el saber posicionarse del lado aventajado.

- Acreedor que se presenta a verificar, y su crédito es declarado “inadmisible” o “no verificado”: en ambos casos, el juez desestima el pedido del acreedor. En el primero **con** observaciones por parte del deudor, acreedores o síndico; en el segundo, **sin** ellas. Su situación es clarísima. Quedando firme la sentencia que lo desestima, (habiendo o no incidente de revisión), ya nada resta de su crédito, en tanto faz activa de la obligación civil. Su única acción ha sido ejercitada, pero no logró ser acogida por el juez. Por tanto no puede volver a intentarla, ni en sede concursal, ni en extraconcursal; ni durante, ni terminado el concurso. Ni siquiera aunque se llegue a quiebra indirecta. La obligación devino natural.

Ahora sí, luego de haber abordado plenamente el tema de las diferentes situaciones que puede afrontar el acreedor, entramos al análisis de las fuentes que tratan el tópico que atiende el presente capítulo.

Un dato que resulta esencial para abrirlo, nos los da Llambías al decir: “El plazo genérico de prescripción de cualquier derecho creditorio que no tuviese otro lapso establecido, es ahora de diez años sin distinción entre presentes o ausentes (nuevo art. 4023 C.C.)” [¹²³], en referencia al texto de la norma citada desde la reforma al C.C. por ley 17.711 de 1968. Me interesa que el lector tenga en cuenta ese pasaje para ilustrar ese tipo de acreedor en concreto.

¹²³ LLAMBIAS, JORGE JOAQUIN - “TRATADO DE DERECHO CIVIL, PARTE GENERAL, TOMO II”, EDITORIAL PERROT, BA, 1997, pág. 597.

El tema me resulta saliente, pues tanto durante la tramitación del concurso (que puede concluir exitosamente o no), como luego de él, la figura del acreedor es la que verdaderamente me interesa estudiar en el presente trabajo. Así tenemos:

1) Doctrina:

- Es fundamental a mi entender, para considerar el tópico actual, en especial atención a la hipótesis que nos atiende, lo que dice Truffat en referencia a la opción de verificar en sede concursal (para aquellos que en virtud de la naturaleza de sus juicios en trámite, tienen opción por imperio del art. 21 LCQ). El destacado autor dice: ‘ ‘Un dato relevante, y que a veces se pierde al enfatizarse la posibilidad de que ciertos procesos antaño suspendidos y atraídos (juicios de conocimiento en trámite incluidos los laborales), puedan continuar ante el juez extraconcursal, es que la mentada continuación, depende de la voluntad del pretense *creditor*, pero que este se encuentra plenamente habilitado por el texto legal expreso para ‘optar’ por la vía verifcatoria. Hemos señalado que en nuestra opinión: A) no se opta por continuar el juicio en sede originaria, sino que la opción es de sometimiento al régimen verifcatorio (lo que libera de formalidades a la decisión de continuar), aunque haría bien cualquier acreedor prudente en anoticiarlo de todos modos en el concurso - (el subrayado es mío) - si quisiera ejercer control correspondiente. B) que la opción no remite ineludiblemente al caso de verificación tempestiva, dado que cualquier acreedor podría hacerlo también respecto de la verificación tardía’ ’. [124] En la nota al pie de página, el mismo autor señala que concuerda con los Prono, en la necesidad de manifestar en el concurso qué se habrá de hacer, aunque los citados juristas no lo colocan en el terreno de la prudencia,

¹²⁴ **TRUFFAT**, EDGARDO DANIEL, - ‘ ‘FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS’ ’, ASTREA, BUENOS AIRES, 2007, página 135.

sino que lo colocan en el rango de deber (por aplicación del art. 919 C.C.). Finalmente el autor admite la posibilidad de una “opción parcial”, (en tanto haya acumulación de pretensiones y ellas sean distinguibles), aunque afirma que la tendencia en el consejo de un abogado, ha de ser la de no explorar terrenos discutibles.

Aprendemos mediante Truffat, que al proceso que continua ante juez natural se lo denomina “Juicio Continuado”.

- “Un análisis exegético de la norma en cuestión, podría dar lugar a alguna confusión, si la prescripción de dos años se aplica solo a los casos de acciones individuales intentadas luego de concluido el concurso (art. 59), o también comprende los supuestos de insinuación tardía “mientras tramite el concurso”. Si bien la redacción no ha sido feliz, el alcance que corresponde atribuir surge de los propios fundamentos expuestos por los redactores del anteproyecto de ley, y en ese sentido cabe interpretar que el plazo de prescripción involucra ambos supuestos”.^[125] Encuentro en esta pasaje un dato significativo, no solo desde el fondo de lo que comenta el autor (por ello su inclusión en este acápite), sino además en el hecho de ver que la doctrina tilda de poco feliz a la redacción del artículo, lo que se conjuga en mucho con los planteamientos que originan el presente trabajo.
- Di Tullio, en alusión al caso Robles, dice: “De ahí que superado dicho término, el crédito no presentado a verificación –sobre el que no se promovió la correspondiente acción judicial –, se considera prescripto, quedando solo subsistente como una obligación natural, conforme a los principios generales de la legislación civil. **Dicha norma crea un nuevo supuesto de extinción de las obligaciones por prescripción, consistente en la no verificación de créditos en un concurso**

¹²⁵ DI TULLIO, JOSE ANTONIO - “TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS”, LEXIS NEXIS, 2006, páginas 126 y 127.

preventivo dentro del plazo descripto´´.[¹²⁶] He aquí el kit de nuestra obra. Por ahora me interesa aclarar, que el art. 724 C.C., es clarísimo en su redacción, y entre las causales de extinción de obligaciones no incluye a la prescripción. Sin perjuicio de ello, y sin desconocer el carácter enumerativo (no taxativo) de la norma, comprendo que así lo presenta el legislador en la propia definición de prescripción del art. 3947. Retomaremos indefectiblemente el tema en la conclusión final.

- ´´la verificación de créditos... en el proceso de quiebra, es una carga procesal para el acreedor, que debe cumplir para participar del activo falencial. No se trata de un supuesto de caducidad de su derecho, pues la ley no lo establece, y concluida la quiebra, ningún efecto se produce respecto del acreedor no concurrente que puede iniciar o proseguir su acción individual contra el deudor en defensa de su crédito. La conclusión de la quiebra, no produce per se la extinción de los créditos anteriores a la falencia, cuya verificación fue omitida en el pasivo concursal, ni tampoco la liberación del deudor ex fallido por las obligaciones de ese carácter que hubiese contraído... De tal surte, ni la finalización de la quiebra, ni el incumplimiento de la obligación de verificar significan extinción del crédito, sino eventualmente una mera suspensión de la posibilidad de su satisfacción, mientras dure el estado concursal liquidativo.´´[¹²⁷]

Entiendo de significancia la presente explicación, por permitirme ver qué rol juega la verificación en la quiebra -en relación al acreedor no concurrente-, y esencialmente, cuan distinta es la situación respecto del concurso preventivo, en virtud de la distinta finalidad y naturaleza de ambos procesos.

¹²⁶ **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - ´´TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS´´, LEXIS NEXIS, 2006, página 137, 138.

¹²⁷ **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - ´´TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS´´, LEXIS NEXIS, 2006, página 4.

- Algo muy interesante que dice Truffat respecto de la expresión “contenido patrimonial” (en referencia al art. 21 LCQ, que señala que los juicios que revistan tal calidad quedan exceptuados de la regla de la atracción), es: ‘ ‘Heredia señalaba: ‘la radicación establecida por el art. 21, LCQ, alcanza a todas aquellas acciones que impliquen un desequilibrio con los acreedores comunes frente a la masa de bienes del concurso... como señala Quintana Ferreyra, esa expresión se refiere, precisamente a aquellos juicios cuyo objetivo es la obtención de algún beneficio patrimonial a favor del actor, en desmedro de la igualdad en el tratamiento de los acreedores, importando un desequilibrio que atenta contra la integridad del patrimonio’ ’. [128]
- Alegría dice: ‘ ‘... tal como lo afirma la doctrina general por interpretación del Código Civil, se admitió que en un supuesto de acuerdo preventivo, el deudor pudiera reclamar por vía de acción ante el juez del concurso la declaración de la prescripción, casualmente para establecer con firmeza el pasivo y los acreedores con derecho a soluciones concursales (caso ‘Noblex Argentina S.A.’). Aun reconociendo la posibilidad de aplicación del instituto, y consecuentemente del rechazo de la pretensión por prescripción, la jurisprudencia ha entendido, por lo dispuesto en el art. 3964 del Código Civil, que el juez no puede aplicar de oficio el plazo de prescripción, y que debe darse trámite al incidente de verificación tardía, sin perjuicio de que si es opuesta la defensa, esta se declare por instancia del interesado.[129]’ ’
- Di Tullio cita a Rivera quien dice: ‘ ‘Si es una quiebra indirecta, las acciones prescriptas por aplicación del art. 56 LCQ, en el concurso preventivo precedente **no** renacen por el hecho de la quiebra posterior.[130]’ ’ (El resaltado es mío).

¹²⁸ **TRUFFAT**, EDGARDO DANIEL, - “FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS”, ASTREA, BUENOS AIRES, 2007, pág. 79.

¹²⁹ **ALEGRIA**, HECTOR - “LA LLAMADA “PRESCRIPCION CONCURSAL” (ART. 56, 6º PARRAFO, LEY 24.522)”, ESPECIAL PARA LA LEY, LA LEY 2003-B,661, LA LEY ONLINE, 2003, pág. 3.

¹³⁰ **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - “TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS”, LEXIS NEXIS, Gerli, BA, Argentina, 2006, nota 72 de pág. 145.

- Galíndez: ‘ ‘... enfatizamos que carece de apoyo legal la afirmación de que la conclusión del concurso produce la extinción de los créditos que no se insinuaron en aquel procedimiento, pues no existe norma expresa que disponga ese efecto... La pretensión de hacer valer un crédito quirografario no verificado, luego de cumplido el acuerdo homologado, no puede sustraerse de los términos del acuerdo... El acreedor omiso puede ejercer su derecho contra el ex concursado, pero deben respetar la *pars condicio creditorum* plasmada en los términos del acuerdo, y con los efectos novatorios contemplados en el art. 55 de la LCQ.[¹³¹] ‘ ‘
- Martorell, cita a Llambías, quien en referencia a la ley 19.551 nos comenta lo siguiente: ‘ ‘El procedimiento del concurso y la consiguiente caducidad de los poderes de ejecución de los bienes del concursado adquiridos después de la rehabilitación del deudor afecta a todos los acreedores cuyo título sea anterior a la apertura del concurso, con independencia de que se hayan presentado o no a verificar créditos. Tanto a los verificados en el juicio como a los que por cualquier circunstancia hubieren permanecido al margen de estas acotaciones, alcanza el efecto de esa especial carta de pago a que ya se refería la ley 11.077, y que ha reiterado la ley 19.551. [¹³²] ‘ ‘ Si bien referente al régimen anterior, creo que es importante la idea que da Llambías, la que según la normativa de hoy, sigue siendo actual.
- Martorell, en referencia a la opinión de Roberto García Martínez, dice lo que transcribo a continuación, e invito al lector a prestar suma atención: ‘ ‘Para él resulta reprochable lo siguiente:

-con argumentos que califica de simples- léase: la alegación de que ‘el mantenimiento de la empresa en marcha y la reducción de las contingencias o los riesgos futuros’ justifica lo actuado-, se ponga ‘patas arriba todo el

¹³¹ **GALINDEZ**, OSCAR A. - ‘ ‘VERIFICACION DE CREDITOS, 3º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA’, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA S.R.L., BS. AS., 2001, pág. 270.

¹³² **MARTORELL**, ERNESTO EDUARDO, ‘ ‘TRATADO DE CONCURSOS Y QUIEBRAS, TOMO II B’, DEPALMA, B.A., 2001, pág. 690.

sistema de prescripciones del Código Civil, del Código de Comercio y de todas las leyes especiales.´

- de ahí en más habrá prescripciones de solventes y prescripciones de insolventes, ´por lo que habrá que analizar´ si no se viola el principio de igualdad ante la ley, o el principio de no discriminación, y con ello la Constitución Nacional´.

- el eventual reclamo que podría deducir en lo futuro un acreedor por una deuda exigible que entra dentro de la norma general del art. 4023 del Código Civil (prescripción decenal) no resulta argumento suficiente para resquebrajar todo un sistema jurídico que tiene más de cien años, y que se ha mantenido inconvencible durante todo ese tiempo.

- no se puede privilegiar el salvataje a un punto tal de colocarlo por encima de cualquier otro derecho, y de sacrificar a los acreedores. [¹³³]´´ Si bien García Martínez no se refirió a la ´´teoría de la dualidad´´ (sobre la que me expido en la etapa conclusiva de esta obra), sus críticas al régimen de la ley 24.522 en lo referente a la prescripción del art. 56, son exactas con la idea que la misma propugna. Fíjese el lector, que él jamás se expide en relación al modo de aplicar la ley vigente. Sobre ello no plantea objeción. Lo mismo denota el exacto entendimiento del tema.

Pero sentado el modo de aplicarse, entra en una cuestión más profunda (aunque no necesariamente más trascendente), cual es la conveniencia o no de la reforma. Y lo pone en los términos más serios que se puede plantear el tema: no solo un tremendo detrimento al derecho del acreedor, sino la posibilidad de una clara violación a derechos de raigambre constitucional (de la talla del derecho a la igualdad y a la no discriminación). Yo comparto plenamente esa idea. Y mi fundamento es el siguiente: la relación obligacional, puede tener

¹³³ **MARTORELL**, ERNESTO EDUARDO, ´´TRATADO DE CONCURSOS Y QUIEBRAS, TOMO II B´´, DEPALMA, B.A., 2001, pág. 693, en referencia a García Martínez, ´´Derecho Concursal´´, pág. 227.

diferentes orígenes (fuentes de las obligaciones), entre las cuales las dos que más nos interesan son los delitos y los contratos. Para los créditos derivados de la comisión de un delito (Ej. daños por homicidio), el acreedor ya entra en el vínculo que es la obligación, de modo involuntario, e indeseado. Correlativamente, si hay obligación sobre el deudor, (por eso es tal), será porque el hecho ilícito le es atribuible, y reprochado. Ello demuestra la disparidad de situación, desde el origen, entre ambos sujetos.

Pero en el caso de la relación contractual, también se da lo mismo. Así, sabemos que el principio de buena fe es rector en materia de contratos (art. 1198 C.C.), y que los contratos están hechos para cumplirse. Sentado ello, resta aclarar que el incumplir, no es un “derecho” del deudor. El incumplimiento es en mi parecer, desde el esquema que clasifica al “Hecho Jurídico”, un acto jurídico (art. 944 C.C.), porque siendo lícito (no es ni delito ni cuasidelito), genera efectos jurídicos, y por ello no es un mero acto lícito. Pero no una facultad del deudor, en tanto el mismo, genera acción en el acreedor para exigir ese cumplimiento (art. 505 CC). Ello implica que la ley tiende a proteger a la parte que queda en la situación más desfavorable, que es el acreedor.

Aquí no nos interesan puntualmente los motivos de fondo del incumplimiento, y mucho menos los subjetivos (como la voluntad de cumplir). Interesa el hecho incontrovertible, que es que la prestación debida, se halla insatisfecha. Entonces, vemos que el acreedor es la parte menos favorecida de la relación obligacional, pues espera el cumplimiento del deudor, y en esa inteligencia contrata. No opta durante la vida del contrato, sino antes de perfeccionarlo, cuando “evalúa” a su cocontratante, y decide contratar. Para ello, por ejemplo, muy especialmente en el caso de empresas, se tendrá en cuenta la solvencia

del obligado. Desde allí solo le resta esperar el cumplimiento de su deudor (ej. lineal: dar la cosa, pagar el precio.)

Pero la realidad del obligado es distinta, porque una vez perfecto el contrato y así viva la relación obligacional, él, además de haber “evaluado” a su cocontratante, lo que es propio de contratos bilaterales, tiene una “opción” de hecho que es la de cumplir o incumplir. Esa “opción”, como lo dije anteriormente, no debe interpretarse como inclusiva de la voluntad. Pero de hecho se ejerce. Entonces, una vez “elegida” o “tomada” la vía del incumplimiento, es el acreedor quien queda en situación desfavorable, y la ley viene a su auxilio, otorgándole acción para demandar ese cumplimiento, como corresponda. Pero el tema no termina allí. Existen innumerables elementos a considerar en lo futuro, para poder llegar al momento en que la prestación sea efectivamente cumplida (todo ello sin perjuicio de que se lo logre a plazo, e inclusive en especie distinta a la pactada). Entonces: planteado este cuadro, vemos que por la naturaleza de la relación obligacional, que involucra siempre y necesariamente a dos o más personas, ha de implicar que el éxito de la contratación, (en el ejemplo), se deba a la concurrencia de acciones de TODAS las partes tendientes a ese fin. Quiero decir: que uno cumpla, y desee el cumplimiento del otro, no basta para que ello ocurra. Es allí cuando la ley debe amparar, aunque supletoriamente, el derecho vulnerado, el del acreedor.

Por tales motivos, concluyo que la línea que la ley (en sentido material), debe conservar, es la de la protección del derecho del acreedor. No la inversa. Ello sin resultar óbice alguno a que se estipulen plazos de prescripción y de caducidad, que por su naturaleza tienden a conservar las relaciones sociales. Pero una vez planteados los límites dentro de los cuales el acreedor se ha de poder mover, y con las incómodas y desafortunadas consecuencias que el incumplimiento de su deudor le ha de ocasionar, es absurdo que la ley concursal, privilegie al deudor, en tremendo detrimento de

los derechos de acreedores, que ven la prescripción de sus acciones que ya tenían que soportar, recortadas a una medida, que en los casos de prescripción decenal, (por ejemplo), es extralimitada, y puede producir la muerte de su crédito de modo impensado.

Comprendo que la ratio legis del art. 56 LCQ, es coherente con la naturaleza concursal. Pero me parece que el legislador se excedió, no, poniendo plazos breves para accionar dentro del concurso (lo cual creo acertado, conveniente, y necesario), sino, por establecer que transcurridos ellos, el acreedor pierde sus acciones. Allí radica el exceso, que García Martínez advierte, y en este trabajo se pone de manifiesto.

- Es Alegría, refiriendo como Di Tullio [¹³⁴] a la doctrina de la Suprema Corte Mendocina en el fallo “Cristalerías de Cuyo S.A.”, dice: “¿Se aplica la prescripción concursal... respecto de un crédito respecto de un crédito de causa o título anterior a la presentación de un concurso preventivo si:
 - Se ha homologado el acuerdo y
 - Posteriormente se decreta la quiebra, una vez pasado el plazo de dos años desde la presentación del concurso y
 - El acreedor no ha requerido verificación dentro del mismo plazo (dos años desde la presentación concursal) y
 - La prescripción (‘concursal’) no ha sido declarada por sentencia firme antes de la declaración de la quiebra?...

Básicamente, la Corte mendocina, con ponencia de la destacada jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, daba prioridad interpretativa a la ‘ratio legis’ que se centra, según ese fallo, en ‘la finalidad loable de no prolongar por largos periodos la aparición de acreedores que reclamen sus créditos contra el concursado’... Además, se afirmó allí, si la prescripción no ha sido efectivamente declarada por sentencia firme antes de la quiebra (aun cuando haya sido invocada), la falencia

¹³⁴ **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - “TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS”, LEXIS NEXIS, Gerli, BA, Argentina, 2006, pág. 146.

constituye un hecho sobreviniente que impide declararla. ^[135] Así, la distinguida Jueza, hace aplicación de la que denomina Tesis Intermedia, y que se presenta como la más ecuánime y ajustada a derecho.

- García: ‘ ‘Según lo prescribe el art. 3187 del C.C. ‘la hipoteca se acaba por la extinción total de la obligación principal sucedida por alguno de los modos designados para la extinción de las obligaciones. ‘ **Dentro de esos modos de extinción de las obligaciones se halla la ‘prescripción abreviada concursal’**, que lógicamente no aparece regulada en el Código Civil, pero que constituye sin duda un modo extintivo de derechos creditorio, una especie particular de prescripción liberatoria. Como bien se explica, proliferan en los distintos ordenamientos numerosos medios extintivos y vano sería el intento de condensarlos en una fórmula omnicomprendiva, pues se trata de una **categoría abierta**, a la par que se señala el carácter meramente enunciativo del art. 724 del C.C. En ese orden de ideas, se explica que **la norma del art. 56 LCQ crea un nuevo supuesto de extinción de las obligaciones por prescripción, consistente en la no verificación de créditos en un concurso preventivo dentro del plazo descripto, acarreando la inactividad la consecuente extinción de la obligación** ‘ ‘ ^[136]. (el resaltado es mío).

La autora claramente corrobora la hipótesis de esta obra, pues al par de abordar el caso de una hipoteca, la forma en que presenta la naturaleza extintiva, es extensiva a los demás derechos.

- D’Alessio: ‘ ‘Consecuentemente, en nuestra opinión, a través del proceso de verificación de créditos el Juez del concurso resolverá quiénes serán considerados acreedores del insolvente. Ya no nos importa la distinción entre pretense o verificado, sino que, a la luz de la resolución prevista por

¹³⁵ ALEGRIA, HECTOR - ‘ ‘DOS NUEVAS REFLEXIONES SOBRE LA LLAMADA ‘‘PRESCRIPCION CONCURSAL ‘‘ (ART. 56, 6º PARRAFO, LEY 24.522)’’, ESPECIAL PARA LA LEY, LA LEY 2003-C,715, LA LEY ONLINE, 2003, pág.1.

¹³⁶ GARCIA, SILVANA - ‘ ‘DOS CUESTIONES SOBRE PRESCRIPCION ABREVIADA CONCURSAL (ART. 56 LCQ)’’, PUB. LLL EDITORIAL 2009 (JUNIO), 505, LA LEY ONLINE, pág. 1.

el art. 36 LCQ, en principio sabremos quién es acreedor del respectivo concurso. **Quien no figure, ya ninguna trascendencia revestirá y de ninguna forma podrá seguir llamándose acreedor.** Así, si el Juez decidiera no verificar su crédito, entonces no sólo el insinuante no será acreedor del concursado sino que **el crédito insinuado en sí perderá toda existencia**, en el caso de que la hubiera tenido. Si el juez así lo dice, no hay acreedor entonces no hay crédito; no existe el acreedor, no existe el crédito. **Tal es la idea de los procesos concursales: hacer un corte histórico en la vida de una persona** (tanto física como jurídica, comerciante o no) **de modo de detener y purgar una situación determinada de insolvencia generalizada.** Hay un antes y un después de un concurso (aunque el después, en casos de quiebra, sea el fin), y por una cuestión, como ya dijimos, de seguridad jurídica y seguridad, además, en las transacciones, **no deben quedar "fantasmas" del pasado luego del concurso.** El crédito rechazado no existe^[137] ' '. La tenacidad con que el autor se explaya sobre el tópico, hace que la idea tome plena firmeza. No cabe dudas que tales conclusiones, han de partir (en el iter mental) de la voluntad del legislador, en suma con la naturaleza del proceso concursal, que las alienta a ser tales.

2) Jurisprudencia:

- ' 'La ley protege los derechos, pero no ampara la negligencia, el abandono y el desinterés del particular que no los ejerce. En el caso de concurso preventivo, ello se ve reflejado en la situación de los acreedores que con indiferencia se han mantenido ajenos al trámite concursal, sea porque no verificaron sus acreencias en forma tempestiva (art. 32) o bien porque no se insinuaron por la vía tardía en la oportunidad prevista por la

¹³⁷ **D'ALESSIO, IGNACIO** - ' 'EL CASO 'VALLE DE LAS LEÑAS S.A.'. INCONSISTENCIAS EN EL DERECHO CONCURSAL TRIBUTARIO' ', LA LEY 2006-A, 592, LA LEY ONLINE, pág. 2

ley. El plazo acotado de prescripción pone fin a esa situación desigual, vedando la posibilidad a los acreedores inactivos de insinuar sus créditos en forma ilimitada en el tiempo (Roitman H. "Prescripción en la ley de concursos", Revista de Derecho Privado y comunitario, nº 22, p. 191 y siguientes, especialmente p. 194). Asimismo cabe añadir que si bien los acreedores no verficantes puedan ejercer las acciones provenientes de sus créditos mediante ejecuciones individuales, aplicándose las condiciones pactadas en el acuerdo preventivo oportunamente homologado, ello es así en tanto la acción no se encuentra prescripta. Es decir, **el derecho de los acreedores no concurrentes no puede ser ilimitado en el tiempo**, dado que el hecho de permitir indefinidamente la ejecución individual una vez concluido el concurso coloca a los acreedores verficantes en una **situación desigual** en relación a aquéllos que adoptaron la actitud contraria, violando así la "*par conditio creditorum*" que debe presidir el procedimiento concursal. De ahí que superado dicho término, **el crédito no presentado a verificar** -o sobre el que no se promovió la correspondiente acción judicial- **se considera prescripto**, quedando sólo subsistente como una obligación natural, conforme a los principios generales de la legislación civil (esta Sala, causa 95.150, reg. sent. 208/02). Dicha norma crea un **nuevo supuesto de extinción de las obligaciones por prescripción**, consistente en la no verificación de créditos en un concurso preventivo dentro del plazo descripto supra (art. 56 ley 24.522. [¹³⁸]´´ La transcripta es la idea que me interesa poner de manifiesto. Su repetición a lo largo de los precedentes consultados, la hace sólida.

- ´´ Durante la vigencia de la ley 19.551, el acreedor negligente conservaba la posibilidad de presentarse a verificar o reclamar judicialmente su crédito sin otro límite que la conclusión del concurso preventivo -es decir cuando el acuerdo homologado se cumple- o el transcurso de los plazos fijados por las reglas del Código Civil y legislación

¹³⁸ ´´Mazzini, Marcelo Omar s/ Incidente de Verificación de Crédito´´ Expte. 106.200 – Excma. Cámara Segunda de Apelaciones, La Plata – Sitio Web SCBA nº 0201106200.

especial complementaria en materia de prescripción, generalmente extensos. Esta situación traía aparejada gran incertidumbre. Se discutió en la doctrina si el acuerdo homologado le era oponible a dicho acreedor. Ahora el propio art. 56 de la ley 24.522 ha eliminado la controversia al disponer que los efectos del acuerdo homologado se aplican sin distinción a los concurrentes y a quienes no se presentaron al proceso. La reforma, al introducir la prescripción abreviada, replantea el principio de concurrencia, **generando una consecuencia más gravosa para los acreedores que decidieron mantenerse alejados del concurso por más de dos años contados desde la presentación.** Ahora, dicha inactividad acarrea directamente **la sanción de prescripción abreviada y la consecuente extinción de la obligación crediticia**, sin perjuicio de lo previsto por el art. 515 inc. 2º del Código Civil. [¹³⁹]’ ’ (Resaltados míos). Tal pasaje complementa la idea anterior, siendo plenamente consecuente con ella.

- Truffat nos da un fragmento de autos “Camisur S.A. s/ concurso preventivo s/ Queja”, que tramitara por ante la Cámara Nacional de Comercio, Sala D, con sentencia definitiva del 27/9/06, en el que se dijo: ’ ’ En consecuencia, el acreedor que hubiere formulado el ejercicio de la opción dentro del plazo establecido: art. 14, inc. 3, está en condiciones de ejercer el control que permite el art. 34 de la LCQ, ya que cabe entender que se ha insinuado oportunamente, en forma tempestiva, no tardía ’ ’ [¹⁴⁰]. Me parece fundamental que ello quede aclarado como regla jurisprudencial.
- Rivera, Roitman, Vítolo: ’ ’ El plazo de prescripción de dos años que tienen los acreedores para deducir el pedido de verificación tardía previsto en el art. 56 de la ley 24.522 tiene efecto inmediato y debe aplicarse a los

¹³⁹ “Robles, Rodolfo Pedro s/ concurso preventivo”, Expte. 95.150, Sala Primera de la Excm. Cámara Segunda de Apelación, La Plata, LL 2003, B, 667 – Sitio Web SCBA Nº 020195150.

¹⁴⁰ **TRUFFAT, EDGARDO DANIEL**, - “FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS”, ASTREA, BUENOS AIRES, 2007, pág. 204.

concursos abiertos con anterioridad a la vigencia de la nueva ley (24.522), la cual es la única aplicable después de su sanción (C1ª CCom. De San Nicolás, 21-11-96, 'Cruz, Humberto Franco y otros s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Verificación y Graduación de Crédito Fiscal' ED del 2-5-97, p. 7). [¹⁴¹]' '

3) Conclusión del Tópico:

En este capítulo, hemos ahondado con fuerza en la realidad de la figura del acreedor. Al principio vimos las distintas circunstancias de hecho en que el mismo puede hallarse, y consecuentemente, los efectos jurídicos que de ellas se han de inferir.

Posteriormente, en el estudio de las fuentes doctrina y jurisprudencia, entiendo que hemos obtenido muchos de los fundamentos que me llevan a la redacción de la conclusión final de esta obra.

Debo confesar, que mi misión en el desarrollo, es esencialmente presentar la explicación más adecuada de los temas que nos atienden, tal cual son. Pero una vez cumplimentado ello, ya no concentro mi pensamiento en la realidad del deudor, sino que como lo dije anteriormente, atiendo a la del acreedor. El mismo, se presenta ante mí como la figura más bombardeada en sus derechos por el concurso preventivo, en particular el exitoso, pues entiendo que si bien el deudor es quien se halla limitado a las resultas del proceso, es él, quien –en primer término-, se permitió llegar a la situación que amerita la apertura del concurso (cesación de pagos), y –en

¹⁴¹ **RIVERA, JULIO CESAR - ROITMAN, HORACIO – VITOLO, DANIEL ENRIQUE**, -''LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS, TOMO I (ARTS. 1 A 76)'' , RUBINZAL – CULZONI EDITORES, SANTA FE, 2002, pág. 409.

segundo lugar-, solicitó al juez, se abra su propio concurso. Es una situación desfavorable, sin duda.

Pero peor es la del acreedor, que ajeno a la producción de esos hechos, ve su derecho sobre-limitado, por todos los elementos que le eran propios desde un principio, más las eventualidades y escollos extra que deba sortear para llegar a ver su crédito cubierto, por un deudor sobre-obligado.

Creo que la finalidad de la existencia del concurso preventivo puede estar fundada en la necesidad del Estado de contribuir a que una sociedad no se vea afectada tan severamente por la mala situación de la empresa (como núcleo de la economía moderna), facilitando su reconstrucción financiera. Pero no olvidemos que el Derecho ha de perseguir lo justo. Y ante la situación desfavorable de dos sujetos con intereses enfrentados, entiendo que al menos, el más perjudicado, ha de tener prioridad de atención por parte de la ley que acuda en su ayuda.

El concurso preventivo argentino, (si bien complejamente reglado, y exigente en sus extremos a la hora de iniciarse y proseguir hasta concluir exitosamente, so pena de quiebra), considero que no confluye con la idea indicada. Se presenta como una última vía de rescate del deudor, el obligado, irrogando serias consecuencias al acreedor (aun al prudente y diligente).

Concluyo este capítulo, expresando que en mi humilde entender, el proceso concursal preventivo argentino, debería ser revisado profundamente por venideras reformas, en pro de reforzar aún más los requisitos de su apertura, (evitando que se constituya en una vía de escape del deudor de sus múltiples obligaciones), y no implantando un régimen tan drásticamente perjudicial para el acreedor, que simplemente persigue la obtención de lo que es suyo.

CAPÍTULO VII

EXTRACTOS CONEXOS

Como lo planteé al comienzo de esta producción, lo que busco mediante la inclusión de este capítulo, es proveer a la obra de una serie de pasajes que considero revisten destacada importancia, en la idea de lograr un abordaje pleno de los temas que he analizado. Por tanto, cito:

- ‘ ‘El principio de concurrencia en los concursos obliga a todos los acreedores a verificar sus créditos, e insinuarse en el pasivo del deudor para participar del procedimiento y procurar el cobro de sus acreencias (art. 32 y 200 LCQ) ‘ ‘.[¹⁴²] Estoy plenamente de acuerdo en llamar ‘ ‘carga’ ‘ procesal a la verificación (en cualquiera de sus formas), en tanto es el único medio que la ley asigna al acreedor para hacer valer su derecho en el proceso concursal, pero ello nunca obsta a que sea un acto procesal que se mantiene en la órbita de lo disponible por el acreedor. Jurídicamente, él es totalmente libre de cumplimentarla o no, por supuesto, con los efectos propios de cada caso.
- ‘ ‘Cámara ha sostenido respecto del principio de colectividad que la insinuación en el pasivo es preceptiva y no facultativa – instancia de parte –, para los acreedores concursales: es carga procesal demandar la verificación para poder llegar a adquirir la calidad de ‘ ‘acreedor concurrente’ ‘, pero una facultad si quiere permanecer extraño a la ejecución colectiva, y valerse oportunamente de la tutela extra o posconcurso’ ‘. [¹⁴³] Estoy absolutamente de acuerdo con el prestigioso autor que Di Tullio cita.

¹⁴² **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - ‘ ‘TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS’ ‘, LEXIS NEXIS, 2006, página 121.

¹⁴³ **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - ‘ ‘TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CRADITOS’ ‘, LEXIS NEXIS, 2006, página 123.

- ‘ ‘... Las leyes son vinculantes para todos los habitantes de la Nación y para los órganos del Poder (art. 31 C.N. y 1 C.C.). Frente a una ley nueva se abre un sinfín de posibilidades: explicarla, justificarla, exaltarla, demolerla, propugnar su inmediata modificación, etc. ‘ ‘. [144] El autor lo comenta en relación a la aparición de la ley 26.086.
- ‘ ‘no procede la inclusión en el pasivo del concurso de créditos de naturaleza posconcurzal. En este sentido se ha expresado que malgrado la letra de la ley 24.522: el concurso preventivo NO es un juicio universal (la mayúscula es mía). Los derechos de origen posconcurzal (es decir de causa posterior a la presentación en concurso), son ajenos a las reglas de la concurrencia (arts. 16 y 32 LCQ). ‘ ‘ [145] El autor aclara que la causa es lo que en teoría de las Obligaciones se llama ‘ ‘causa fuente‘ ‘.
- ‘ ‘El Tribunal Superior de Córdoba... señala que si bien es cierto que los acreedores posconcursoales están eximidos de la carga de verificar su crédito en el juicio universal (a rigor de verdad, están excluidos de tal procedimiento), y pueden iniciar y sustanciar sin ningún inconveniente las acciones individuales que les corresponden ante los jueces naturales que establecen las leyes, pudiendo incluso obtener sentencias que les reconozcan sus derechos... sin embargo tales... **no** pueden hacerse efectivos sobre los bienes registrables que integraban el patrimonio del deudor al tiempo de la apertura del concurso preventivo. Ello así porque el deudor está afectado respecto de ellos por la inhibición general dispuesta por el juez del concurso. ‘ ‘ [146] (El destacado es mío).
- ‘ ‘Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación indagar lo que ellas expresan jurídicamente, es decir, en

¹⁴⁴ **TRUFFAT**, EDGARDO DANIEL, - ‘ ‘FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS‘ ‘, ASTREA, BUENOS AIRES, 2007, pág. 39.

¹⁴⁵ **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - ‘ ‘TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS‘ ‘, LEXIS NEXIS, 2006, página 9.

¹⁴⁶ **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - ‘ ‘TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS‘ ‘, LEXIS NEXIS, 2006, página 14.

conexión con las demás normas que integran el ordenamiento del que forman parte. En esa averiguación, no cabe prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas, cuando la interpretación razonable y sistemática así lo requiera.’’^[147] Claro está que este pensamiento lleva a la debida armonización de las normas, que es un principio aplicable al Derecho en general, e incluso a otros ordenamientos jurídicos, pero en particular, creo que está planteado en consecuencia con el art. 16 del C.C., que habilita y conduce a pensar así respecto de la debida dotación de significado al texto legal (siempre en miras de hacer valer un derecho en forma concreta, ante el órgano competente).

- ‘’...resulta aplicable a créditos extranjeros tardíos la causal de dispensa establecida por el derecho común (art. 3980 C.C.), en concordancia con el art. 845 C. Com., siempre que se justifique debidamente la imposibilidad de conocimiento del estado concursal’’.^[148] Creo trascendente conocer este matiz de la eficacia prescriptiva en el caso de créditos extranjeros.
- ‘’El plazo acotado de prescripción aplicable solo en el concurso preventivo... alcanza a todo tipo de créditos, en tanto la regla prevista en la norma (art. 56 LCQ), no distingue entre créditos quirografarios y privilegiados, por lo que no existen razones para establecer excepciones que la ley no ha previsto’’.^[149] Di Tullio también cita a Héctor Alegría, quien en su obra “LA LLAMADA PRESCRIPCION CONCURSAL (ART. 56, PÁRRAFO 6º, LEY 24.522)”, ha dicho que: ‘’la doctrina y la jurisprudencia en general han admitido que pesando la carga de

¹⁴⁷ **GARCIA, SILVANA MABEL** - “LA PRESCRIPCION ABREVIADA CONCURSAL (ART. 56 LCQ)”, EN REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ROSARIO, 2003, páginas 177 y ss.

¹⁴⁸ **DI TULLIO, JOSE ANTONIO** - “TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS”, LEXIS NEXIS, 2006, página 441.

¹⁴⁹ **DI TULLIO, JOSE ANTONIO** - “TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS”, LEXIS NEXIS, 2006, página 489.

verificación sobre los acreedores privilegiados o quirografarios, todos estos deben deducir, como carga, el pedido, el incidente o el juicio especial que corresponda, pues en caso contrario les cabe la prescripción, que en estos aspectos no hace distinciones [150]’ ’.

- Galíndez dice: ‘ ‘El pronunciamiento insinuatorio reviste autoridad de cosa juzgada material. Por eso supera los términos de la conclusión del concurso preventivo o de la quiebra.... La prescripción de la acción individual (actio iudicati) para exigir el cumplimiento del derecho que reconoce la sentencia de verificación, es la decenal que contempla el art. 4023 del C.C., y comienza a correr desde la conclusión del proceso concursal... Lo dicho vale también para los acreedores privilegiados que, no obstante haber obtenido sentencia verificatoria, no estuviesen comprendidos en el acuerdo. Ellos, tras la homologación del acuerdo, quedan legalmente habilitados para ejecutar sus pretensiones creditorias ante el juez que corresponda, pero siempre con ajuste a los términos y alcances de la sentencia de verificación (art. 57, LCQ).[151]’ ’
- ‘ ‘Todos estos argumentos llevan a mantener la conclusión que expresábamos anteriormente y que ahora se ratifica: debe modificarse la norma legal en este punto y, en su caso, hacer correr la prescripción desde la homologación del acuerdo, como se propiciaba en los Anteproyectos de 1993 y 1997. Esta última solución parece mejor que otras, como las que propician que la "prescripción concursal" corra desde la apertura del concurso o desde la resolución sobre verificación del art.36 LCQ aunque ambas, a su vez, son superiores a la contenida en la ley actual.[152]’ ’

¹⁵⁰ **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - ‘ ‘TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS’ ’, LEXIS NEXIS, Gerli, BA, Argentina, 2006, nota de pág. 489.

¹⁵¹ **GALINDEZ**, OSCAR A. - ‘ ‘VERIFICACION DE CREDITOS, 3º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA’ ’, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA S.R.L., BS. AS., 2001, pág 270/271.

¹⁵² **ALEGRIA**, HECTOR - ‘ ‘DOS NUEVAS REFLEXIONES SOBRE LA LLAMADA ‘ ‘PRESCRIPCION CONCURSAL ‘ ‘ (ART. 56, 6º PARRAFO, LEY 24.522)’ ’, ESPECIAL PARA LA LEY, LA LEY 2003-C,715, LA LEY ONLINE, 2003, pág. 2.

- ‘ ‘... si ya ha mediado cumplimiento parcial del acuerdo, el verificador tardío tiene derecho a todas las cuotas futuras, según las oportunidades de pago convenidas, pero no pierde las anteriores que no pudo percibir. Compete al juez determinar cuándo y de qué modo se le abonarán aquellas.[¹⁵³] ‘ ‘
- ‘ ‘El pedido de verificación ante el síndico no requiere de ninguna formalidad ni de patrocinio letrado; cuando –en cambio-, el pedido incidental debe contener, desde nuestro punto de vista, la totalidad de los recaudos que las normas procesales imponen con relación a la demanda.[¹⁵⁴] ‘ ‘
- ‘ ‘El allanamiento del deudor: ¿Es vinculante para los sujetos implicados en el proceso? Para la mayor parte de la doctrina y jurisprudencia del fuero capitalino, homologado el acuerdo y habiendo recobrado el deudor el pleno ejercicio de la administración, el allanamiento queda en la esfera de su disponibilidad. Se tiene en cuenta para fundar la opinión que la incorporación del crédito al pasivo ya no concurrirá a formar las mayorías necesarias para aprobar el acuerdo, lo cual lo tornaría insospechable de ‘concilium fraudis’. [¹⁵⁵] ‘ ‘
- ‘ ‘Es cierto que la ley de concursos, por la pluralidad de finalidades que persigue (muchas veces contradictorias) es terreno fértil, más allá de la intención inicial de los jueces, para llamativas mutaciones interpretativas. Las decisiones judiciales son siempre difíciles porque dar a cada uno lo suyo conforme una cierta igualdad, encontrar el punto de perfecta concordancia entre la previsión escrita, abstracta y genérica y la difusa realidad —donde las cosas no se dan, como en un laboratorio, en un ambiente estéril y con prescindencia de los demás factores—, equilibrar en tensión perfecta la pulsión innata de hacer justicia y el deber de

¹⁵³ **GALINDEZ**, OSCAR A. - ‘‘VERIFICACION DE CREDITOS, 3º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA’’, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA S.R.L., BS. AS., 2001, pág. 353.

¹⁵⁴ **VAISER**, LIDIA - ‘‘VERIFICACION TARDIA EN EL CONCURSO PREVENTIVO’’ EN ‘‘DERECHO CONCURSAL’’ ROUILLON, ADOLFO A. N. (DIRECTOR) -, LA LEY 2004, pág. 880.

¹⁵⁵ **VAISER**, LIDIA - ‘‘VERIFICACION TARDIA EN EL CONCURSO PREVENTIVO’’ EN ‘‘DERECHO CONCURSAL’’ ROUILLON, ADOLFO A. N. (DIRECTOR) -, LA LEY 2004, pág. 883.

garantizar certeza, todo eso requiere un particular talento, tiempo, formación y claridad de ideas.^[156]''

- ''Las reformas parciales de cuerpos normativos como la Ley de Concursos presentan muchas veces estos efectos paradójales. Como el legislador da por sentado que el nuevo instituto será aplicado conforme su finalidad, no se toma el trabajo de corregir aquellos artículos que —por provenir de una realidad arcaica— consagran soluciones disímiles. El problema se suscita luego cuando al juzgarse la cuestión el intérprete (y alguna parte interesada) se abroquelan en el texto expreso de la norma para vedar derechos que ostensiblemente deben reconocerse al recién llegado.^[157]''

Intuyo que el lector sabrá dar a cada cita su debida ubicación conceptual, en miras de integrarse a los temas que individualmente he tratado.

¹⁵⁶ **TRUFFAT, EDGARDO DANIEL** - ''RESISTENCIAS FRENTE AL VALOR DE COSA JUZGADA DE LAS DECISIONES VERIFICATORIAS CONCURSALES'' , SUPLEMENTO CYQ 2008 (AGOSTO), 24-LA LEY 2008-E,1, LA LEY ONLINE, pág. 3.

¹⁵⁷ **TRUFFAT, DANIEL** - ''LOS ACREEDORES QUE OPTAN POR CONCINUAR EL JUICIO ANTE EL JUEZ NATURAL NO SON ACREEDORES 'DE SEGUNDA''' , LA LEY ONLINE, LA LEY 2006-F, 1342, pág. 2.

CONCLUSIÓN FINAL

He aquí la última etapa de mi trabajo. En el presente capítulo, me propongo corroborar la hipótesis, o hacerla caer, en función de los datos, conclusiones y razonamientos a los que tuve alcance a través del desarrollo de la investigación.

La hipótesis es: “El art. 56 de la LCQ **crearía** una nueva forma de extinción de las obligaciones: la de operarse la prescripción de la acción de verificación tardía por no alcanzar el acreedor la admisión de su crédito en el pasivo concursal dentro de los plazos legales. ”

Así veamos:

El análisis de las fuentes tratadas, me condujo a la certificación de una idea que inicialmente tuve: si bien prácticamente la totalidad de los modos de entender la ley en relación a la norma art. 56 LCQ, con más los argumentos que se vierten en cada caso en concreto a la hora de estudiar los efectos de la misma, comulgan con la interpretación que habría de corroborar la hipótesis, no dejan de existir pasajes que no lo hacen de modo acabado.

Es tal, el motivo de la realización de esta monografía, que pretendo permita al intérprete de la ley, tras la lectura, poder posicionarse del modo correcto frente a ella, a través del conocimiento de la hermenéutica seguida por las fuentes tratadas.

En esa inteligencia planteo:

Es indiscutible que la LCQ en su Art. 56 presenta dos plazos de prescripción de la acción de verificación tardía de que es titular el acreedor de título o causa anterior a la presentación en concurso preventivo de su deudor, la que reviste el carácter de modo de extinción de la misma (por ser tal su efecto natural).

Pero el punto central de la duda, radica en esclarecer la idea de si una vez prescripta esa acción de corte netamente concursal, el acreedor ha de conservar alguna otra acción para hacer valer su crédito de modo extraconcursal, o bien entender que su crédito se ha extinguido.

Por ello, propicio la siguiente y última exposición de fuentes, que me autorizará a concluir.

La idea más sólida (y casi unánime) en doctrina, es la que ve al crédito, extinguido como tal, por la pérdida de la acción civil que lo hacía exigible, y por tanto la obligación devenida en natural. Así:

- Di Tullio: ‘ ‘... los efectos del acuerdo preventivo homologado resultan aplicables a todos los acreedores, no importa cual haya sido la forma de insinuación (tempestiva o tardía), o hayan optado por no someterse al procedimiento concursal, y una vez cumplido pretendan ejercer sus derechos con independencia del proceso colectivo... El ejercicio de las acciones individuales con posterioridad al cumplimiento del acuerdo, encuentra en la disposición del art. 56 **una limitación**: la prescripción del crédito a los dos años de la presentación en concurso ‘ ‘. [¹⁵⁸]
- Martorell: ‘ ‘La acción, sea en el concurso preventivo o fuera de él, debe promoverse dentro de los dos años de la presentación en concurso. Transcurrido dicho plazo bienal, habrán de prescribir las acciones del acreedor, tanto respecto de los restantes acreedores como del concursado o los terceros ligados al acuerdo... Esto en la práctica significa que el acreedor ‘*ex ante*’ sabrá, frente al concurso de su deudor, que cuenta con dos años, desde la presentación de este requiriendo el remedio ‘preventivo’, para intentar verificar tardíamente su crédito. Y que si la acción judicial aun no ha sido iniciada en ese término, habrá de prescribir.[¹⁵⁹] ‘ ‘

¹⁵⁸ **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - ‘ ‘TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CRADITOS’’, LEXIS NEXIS, 2006, página 121 y 122.

¹⁵⁹ **MARTORELL**, ERNESTO EDUARDO, ‘ ‘TRATADO DE CONCURSOS Y QUIEBRAS, TOMO II B’’, DEPALMA, B.A., 2001, pág. 670 y 694.

- Lorente: ‘ ‘Hoy no es la finalización del concurso, sino su ‘conclusión’ lo que hace que la vía incidental (tardía) ya no sea la adecuada, debiendo el pretensor acreedor tramitar la ‘acción individual’ que tenga, según la naturaleza de su crédito. Si tenemos que precisar el contenido de la locución ‘acción individual’ diremos, como primer condición, que esta tramita por ante el mismo juez del concurso, ya que la conclusión del concurso no importa el cese del fuero de atracción (art. 21 LCQ), por lo que la acción individual del art. 56 LCQ será necesariamente de carácter concursal. La misma será individual en el plano del trámite, pero de ello no se sigue que no se trate en última instancia de un proceso verificadorio... Se ha sostenido que lo que concluye es el proceso concursal y no el estado concursal, que continua hasta el cumplimiento del acuerdo o la declaración de quiebra por nulidad o incumplimiento del acuerdo. [160]’ ‘ Agrega: ‘ ‘ Sin perjuicio del plazo de prescripción emanado de la acción individual que tuviere el acreedor, si su deudor se presenta en concurso preventivo, el plazo de prescripción liberatoria se acorta a dos años desde la antedicha presentación. [161]’ ‘
- Martínez de Petrazzini: la autora refiere al ‘‘menoscabo’’ de los derechos de los acreedores (en referencia a la prescripción concursal), de lo que se infiere el carácter aniquilador del derecho que la autora le da a la misma [162].
- Vaiser: ‘ ‘... la irrupción de un término de prescripción abreviada... excita la concurrencia, puesto que la inacción del acreedor se encamina a una irremediable pérdida de su derecho.[163]’ ‘

¹⁶⁰ **LORENTE**, JAVIER ARMANDO, ‘‘LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS TOMO I’’, EDICIONES GOWA PROFESIONALES; Haedo, BA, Argentina, 2000, pág. 598/599.

¹⁶¹ **LORENTE**, JAVIER ARMANDO, ‘‘LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS TOMO I’’, EDICIONES GOWA PROFESIONALES; Haedo, BA, Argentina, 2000, pág. 601.

¹⁶² **MARTINEZ DE PETRAZZINI**, VERONICA F., ‘‘LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS’’, EDICIONES MACCHI, B.A., 1997, pág 103.

¹⁶³ **VAISER**, LIDIA - ‘‘VERIFICACION TARDIA EN EL CONCURSO PREVENTIVO’’ EN ‘‘DERECHO CONCURSAL’’ ROUILLON, ADOLFO A. N. (DIRECTOR) -, LA LEY 2004, pág. 880.

- Fassi y Gebhardt: ‘ ‘Se ha argumentado para fundar este acortamiento o inaplicabilidad de plazos mayores, que los periodos extensos conspiran claramente contra la posibilidad de recuperación del empresario, a lo que se añade que no es razonable que un acreedor guarde tan notoria inactividad frente a la presentación en concurso del deudor.[¹⁶⁴]’ ‘
- Garaguso: ‘ ‘La ley 24.522 introdujo en el art. 56 LCQ, y con relación al proceso concursal preventivo la extinción del ‘ ‘derecho’ a la verificación... El juez declara la prescripción extinguiendo la misma el crédito a los fines de su reclamo civil.[¹⁶⁵]’ ‘
- Romero: ‘ ‘Siendo el proceso de verificación la única vía procesal para ejercer el derecho a la jurisdicción que tienen los acreedores por causa o título anterior a la presentación en concurso... iniciada la incidencia o el juicio individual, con posterioridad al plazo de prescripción de dos años de la apertura en concurso. Corresponde declarar ‘prescripta’ la acción.[¹⁶⁶]’ ‘

En jurisprudencia, por su parte, se ha dicho:

- ‘ ‘ La insinuación que se intente después de vencidos los periodos establecidos por la ley que el juez debe fijar en la sentencia de apertura (art. 14 inc. 3º), sea esta tardía, o se pretenda el ejercicio de las acciones individuales con posterioridad al cumplimiento del acuerdo, encuentran ahora en la disposición del art. 56 LCQ, una limitación: la prescripción del crédito a los dos años de la presentación en concurso. La reforma

¹⁶⁴ **FASSI, SANTIAGO Y GEBHARDT, MARCELO** - ‘ ‘CONCURSOS Y QUIEBRAS 7 º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA’, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA, BS. AS., 2000, pág. 183.

¹⁶⁵ **GARAGUSO, HORACIO PABLO Y GARAGUSO, GUILLERMO HORACIO FRANCISCO** ‘ ‘PONENCIA 9 DERECHO COMERCIAL Y CONCURSAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MAR DEL PLATA’, COLEGIO DE ABOGADOS MAR DEL PLATA, MAR DEL PLATA, Google, 2008, en relación al fallo ‘ ‘Arpez S.A. s/ Quiebra – casusa nº 45.895, resolución del 30/6/2008, de trámite ante el Juzgado Civil y Comercial nº 10 de Mar del Plata.

¹⁶⁶ **ROMERO, VERONICA M.** - ‘ ‘PONENCIA XI JORNADAS BONAERENSES DE JOVENES ABOGADOS, COMISION DE DERECHO COMERCIAL, PONENCIA: EL PLAZO PREVISTO EN EL ART. 56 DE LA LCQ DEBE SER DE CADUCIDAD’, ZARATE – CAMPANA, Google, salthu@estudiojuridicomdp.com.ar, 2000, pág. 1.

introduce una cuestión trascendente al disponer que ‘Vencido ese plazo (de dos años desde la presentación en concurso) prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros acreedores como del concursado, o terceros vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de prescripción sea menor’.

La reforma, al introducir la prescripción abreviada, replantea el ejercicio de la concurrencia, generando una consecuencia más gravosa para los acreedores que decidieron mantenerse alejados del concurso por más de dos años contados desde la prescripción.

Ahora, dicha inactividad acarrea directamente la sanción de prescripción abreviada, y la consecuente extinción de la obligación crediticia, sin perjuicio de lo previsto en por el art. 515 inc.2 del Código Civil...

Superado dicho término, el crédito no presentado a verificar – o sobre el que no se promovió la correspondiente acción judicial- se considera prescripto, quedando solo subsistente como una obligación natural conforme los principios generales de la legislación civil... Dicha norma crea un nuevo supuesto de extinción de las obligaciones por prescripción, consistente en la no verificación de créditos en un concurso preventivo dentro del plazo descripto supra.^[167] ‘ ‘

- ‘ ‘El plazo de prescripción que contempla el art. 56 de la ley 24.522 es de aplicación a todo tipo de obligación, comprendidas las de causa laboral. Es que el ordenamiento concursal, tras la reforma introducida en el año 1995 tiene por finalidad generar un mecanismo de extinción de las deudas, en este caso mediante la posibilidad de articular la defensa de prescripción, en virtud de la cual se impide el reclamo por vía de la acción. Se persigue con ello que el pasivo del deudor quede de algún modo determinado en

¹⁶⁷ ‘ ‘Mazzini, Marcelo Omar s/ Incidente de Verificación de Crédito’’ Expte. 106.200 – Excma. Cámara Segunda de Apelaciones, La Plata – Sitio Web SCBA nº 0201106200.

forma definitiva, contribuyendo de esa forma a facilitar la superación de la cesación de pagos.^[168] ‘ ‘

- ‘ ‘El plazo de prescripción establecido por el art. 56 de la ley 24.522 es de dos años a contar desde la presentación del deudor en concurso, ya sea para deducir el pertinente incidente de verificación... o para promover la acción individual que corresponda. En cualquiera de los casos señalados, es clara la abreviación de los plazos de prescripción de las deudas del concursado que ha previsto la ley – sin perjuicio de que la legislación ordinaria establezca un plazo menor-.^[169] ‘ ‘
- Los jueces Dres. Sosa y Marroco, han dicho: ‘ ‘Si bien los acreedores no verificantes pueden ejercer las acciones provenientes de sus créditos mediante ejecuciones individuales, aplicándose las condiciones aplicadas en el acuerdo preventivo oportunamente homologado, ello es así en tanto la acción no se encuentre prescripta. Es decir, el derecho de los acreedores no concurrentes no puede ser ilimitado en el tiempo, dado que el hecho de permitir indefinidamente la ejecución individual una vez concluido el concurso coloca a los acreedores verificantes en una situación desigual en relación a aquéllos que adoptaron la actitud contraria, violando así la "pars condicio creditorum" que debe presidir el procedimiento concursal. De ahí que superado dicho término, el crédito no presentado a verificación sobre el que no se promovió la correspondiente acción judicial- se considera prescripto, quedando sólo subsistente como una obligación natural, conforme a los principios generales de la legislación civil.^[170] ‘ ‘

¹⁶⁸ ‘ ‘Fundación José María Mainetti para el progreso de la medicina s/ Incidente de Verificación Tardía’ – Sitio Web SCBA, Sumario B301059, CC0202 LP 99466 RSD-1-3-S4-3-2003, Juez Ferrer.

¹⁶⁹ ‘ ‘Transporte del Oeste S.A. s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Verificación de Crédito’’, Expte. 50.707, Excma. Cámara de Apelación Civil y Comercial, Sala I, Morón, 2004.

¹⁷⁰ ‘ ‘Robles, Rodolfo Pedro s/ concurso preventivo’’, Expte. 95.150, Sala Primera de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, La Plata, LL 2003, B, 667 – Sitio Web SCBA Nº 020195150.

Pero aun en este estadio, conociendo la claridad y consenso de entendimiento del texto legal que los autores reseñados respaldan, no dejo de advertir algunos fragmentos doctrinarios, que me conducen a pensar que tal interpretación no es necesariamente unánime. Encuentro:

- Alegría dice: ‘ ‘La ley 24.522 incluyó el debatido tema de la novación concursal. Parece entonces razonable que si los créditos mutan su originaria naturaleza, exista respecto de todos una determinada prescripción, **al menos para su insinuación concursal**. [¹⁷¹] ‘ ‘
- Grispo: es citado por Alegría, y dice: ‘ ‘Con relación a la prescripción abreviada del artículo 56 párr. 6º, de la LCQ, Grispo señala que ella sólo tiene efecto dentro del proceso concursal. Por ende, estima que si el crédito tenía una prescripción mayor a dos años y el concurso ha concluido, podrá el acreedor reclamar a su deudor por la acción de derecho común que corresponda a su acreencia. (Grispo: ‘Algunas cuestiones sobre Concursos y Quiebras, pág. 104 y siguientes’). [¹⁷²] ‘ ‘
- Galíndez: ‘ ‘Según Torné, los créditos de los no concurrentes, una vez formalizada la conclusión del concurso, pasan a considerarse como deudas naturales sin fuerza para reabrir el procedimiento ni instar en otro concurso. Hemos anticipado nuestra opinión contraria a esta tesis... ya que no hay norma legal alguna que prevea que tras la conclusión del concurso se opere la extinción de aquellos créditos que, no obstante ser de causa o título anterior al concurso, no fueron insinuados al pasivo por sus respectivos titulares (el subrayado es mío)... Si opta por la insinuación, encontrará la satisfacción de su acreencia en el marco del concurso; pero si no lo hace, debe aguardar hasta la conclusión de este, oportunidad en que recupera el ejercicio de las acciones individuales.

¹⁷¹ ALEGRIA, HECTOR - ‘ ‘LA LLAMADA ‘ ‘PRESCRIPCION CONCURSAL ‘ ‘ (ART. 56, 6º PARRAFO, LEY 24.522) ‘ ‘, ESPECIAL PARA LA LEY, LA LEY 2003-B,661, LA LEY ONLINE, 2003, pág. 2.

¹⁷² GALINDEZ, OSCAR A. - ‘ ‘VERIFICACION DE CREDITOS, 3º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA ‘ ‘, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA S.R.L., BS. AS., 2001, pág. 364/365, en cita a página 139 nota 37 de ‘ ‘Algunas Cuestiones de Derecho Concursal ‘ ‘, de Héctor Alegría.

aunque con las limitaciones de los efectos operados en el concurso. Es decir, el titular del crédito no insinuado puede ejercer su derecho contra el ex concursado, pero respetando los términos del acuerdo homologado (art. 56, párr. 1º LCQ).^[173] ‘ ‘ (el subrayado es mío).

- Fassi y Gebhardt: ‘ ‘Si... el concurso concluyó, para lo cual ya no se aguarda el cumplimiento (art. 59 LCQ), el síndico cesó en su actuación y el trámite corresponde a una acción individual **NO** concursal entre acreedor y deudor.^[174] ‘ ‘ (el resaltado es mío).

Destaco que la inclusión de estas citas, no implica el adjudicar al autor de las mismas una postura en concreto. Simplemente, las tomo como reflejo de la idea que trato en la presente obra.

De estos pasajes, resulta en mí una idea clara: existen autores que, por su argumentación, habilitan a pensar en la que denomino ‘ ‘Teoría de la dualidad de acciones’ ‘, que implica entender que existen dos acciones individuales distintas (tal como lo expliqué en el apartado técnico), de las cuales, la concursal, no ha de venir a reemplazar o absorber la de derecho fondal, sino a sumarse a ella, con lo que concluido el concurso, aquel acreedor que no fue concurrente, puede ejercer la de derecho fondal ante juez natural, y requerir el cumplimiento de la obligación, con independencia de la prescripción de la acción de tipo concursal.

Desde mi óptica, me interesa esbozar esa idea solo de modo hipotético, porque considero que el mejor entendimiento de la ley se puede alcanzar dando curso a las ideas que revisten cierta contextura,

¹⁷³ **GALINDEZ**, OSCAR A. - ‘ ‘VERIFICACION DE CREDITOS, 3º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA’ ‘, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA S.R.L., BS. AS., 2001, pág. 367/368.

¹⁷⁴ **FASSI**, SANTIAGO Y **GEHBARDT**, MARCELO - ‘ ‘CONCURSOS Y QUIEBRAS 7 º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA’ ‘, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA, BS. AS., 2000, pág. 179.

(identidad que amerite el planteamiento) para llegar a hacerlas caer, y así reforzar la idea inicial.

No deja de sorprenderme que el legislador haya optado por la prescripción (que extingue la acción), y no por la caducidad, que es el medio más idóneo para aniquilar el derecho en sí mismo, dada la finalidad que inspira la norma.

Pero es claro que la idea “dualista”, no se compadece con la voluntad del legislador, ni con la naturaleza del proceso concursal preventivo. En todo, obsta a la buena aplicación de la ley actual.

Su planteo, es hoy improcedente.

Sin perjuicio de dejar ello sentado, aclaro que veo un alto contenido académico, en la distinción de esa teoría y la “Identificadora de acciones” (su contrapartida), porque de la mayor claridad, se infiere una más cierta aproximación a lo correcto, y también a lo justo.

Por tanto, (sin perjuicio de atender a las conclusiones individualmente vertidas para cada tópico), mi investigación en su completitud, arroja el siguiente resultado:

- El legislador, mediante la ley 24.522, al estatuir un plazo de prescripción de la acción de verificación tardía en su art. 56, se propuso reglar un lapso temporal limitado concerniente a tal trámite, para alcanzar un doble objetivo: uno inmediato (conformar el pasivo, cristalizándolo), y otro ulterior (hacer que el deudor que concluye su concurso preventivo de modo exitoso, quede purificado de toda obligación con causa o título anterior a su presentación). La ley 26.086 (si bien es trascendental de ser atendida) no altera esta conclusión.

- Todo acreedor debe conocer que el iter procedimental tendiente a la obtención de una eventual ejecución forzosa (judicial) de su derecho, reconoce un desvío ante el hecho de que su deudor se concursa preventivamente. Si ello sucede, el alerta debe ser superior. Así, el plazo de ejercicio de su acción se ve efectivamente “abreviado” por los términos de la ley concursal, y todo un nuevo camino por recorrer lo espera en dicha sede. Lo esencial será conocer claramente cuál es su situación en tanto acreedor (en relación al art. 21 LCQ), y desde allí decidir y actuar.
- Pero muy claro debe tener el acreedor en su esquema de situación, que su derecho ya no reconoce otra autoridad más que la concursal. Es en tal sede donde en definitiva se habrá de acoger su petición, o no (por supuesto, me refiero tanto a tribunales de primera instancia como de ulteriores.)
- Si el acreedor no participa del concurso, porque así lo decide, o porque habiéndolo intentado, no es verificado ni admitido su crédito, (siempre que no conserve su acción porque el plazo de prescripción de la misma se halle suspendido o interrumpido), el crédito no será tal en lo sucesivo, (operada la prescripción), por haberse producido la transformación de la única acción con que él contaba, de civil a natural.

Por ello, concluyo mi monografía, corroborando la hipótesis planteada:

“El art. 56 de la LCQ, **CREA** una nueva forma de extinción de las obligaciones: la de operarse la prescripción de la acción de verificación tardía por no alanzar el acreedor la admisión de su crédito en el pasivo concursal dentro de los plazos legales.”

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- **ALEGRIA, HECTOR** - “DOS NUEVAS REFLEXIONES SOBRE LA LLAMADA “PRESCRIPCION CONCURSAL” (ART. 56, 6º PARRAFO, LEY 24.522)”, ESPECIAL PARA LA LEY, LA LEY 2003-C,715, LA LEY ONLINE, 2003.
- **ALEGRIA, HECTOR** - “LA LLAMADA “PRESCRIPCION CONCURSAL” (ART. 56, 6º PARRAFO, LEY 24.522)”, ESPECIAL PARA LA LEY, LA LEY 2003-B,661, LA LEY ONLINE, 2003.
- **BORDA, GUILLERMO A.** - “TRATADO DE DERECHO CIVIL, PARTE GENERAL II”, EDITORIAL PERROT, BA, 1991.
- **CARCIOCHI, VALENTIN JULIO**, -“EL CONTADOR PUBLICO EN LOS CONCURSOS Y QUIEBRAS – EL CONTADOR CONCURSALISTA”, OSMAR D. BUYATTI LIBRERÍA EDITORIAL, AVELLANEDA, BA, ARGENTINA, 2004.
- **CARNERO, SILVIA ALICIA Y DE GREGORIO, SILVANA** - “ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE APLICAR LA PRESCRIPCION DEL ART. 56 LCQ TRATADOSE DE UN PROCESO DE DAÑOS QUE SE ENCONTRABA EN ETAPA PROBATORIA CUANDO EL DEMANDADO SE PRESENTO EN CONCURSO – TODO ELLO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY 24.522 ANTES DE LA REFORMA DE LA LEY 26.086”, INSTUTUTO DE DERECHO COMERCIAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MAR DEL PLATA, (Comentario al fallo “Reversat”), AZUL, Google, 2008.
- **CASADIO MARTINEZ, CLAUDIO ALFREDO** - “LA ACCION POR DOLO EN LA VERIFICACION DE CREDITOS”, PUB. LLPATAGONIA 2009 (JUNIO), 839, LA LEY ONLINE.
- **CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**, DELEGACIÓN LOMAS DE ZAMORA - 3º CONGRESO PROVINCIAL DE SÍNDICOS CONCURSALES - “CONCLUSIONES”, DEL 25 DE AGOSTO DE 2007, GOOGLE.
- **D’ALBANO TORRES, PATRICIA I.** - “LA PRESCRIPCION CONCURSAL Y LA RESPONSABILIDAD FISCAL POR DEUDA AJENA DE LOS DIRECTIVOS DE LAS

SOCIEDADES”, PONENCIA EN XVIII ENCUENTRO DE INSTITUTOS DE DERECHO COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, B.A., Google, sf.

- **D’ALESSIO**, IGNACIO - “EL CASO ‘VALLE DE LAS LEÑAS S.A.’. INCONSISTENCIAS EN EL DERECHO CONCURSAL TRIBUTARIO”, LA LEY 2006-A, 592, LA LEY ONLINE.
- **DI TULLIO**, JOSE ANTONIO - “TEORIA Y PRACTICA DE LA VERIFICACION DE CREDITOS”, LEXIS NEXIS, Gerli, BA, Argentina, 2006.
- **ESCUTI**, IGNACIO A. Y **JUNYENT BAS**, FRANCISCO - “INSTITUCIONES DE DERECHO CONCURSAL 2”, ALVERONI EDICIONES, Córdoba, 2002.
- **ESCUTI**, IGNACIO A. Y **JUNYENT BAS**, FRANCISCO - “INSTITUCIONES DE DERECHO CONCURSAL”, ALVERONI EDICIONES, Córdoba, 1998.
- **FASSI**, SANTIAGO Y **GEBHARDT**, MARCELO - “CONCURSOS Y QUIEBRAS 7 º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA”, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA, BS. AS., 2000.
- **GALINDEZ**, OSCAR A. - “VERIFICACION DE CREDITOS, 3º EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA”, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA S.R.L., BS. AS., 2001.
- **GARAGUSO**, HORACIO PABLO Y **GARAGUSO**, GUILLERMO HORACIO FRANCISCO - “PONENCIA 9 DERECHO COMERCIAL Y CONCURSAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MAR DEL PLATA”, COLEGIO DE ABOGADOS MAR DEL PLATA, MAR DEL PLATA, Google, 2008, en relación al fallo “Arpez S.A. s/ Quiebra – casusa nº 45.895, resolución del 30/6/2008, de trámite ante el Juzgado Civil y Comercial nº 10 de Mar del Plata.
- **GARCIA**, SILVANA - “DOS CUESTIONES SOBRE PRESCRIPCION ABREVIADA CONCURSAL (ART. 56 LCQ)”, PUB. LLL EDITORIAL 2009 (JUNIO), 505, LA LEY ONLINE.
- **GARCIA**, SILVANA MABEL - “LA PRESCRIPCION ABREVIADA CONCURSAL (ART. 56 LCQ)”, EN REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ROSARIO, 2003.
- **IGLESIAS**, JOSE ANTONIO - “CONCURSOS Y QUIEBRAS. LEY 24.522 COMENTADA”, DEPALMA, B.A., 1995.
- **LEVENE**, RICARDO - “MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL (2º EDICION, TOMO I)”, DEPALMA, AVELLANEDA, BA, 1993.

- **LLAMBIAS**, JORGE JOAQUIN - “TRATADO DE DERECHO CIVIL, PARTE GENERAL, TOMO I”, EDITORIAL PERROT, BA, 1995.
- **LLAMBIAS**, JORGE JOAQUIN - “TRATADO DE DERECHO CIVIL, PARTE GENERAL, TOMO II”, EDITORIAL PERROT, BA, 1997.
- **LLAMBIAS**, JORGE JOAQUIN – **RAFFO** BENEGAS, PATRICIO – **SASSOT**, RAFAEL A. “MANUAL DE DERECHO CIVIL, OBLIGACIONES, UNDECIMA EDICION”, EDITORIAL PEROT B.A., B.A., 1997.
- **LORENTE**, JAVIER ARMANDO, “LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS TOMO I”, EDICIONES GOWA PROFESIONALES; Haedo, BA, Argentina, 2000.
- **MARTINEZ DE PETRAZZINI**, VERONICA F., “LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS”, EDICIONES MACCHI, B.A., 1997.
- **MARTORELL**, ERNESTO EDUARDO, “TRATADO DE CONCURSOS Y QUIEBRAS, TOMO II B”, DEPALMA, B.A., 2001.
- **MOURE**, GRACIELA CRISTINA Y **CELANO**, JUAN CARLOS - “CONCURSO PREVENTIVO: TRATAMIENTO IMPOSOTIVO DE LAS QUITAS RESULTANTES DEL ACUERDO HOMOLOGADO”, JORNADAS DE DERECHO CONCURSAL, MENDOZA, Google, 2002.
- **PALACIO**, LINO ENRIQUE - “MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL”, LEXIS NEXIS ABELEDO-PERROT, B.A., 2003.
- **PRONO**, MARIANO R. - “LAS ACCIONES DE CONTENIDO PATRIMONIAL CONTRA EL CONCURSADO”, SUPLEMENTO CYQ 2009 (FEBRERO), 5-LA LEY 2009-B, 777, LA LEY ONLINE.
- **RIVERA**, JULIO CESAR - **ROITMAN**, HORACIO – **VITOLO**, DANIEL ENRIQUE, “LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS, TOMO I (ARTS. 1 A 76)”, RUBINZAL – CULZONI EDITORES, SANTA FE, 2002.
- **RIVERA**, JULIO CESAR, “INSTITUCIONES DE DERECHO COMERCIAL TOMO I CONCURSO”, RUBINZAL - CULZONI, STA. FE, 2003.
- **RIVERA**, JULIO CESAR, “INSTITUCIONES DE DERECHO COMERCIAL TOMO II QUIEBRA”, RUBINZAL - CULZONI, STA. FE, 2003.

- **ROMERO, VERONICA M.** - “PONENCIA XI JORNADAS BONAERENSES DE JOVENES ABOGADOS, COMISION DE DERECHO COMERCIAL, PONENCIA: EL PLAZO PREVISTO EN EL ART. 56 DE LA LCQ DEBE SER DE CADUCIDAD”, ZARATE – CAMPANA, Google, salthu@estudiojuridicomdp.com.ar, 2000.
- **ROUILLON, ADOLFO A. N.** - “REGIMEN DE CONCURSOS Y QUIEBRAS LEY 24522,13 9 EDICION ACTUALIZADA Y AMPLIADA ”, ASTREA, BS. AS., 2004.
- **SANDLER, HECTOR RAUL**, “COMO HACER UNA MONOGRAFIA EN DERECHO”, FACULTAD DE DERECHO, U.B.A., LA LEY, B.A., 2003.
- **STACCO, JORGE SANTOS** - “INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA: ASPECTOS PROCESALES”, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, TRELEW, 1997.
- **TRUFFAT, DANIEL** - “LOS ACREEDORES QUE OPTAN POR CONCINUAR EL JUICIO ANTE EL JUEZ NATURAL NO SON ACREEDORES ‘DE SEGUNDA’”, LA LEY ONLINE, LA LEY 2006-F, 1342.
- **TRUFFAT, EDGARDO DANIEL** - “RESISTENCIAS FRENTE AL VALOR DE COSA JUZGADA DE LAS DECISIONES VERIFICATORIAS CONCURSALES”, SUPLEMENTO CYQ 2008 (AGOSTO), 24- LA LEY 2008-E,1, LA LEY ONLINE.
- **TRUFFAT, EDGARDO DANIEL**, - “FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS”, ASTREA, BUENOS AIRES, 2007.
- **VAISER, LIDIA** - “VERIFICACION TARDIA EN EL CONCURSO PREVENTIVO” EN “DERECHO CONCURSAL ” ROUILLON, ADOLFO A. N. (DIRECTOR) -, LA LEY 2004.

ÍNDICE GENERAL

Introducción.....1

Hipótesis..... 5

APARTADO TÉCNICO

Fuentes del Derecho.....9

Tratamiento que se le da al instituto de la prescripción en el ordenamiento
jurídico argentino.....10

1. Desde el C.C.....10

2. Desde el C. Com.....13

3. En la LCQ.....13

Análisis necesario de la evolución legal a través de las leyes 19.551, 24.522
y 26.086.....14

Definiciones.....17

- Derechos Subjetivos.....17
- Derechos patrimoniales.....16
- Derecho personal.....18
- Obligación.....18
- Acción.....18
- Fuero de atracción.....18
- Concurso Preventivo.....18
- Quiebra.....19
- Verificación de créditos.....19
- Verificación tardía.....19
- Créditos Verificados.....20
- Créditos Admisibles.....20
- Créditos Inadmisibles.....20
- Acción individual.....20

Tópicos.....23

CAPÍTULO I

LOS PLAZOS DEL ART. 56 LCQ COMO DE CADUCIDAD O DE
PRESCRIPCIÓN

Intro.....25

Doctrina.....25

 a) Como plazo de Prescripción.....26

 b) Como plazo de caducidad.....28

 c) Proporción.....34

Jurisprudencia.....35

 d) Como plazo de Prescripción.....35

 e) Como plazo de caducidad.....39

 f) Conclusión del Tópico.....39

CAPÍTULO II

ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN E INTERRUPCIÓN DE
LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

Intro.....41

Doctrina.....45

 a) Autores que tratan el tema.....45

 b) Autores que no tratan el tema.....50

Jurisprudencia.....52

Conclusión del Tópico.....61

CAPÍTULO III

LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO PARA PLANTEAR LA DEFENSA DE
PRESCRIPCIÓN

Intro.....63

Doctrina.....64

 a) Está legitimado.....64

 b) No está Legitimado.....67

 c) Proporción.....68

Jurisprudencia.....69

Conclusión del Tópico.....70

CAPÍTULO IV

EL ART. 56 DE LA LCQ COMO NORMA DEL CONCURSO PREVENTIVO O DE
LA QUIEBRA

Intro.....73

Doctrina.....73

 a) Como norma exclusivamente del concurso preventivo exitoso.....73

b) Casos de quiebra.....75

Jurisprudencia.....80

c) Como norma exclusivamente del concurso preventivo exitoso.....80

d) Casos de quiebra.....84

Conclusión del Tópico.....85

CAPÍTULO V

FINALIDAD DEL ART. 56 LCQ (VOLUNTAD DEL LEGISLADOR)

Intro.....89

Doctrina.....90

Jurisprudencia.....93

Conclusión del Tópico.....95

CAPÍTULO VI

SITUACIÓN DEL ACREEDOR FRENTE AL CONCURSAMIENTO DE SU
DEUDOR

Intro.....97

Doctrina.....105

Jurisprudencia.....115

Conclusión del Tópico.....118

CAPÍTULO VII

EXTRACTOS CONEXOS

Desarrollo.....121

CONCLUSIÓN FINAL

Intro.....127

Doctrina.....128

Jurisprudencia.....130

Resultado.....135

Conclusión.....136

BIBLIOGRAFÍA CITADA.....139

ÍNDICE GENERAL.....145

Nota del Autor

La presente producción monográfica fue concebida en el marco de la materia Seminario, de la Carrera de Abogacía, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad Nacional de La Plata, de conformidad a la normativa difundida por la Dirección de Seminarios.

Todos los derechos reservados, Ley 11.723.